

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA
ESCUELA MULTILINGÜE DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES**

**DISERTACIÓN DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADA MULTILINGÜE EN NEGOCIOS Y RELACIONES
INTERNACIONALES**

**ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DESMANTELAMIENTO IMPLEMENTADAS
POR EL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE (2002 - 2010) COMO MECANISMO PARA REPRIMIR EL
PODER POLÍTICO, MILITAR Y ECONÓMICO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS
DE COLOMBIA (FARC)**

PAULA DANIELA NARVÁEZ IZQUIERDO

**DICIEMBRE, 2016
QUITO – ECUADOR**

"Cuando lo creas todo perdido, no olvides que aún te queda el futuro, tu cerebro, tu voluntad y dos manos para cambiar tu destino"

Wernher von Braun

A los ciudadanos y ciudadanas del mundo, que en su incansable búsqueda de la paz, abrigan la esperanza de conseguirla.

*Gracias, a todos quienes a lo largo de este camino han
permanecido siempre a mi lado.*

INDICE GENERAL

I.	TEMA	1
II.	RESUMEN	1
III.	ABSTRACT	1
IV.	RÉSUMÉ	2
V.	INTRODUCCIÓN	4
	 CAPITULO I	 10
	LA UTILIZACIÓN DE TÁCTICAS POLÍTICAS Y MILITARES EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO	10
	1.1. El Estado Colombiano y el Estado Mayor de las FARC	10
	1.1.1. Pugna política	10
	1.1.2. Estrategias políticas de las FARC	13
	1.1.3. Injerencia de las FARC en la vida política de Colombia	17
	1.2. Las relaciones forjadas entre la guerrilla y la población civil	20
	1.2.1. Desatención Estatal	21
	1.2.2. Estrategias sociales	25
	1.2.3. Las FARC como poder paralelo al Estado	29
	1.3. Intervención militar de las FARC	33
	1.3.1. Estructura político-militar	33
	1.3.2. Estrategias militares	38
	1.3.3. Efectos	43
	 CAPITULO II	 46
	LA INJERENCIA DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES DE COMERCIO DE LAS FARC EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA	46
	2.1. La minería ilegal, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas de Comercio	46
	2.1.1. La minería ilegal: Extracción, tráfico y extorsión	46
	2.1.2. El tráfico ilegal de armas	51
	2.1.3. Consolidación económica de las FARC a partir de la minería ilegal, el tráfico de armas y otras fuentes ilícitas	55
	2.2. La injerencia del narcotráfico en el sector agrícola	60
	2.2.1. Narcotráfico: Producción y comercialización	60
	2.2.2. Consecuencias para el sector agrícola	65
	2.2.3. La Enfermedad Holandesa fruto de la producción coca	69
	2.3. El reflejo de las actividades ilegales de comercio en la economía Nacional	72
	2.3.1. La inversión nacional y extranjera	72
	2.3.2. El fisco	76
	2.3.3. Lavado de dinero y divisas	79
	 CAPITULO III	 84
	POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DESMANTELAMIENTO COMO HERRAMIENTA CONTRA EL PODER POLÍTICO, ECONÓMICO Y MILITAR DE LAS FARC	84
	3.1. Las políticas de seguridad y desmantelamiento implementadas por el Gobierno de Álvaro Uribe	84
	3.1.1. Política de Defensa y Seguridad Democrática (PSD) y Política	

	de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD)	84
3.1.2.	Operativos de desmantelamiento	89
3.1.3.	Ayuda internacional	93
3.2.	Resultados, ventajas y desventajas de la PSD, PCSD y los operativos militares	100
3.2.1.	Resultado de las políticas y operativos de desmantelamiento	100
3.2.2.	Ventajas de la PSD, PCSD y operativos de desmantelamiento	106
3.2.2.	Desventajas de la PSD, PCSD y operativos de desmantelamiento	110
3.3.	Repercusiones al poder militar, económico y político de las FARC	115
3.3.1.	Repercusiones militares y respuesta de las FARC	115
3.3.2.	Repercusiones económicas y respuesta de las FARC	118
3.3.2.	Repercusiones políticas y respuesta de las FARC	122
VI.	ANÁLISIS	126
VII.	CONCLUSIONES	137
VIII.	RECOMENDACIONES	145
IX.	LISTA DE REFERENCIAS	150

INDICE DE TABLAS, CUADROS Y GRAFICOS

GRÁFICO 1		
	POBREZA Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS FARC EN COLOMBIA 2002-2010	25
GRÁFICO 2		
	ORGANIGRAMA DE LAS FARC 2010	35
GRÁFICO 3		
	ESTRATEGIAS MILITARES DE LAS FARC POR BLOQUE	41
TABLA 1		
	PUNTOS DEL PLAN RENACER	42
GRÁFICO 4		
	PRINCIPALES ZONAS DE MINERÍA ILEGAL DE LAS FARC	48
GRÁFICO 5		
	RUTAS DEL TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS HACIA COLOMBIA	53
GRÁFICO 6		
	PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS BLOQUES DE LAS FARC	59
GRÁFICO 7		
	PRINCIPALES ZONAS COCALERAS DE LAS FARC	62
TABLA 2		
	IMPUESTOS FARC 2010	79
TABLA 3		
	ESTRATEGIAS DE LA PCSD	88
TABLA 4		
	PRINCIPALES OPERATIVOS MILITARES 2002-2010	92
TABLA 5		
	AYUDA ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS A COLOMBIA 2002-2010 MILLONES \$	95
GRÁFICO 8		
	BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA	96
GRÁFICO 9		
	LABORATORIOS DE PAZ DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA	98

TABLA 6		
	ENFOQUES DE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA DEL CONFLICTO	99
GRÁFICO 10		
	EVOLUCIÓN TERRITORIAL DE LAS FARC 2002-2010	103
TABLA 7		
	GASTO EN SEGURIDAD (%PIB) – CRECIMIENTO ECONÓMICO	105
TABLA 8		
	NÚMERO DE EFECTIVOS FUERZA PÚBLICA-GUERRILLEROS FARC	105
TABLA 9		
	ACCIONES BÉLICAS FARC	106

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1		
	LÍNEA DE TIEMPO FARC – HECHOS PRESENTADOS EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	169

I. TEMA

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DESMANTELAMIENTO IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE (2002 - 2010) COMO MECANISMO PARA REPRIMIR EL PODER POLÍTICO, MILITAR Y ECONÓMICO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC)

II. RESUMEN

La insatisfacción en materia social, política y económica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC con el gobierno impulsa a la guerrilla a sublevarse y erigirse como un grupo insurgente que desconoce la autoridad de los líderes políticos colombianos. Simultáneamente las FARC desarrollan estrategias políticas, militares y económicas que les otorgan las capacidades y el poder relativo necesario para sobrevivir y consolidarse como la organización subversiva más poderosa del país y como una amenaza crítica tanto para la estructura democrática del Estado así como para la seguridad de la nación. Ante este escenario Álvaro Uribe instaura en el 2002 el principio ordenador de la Seguridad Democrática como el medio que a lo largo de su mandato, le permite mermar las capacidades económicas, militares y territoriales de la guerrilla y consecuentemente disminuir el poder de las FARC. Este contexto analizado desde el neorrealismo político muestra que aunque las medidas de Uribe debilitan a la organización, estas son insuficientes para erradicar a la guerrilla de Colombia, y que además avivan el deseo de supervivencia de las FARC, impulsándolas a recuperar su capacidad combativa para fortalecerse frente al enemigo. El trabajo se desarrolla a través de una investigación explicativa de carácter inductivo-deductivo sustentada con análisis documental.

Palabras Clave: FARC, Álvaro Uribe, supervivencia, seguridad, actividades ilegales de comercio, Seguridad Democrática

III. ABSTRACT

The dissatisfaction with the social, political and economic management of the Colombian government encourages the Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC to revolt against the régime and rise as an insurgent group that discards the authority of the political leaders of the country. Simultaneously, the FARC develops political, military and economic strategies that grant them the necessary capabilities and relative power to survive and consolidate as the

most powerful subversive organization of Colombia as well as a grave menace to the democratic structure of the State and to the security of the nation. Faced with this scenario, in 2002 Alvaro Uribe established the ordering principle of the Democratic Security as the instrument, which throughout his mandate, enabled the undermining of the economic, military and territorial capabilities of the guerrilla and in consequence the reduction of its power. This context, analyzed through the political neorealism perspective, illustrates that even though the means of Uribe weakened the organization, they were insufficient to eradicate the guerrilla from Colombia; furthermore, they stroke the guerrilla's desire of survival, encouraging them to recover its combative capabilities in order to overcome the enemy. This study is led by an explanatory research supported by the inductive-deductive methodological approach and documentary analysis.

Keywords: FARC, Álvaro Uribe, survival, security, illegal trade activities, Democratic Security

IV. RESUMÉ

L'insatisfaction sociale, politique et économique avec le gouvernement encourage les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie FARC à se soulever et à s'ériger comme un groupe insurgé qu'ignore l'autorité des dirigeants politiques colombiens. Parallèlement, les FARC développent des stratégies politiques, militaires et économiques qui leur octroient les capacités et le pouvoir relative nécessaire pour assurer sa survie et se consolider comme l'organisation insurgée la plus puissante du pays et comme une menace critique tant pour la structure démocratique de l'Etat ainsi que pour la sécurité de la nation. Devant cette situation Álvaro Uribe établit en 2002 le principe ordonnateur de la Sécurité Démocratique comme le outil qui, pendant son mandat, lui permettre de réduire les capacités économiques militaires et territoriales du groupe et en conséquence diminuer son pouvoir. Ce contexte, analysé avec la perspective du néoréalisme politique, éclaire que même si les mesures d'Uribe débilitent à l'organisation, elles ne sont pas suffisantes pour éradiquer au groupe de la Colombie, de plus, les politiques du président avivent le désir de survie des FARC et les poussent à récupérer sa capacité combative pour vaincre l'ennemie. Cette étude se développe à travers d'une recherche explicative de caractère inductive-déductive soutenu avec d'analyse documentaire.

Mots-clés: FARC, Álvaro Uribe, survie, sécurité, activités illégales de commerce, Sécurité Démocratique

V. INTRODUCCIÓN

El conflicto armado colombiano entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC se origina en 1964 a partir de la insatisfacción del grupo con la estructura impuesta por los regímenes políticos colombianos, lo que produjo en la guerrilla el deseo de sublevación a fin de instaurar en el país un mandato que satisfaga tanto sus intereses como los de la población rural y vulnerable y no solo los de las élites colombianas. Este anhelo se refleja en la lucha permanente entre las FARC y los diferentes mandatarios de la República. En 2002, al posicionarse como Presidente Álvaro Uribe la dinámica del conflicto ascendió a niveles históricos de violencia debido al rechazo de las FARC hacia el mandatario y su latente deseo de conseguir el poder en Colombia. Con el objetivo de arremeter contra el régimen de Uribe y lograr su consolidación como organización política, militar y económica, la guerrilla desarrolló estrategias que representaron una amenaza para el gobierno. Las estrategias se basaron en el robustecimiento de las relaciones políticas de la organización con la población civil y con actores relevantes en la escena política colombiana e internacional; su consolidación como fuerza militar y combativa que ejerza poder sobre el territorio y el electorado; y la creación de medios económicos que le garanticen su supervivencia. Ante el evidente fortalecimiento de las FARC, el régimen de Álvaro Uribe, plantea mecanismos políticos y militares a través de los cuales recobre y consolide el poder a nivel nacional. Estos se tradujeron en la Política de Seguridad Democrática, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, el Plan Patriota y el Plan Consolidación.

Bajo este contexto, se plantea la siguiente hipótesis: las FARC, como uno de los actores más relevantes del conflicto armado colombiano, utilizaron tácticas políticas y militares para fortalecer su presencia en esos ámbitos; lo cual, a la par con su incursión en actividades ilegales de comercio, repercutiría en la economía colombiana; en este escenario, las políticas de seguridad y desmantelamiento aplicadas en el gobierno de Álvaro Uribe servirían para mermar el poder de las FARC en los ejes político, militar y económico. La investigación tiene además como objetivo el análisis de las políticas de seguridad y desmantelamiento implementadas por el Gobierno de Álvaro Uribe como mecanismo para reprimir el poder político, militar y económico de las FARC. Para que ésta pueda comprenderse de manera integral, se la ha dividido en tres capítulos. En primer lugar se analiza el nacimiento del conflicto

político entre el gobierno colombiano y las FARC, así como las estrategias político-militares a través de las cuales la organización frenó los ataques del Estado. En el segundo capítulo, se detalla cómo la proliferación de las actividades ilegales de comercio de la guerrilla influyó en su consolidación económica y en la economía del país. Para concluir, se exponen las herramientas político-militares implementadas por Álvaro Uribe para suprimir a las FARC y los resultados que estas tuvieron sobre la nación y el grupo guerrillero.

La investigación es de tipo explicativa, pues no se pretende únicamente describir hechos y sucesos; por el contrario se analizarán las razones (causas) que los originaron así como las diferentes variables que contribuyeron para generar una consecuencia (efectos). Bajo este enfoque se propone la búsqueda de información en publicaciones nacionales e internacionales, Estatales y no gubernamentales para, con los recursos necesarios, establecer y comprender los motivos que proliferaron la lucha armada entre las FARC y el gobierno. A partir de un análisis preliminar en el que se confronte y ordene lógicamente la información y mediante planteamientos que cuestionen cómo las medidas implementadas por Álvaro Uribe contribuyeron para mermar el poder económico, político y militar de las FARC, y cómo las estrategias políticas, económicas y militares de la organización permitieron su consolidación como el grupo guerrillero más poderoso del país, se podrá posteriormente concluir de manera crítica y sustentada cuáles fueron los efectos que debido a la dinámica individual y bilateral de estos actores, no permitieron la finalización del conflicto. Se considera además, que el hecho que esta investigación no se base en la descripción pura de los sucesos es una ventaja pues generará nueva información (conclusiones) a partir la ya conocida.

Se empleará además el método inductivo-deductivo, proceso lógico formal que se basa en la recopilación y estudio de datos particulares y específicos de una temática para posteriormente corroborar su validez y relevancia con respecto al tema de investigación, e inferir conclusiones y recomendaciones de éstas en contextos generales. El proceso lógico de la metodología inductiva-deductiva surge a partir de la búsqueda y análisis de premisas, que en su relación generan nueva información, producto de la

información anterior, a partir de la cual, el investigador está en capacidad de abstraer conclusiones, establecer proposiciones, soluciones y nuevas posturas.

Aplicada en la realidad del conflicto armado, esta metodología analiza la información particular de los actores involucrados en la lucha, es decir, origen, motivaciones, intereses, objetivos y otros elementos que inciden en su comportamiento y los impulsan a establecer estrategias de supervivencia y primacía frente al otro. El estudio de las particularidades de estos actores permite entender su interacción en un contexto general, de lo cual se infiere el análisis, conclusiones y recomendaciones, de cómo estas variables se entretejen y permiten determinar la problemática del conflicto en el periodo 2002-2010 y de la relación antagonica que crearon. A lo largo del trabajo se evidencia cómo las características individuales tanto del Estado como de las FARC y su interacción se acoplan a los postulados generales planteados por el neorrealismo, gracias a los cuales podrá comprobarse la efectividad de la teoría en este caso específico. Mediante el uso del método inductivo-deductivo, cuyo análisis permitió el estudio de las particularidades de los actores involucrados en el conflicto armado, se evitó cometer falacias de generalización al momento del análisis y conclusiones del trabajo. Las premisas consideradas como verdaderas y válidas, debido al trabajo de investigación realizado, demuestran de manera contundente que los demás procesos de esta investigación, tanto análisis y conclusiones se ajustan a características del método inductivo-deductivo.

Para el desarrollo de este trabajo se han tomado en cuenta los fundamentos del neorrealismo político, el cual, siguiendo los postulados del realismo, identifica al poder y a la seguridad de un Estado como la piedra angular de su supervivencia, consolidación y consecución de objetivos; sin embargo difiere de la escuela realista al reconocer que a pesar de que el Estado es la unidad principal del sistema internacional, la participación de los actores no Estatales, políticos, sociales, económicos y militares, es también relevante, ya que al ejercer presión para el establecimiento de medidas político-económicas que les garanticen su fortalecimiento y satisfagan sus necesidades individuales, estos generan diferentes resultados y afectan a la estructura, tanto del sistema doméstico como del internacional (Gilpin, 2001:17; Waltz, 1979: 137, 141).

El neorrealismo sostiene además que en los sistemas políticos *“el estado natural es el de la guerra”* (Waltz, 1979:151), no porque ésta sea inherente a la naturaleza humana, sino porque la estructura en la que se sostienen estos sistemas impulsa a sus actores a competir entre ellos (Dunne, Kurky et Smith, 2007: 72). Bajo esta premisa, nace el deseo de supervivencia, que se logrará a través del poder relativo de cada actor. Este elemento se define como la herramienta que garantiza control, autonomía frente a los demás, capacidad de decisión y acción, mayor seguridad y finalmente, influencia (Waltz, 1979: 146, 283, 248). Para el neorrealismo, el poder se refleja en las capacidades de las unidades, las cuales se miden de acuerdo al tamaño de su territorio y población, recursos, capacidad militar, tecnológica y económica, e injerencia y estabilidad política (Allard, 2004:8; Waltz, 1979:146,194). Cabe mencionar que en esta escuela, el poder no es el fin último de las unidades político-económicas, sino el medio con el que éstas se manejan y son capaces de proporcionar seguridad y sobrevivir (Waltz, 1990: 36).

A lo largo de la disertación, se tomarán en cuenta los postulados de Kenneth Waltz y Robert Gilpin como principales autores neorrealistas. En primer lugar, Waltz (1979: 91, 180) se refiere al neorrealismo como una teoría sistémica que explica los cambios y resultados de los sistemas políticos nacionales o internacionales a través del comportamiento unitario de sus elementos (Estados, actores no estatales). Para comprender estos resultados, el autor contrasta el sistema internacional y los sistemas domésticos: por un lado, el primero es anárquico, autónomo y carente de un órgano supremo y regulador; por otro, los sistemas políticos internos son jerárquicos (relaciones de sub y supra ordenación entre unidades), centralizados y están regidos por el principio ordenador dispuesto por el Estado (Kahhat, 2005: 10,51; Waltz, 1979: 123, 139).

Asimismo, Waltz (1979:119, 121,123) define a los sistemas políticos como elementos compuestos por una estructura y por unidades que interactúan en él. La estructura de cada sistema está definida por un principio ordenador que regula el comportamiento y las relaciones de estas unidades; por la diferenciación de las funciones que las unidades ejecutan dentro del sistema; y por sus capacidades. Cabe mencionar que la estructura es un sinónimo de límites y ordenamiento, por cuanto restringe el comportamiento de las unidades, premiando y condenando ciertos actos (Waltz, 1979:138). Además,

las estructuras son dinámicas, pues pueden modificarse a través de un cambio interno, como una revolución (pacífica o violenta) que transforme las bases de un ordenamiento (Waltz, 1979:104-105). Del mismo modo, se consideran relevantes los supuestos neorrealistas del dilema de la seguridad y del balance del poder que propone Waltz, por cuanto a través del primero se infiere que en los sistemas políticos, la certeza de las intenciones de las unidades es inexistente, por tal motivo cada actor representa un peligro para la seguridad de los demás (Dunne, et al, 2007: 73-74). Sobre la teoría del equilibrio de poder, el autor establece que su objetivo es restaurar el desbalance de poder en los sistemas anárquicos originado por los intereses de supervivencia y la maximización de beneficios de cada actor (Waltz, 1979:178-188).

Por otro lado, Gilpin (2001:16-18) plantea un neorrealismo estado-céntrico, a través del cual indica que además de ser la seguridad y la independencia política los requerimientos básicos de los Estados, la moral es también un elemento necesario en la toma de decisiones. Además, exalta la importancia de la coyuntura económica interna y externa como elementos determinantes del planteamiento de políticas domésticas e internacionales, es decir que para el autor, existe una relación de supra ordinación de la economía sobre la política (Allard, 2004:13). Con respecto a las relaciones de los sistemas políticos y a su estructura, Gilpin asegura que solamente las élites político-económicas de un sistema son capaces de generar cambios estructurales y que, su comportamiento influye directamente en los actores con menor poder económico o político (Allard, 2004:8; Gilpin, 1981:75). Finalmente, en lo concerniente a la consecución de objetivos, Waltz (1979: 154) y Gilpin (1981:57) apelan a la racionalidad de los actores en la búsqueda y ejecución de políticas que favorezcan sus intereses y les permitan maximizarlos al menor costo; pero también al principio de interdependencia, a través del cual las unidades actúan en conjunto para desarrollarse.

La relevancia de someter a esta investigación bajo la lupa neorrealista radica en la importancia que la teoría le otorga al reconocimiento y a la participación de actores no Estatales en los sistemas nacionales e internacionales, pero también debido a que los postulados neorrealistas de Waltz y Gilpin se entretajan con la realidad del conflicto armado colombiano por cuanto permiten un análisis profundo del Estado y las FARC y del contexto en el cual se desarrollan teniendo en cuenta al poder y a la supervivencia como la

primicia a partir de la cual nacen y mueren los objetivos de ambas partes. Al tratarse de una teoría sistémica y estructural el neorrealismo permite realizar un análisis en el que pueden desagregarse las características propias de las unidades de estudio para examinar su comportamiento individual y las relaciones político-económicas, sociales y militares (poder, antagonismo, cooperación) forjadas entre ellos. Asimismo este tema responde a una problemática de seguridad que enfatiza la pugna y las acciones militares del Estado y de las FARC para lograr su supervivencia, consecuentemente las nociones neorrealistas del uso de la fuerza y el fortalecimiento de las capacidades relativas se consideran imprescindibles para comprender y argumentar el comportamiento de los actores.

El móvil para realizar este trabajo responde en que las FARC se han consolidado por más de medio siglo como un actor fundamental en Colombia y en el contexto mundial debido a su injerencia, trascendencia y a su interacción con la sociedad civil, los regímenes colombianos y otros actores internacionales. La importancia del análisis del conflicto armado con las FARC recae en que no se ha presentado una solución definitiva o parcial que cese la insatisfacción de la guerrilla con los regímenes políticos colombianos y que mitigue los problemas que el conflicto ha acarreado.

La investigación se basa en los lineamientos de la carrera Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales, y responde a un trabajo multidisciplinario que analiza la situación del conflicto armado a través de una visión de apertura, imparcialidad, entendimiento y un enfoque integral político, económico y militar que toma en cuenta nuevas variables y elementos. De esta manera se pretende generar resultados críticos que permitan la participación activa de los profesionales de la carrera, de la comunidad académica y de entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, en la generación de ideas y nuevas soluciones e investigaciones en torno a este tema.

CAPITULO I

LA UTILIZACIÓN DE TÁCTICAS POLÍTICAS Y MILITARES EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

1.1. El Estado Colombiano y el Estado Mayor Central de las FARC

Desde su nacimiento en 1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC se propusieron la disolución del Estado colombiano para implantar un régimen socialista, en el que cesen las arbitrariedades del régimen capitalista y las élites colombianas y se respeten los derechos campesinos. A partir de este ideal revolucionario, las FARC establecieron estrategias políticas que les garanticen su participación legítima como organización política y el reconocimiento del Estado y de los habitantes, desencadenando una lucha contra el gobierno colombiano por el poder político del país. Analizadas a través del enfoque neorrealista, las tácticas políticas de las FARC que se exponen en este subcapítulo permiten identificar la evolución, las falencias y aciertos de la organización, su adaptación a la nueva realidad colombiana y su lucha por consolidarse como un grupo guerrillero influyente en la vida política del país. Asimismo se manifiesta la injerencia de las FARC a nivel nacional a pesar de no ser una organización política reconocida.

1.1.1. Pugna política

Consecuente a la rápida expansión del latifundio en Colombia y a la desatención Estatal para el sector rural, se establecen en la década de los 50, las Repúblicas Independientes: zonas de lucha agraria que utilizaban métodos de acumulación y protección de tierras productivas y en donde se crearon los grupos de resistencia campesina político-militares contra los abusos del Estado. Con el objetivo de erradicar a las autodefensas armadas, el 27 de mayo de 1964 el ejército colombiano inicia la operación militar “Marquetalia”, considerada como el ataque que dio origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, grupo guerrillero político-militar integrado por 48 hombres y comandado por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2014: 67; Medina et Uribe, 2002:26, 34, 113). De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014: 67) a pesar de que surgieron como autodefensas armadas, las FARC se convirtieron en una organización política ya que se apropiaron de los postulados de la ideología marxista-leninista y bolivariana, y su historia se fusiona con la lucha campesina del Partido Comunista Colombiano PCC (Medina et al, 2002:32).

Con el objetivo de salvaguardar los derechos de la población rural, desde un inicio las FARC buscaron anular al gobierno y a las élites político-económicas del país (Medina et al, 2002:35; Rosell, 2009:10), puesto que como indica Gilpin (2001:18; 1979:105,108), dentro de los sistemas sean estos nacionales o internacionales, los grupos de poder velan de manera prioritaria por la satisfacción de sus necesidades y por sus intereses, más no por los del conglomerado.

En los periodos de gobierno de Álvaro Uribe (Agosto 2002- Agosto 2006; Agosto 2006 -Agosto 2010) la organización basó su lucha contra la decadencia del Estado de derecho e irrespeto de la ley (Rosell, 2009:12). Efectivamente, el favoritismo político y económico del régimen Uribista a las élites colombianas, el despotismo del régimen, la ineficiencia y corrupción de las instituciones Estatales, la exclusión y deslegitimación social, las escasas políticas a favor de los derechos sociales, las incipientes garantías y libertades civiles, la privatización de los recursos naturales y la injerencia de Estados Unidos y organismos multinacionales en la política interna y externa del país (Vargas, 2004:86,87; Van Engelant et al, 2008: 140,141) enaltecieron el ideal fariano de arrebatarle el poder político al Estado y convertirlo en uno socialista (Medina et al, 2002:35). Con la posesión presidencial de Uribe, las FARC reconocieron claramente a un enemigo político cuyo régimen no respetó a los movimientos de oposición política y social sino que los deslegitimizó y satanizó, convirtiéndose éste en el punto político que más afectó a la organización (Vargas, 2004:97). De acuerdo con Vargas (2004:97), Van Engelant y Rudolph (2008: 145), la oposición política en Colombia es inexistente ya que esta se legitima únicamente cuando no amenaza al poder y estabilidad Estatal, por tal motivo el precepto de la patria democrática de Uribe es falso para las FARC.

Se considera que la satanización de Uribe hacia la guerrilla radica en el temor del mandatario al reconocimiento político de las FARC, puesto que estas buscan apropiarse del poder gubernamental y perjudicar al régimen (Van Engelant et al, 2008: 145). Frente a esta amenaza, Álvaro Uribe (s/f: 1) categorizó a la organización como grupo terrorista no político, basándose en que a diferencia de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, las FARC han impedido a lo largo de su historia el desarrollo de la democracia, violentando los derechos y libertades de la ciudadanía, y se han consolidado económicamente a través de actividades ilegales. Además, el Estado hace una

diferenciación entre su estatus político y el de la guerrilla, afirmando que su régimen es legítimo debido al apoyo popular y a las vías políticas legales y democráticas con las que llegó al poder. Por tanto, al carecer las FARC de tales cualidades, Uribe niega la existencia política del grupo (Rosell, 2009:25). Por su parte, las FARC aceptan su estatus de actor no político y defienden su gestión clandestina asegurando que permanecerá igual hasta que el gobierno les otorgue las mismas garantías y derechos que a otros partidos y establezca verdaderos cambios a la política interna colombiana (Van Engelant et al, 2008:145-149).

Álvaro Uribe ha enfatizado que mientras que en Colombia se obedece a un régimen democrático inclusivo, "*generoso, pluralista, institucional y libre*" (Rosell, 2009:18), las FARC irrespetan esta normativa y buscan acabar con la democracia en el país, hecho que deslegitima su actividad y existencia; por ende, la presencia de una pugna política y un conflicto civil en Colombia (Rosell, 2009:14,16). Ante esto, Uribe no reconoció a las FARC como actor político, catalogando a los guerrilleros como "*terroristas ricos*" (Rosell, 2009:16) ya que a causa de los actos barbáricos cometidos contra la población, las actividades ilegales de comercio y la utilización de armas, las FARC han enaltecido su lucha militar y su nexos con organizaciones narcotraficantes, más no el ideal fariano. Con esta negativa, el gobierno de Uribe despolitizó el conflicto interno, desconociendo las causas históricas políticas, sociales y económicas que llevaron a la guerrilla a la sublevación, anulando consecuentemente el proyecto y planes políticos de las FARC a nivel nacional e internacional (Rosell, 2009:3, 16,24). Torres (2012:284) y Salazar (2011: s/n) consideran que Álvaro Uribe tampoco reconoció la existencia de un conflicto armado interno porque de esta manera, al cumplir las FARC con los requisitos estipulados en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra¹, el grupo se regularizaría como ejército beligerante.

Las FARC sostienen que una opción para finalizar el conflicto armado sería a través de su reconocimiento como ejército beligerante² (Van Engelant et al, 2008:145), por cuanto al ser reconocido como actor jurídico nacional e internacional las relaciones políticas y diplomáticas entre la guerrilla y el Estado

¹ El estatus beligerante se reconoce cuando el grupo armado es organizado, es dirigido por un mando responsable, controla una parte del territorio nacional en el que ejecuta sus actividades militares, y respeta el DIH Torres, 2012:280).

² En 2008, el estatus de ejército beligerante de la guerrilla fue reconocido por Venezuela, justificando su decisión en que las FARC no son una organización terrorista, sino una que se opone y no se subyuga ante el régimen (López, 2007: 14).

se reanudarían. Además, bajo este estatus la organización estaría obligada a cumplir con las normas del Derecho Internacional Humanitario DIH, con las que su accionar bélico y prácticas de coacción se regularían (Salazar, 2011: s/n; Torres, 2012:280). En consecuencia, Rosell (2009:15,17) sostiene que el gobierno, al desconocer este estatus, etiquetar al grupo como terrorista y perjudicial para el régimen democrático, no solo vedó su participación política sino que descartó una alternativa de paz y forzó a la organización a modificar su discurso político e intensificar las agresiones armadas contra el Estado con el fin de lograr su reconocimiento político, alcanzar el poder e instaurar un mandato socialista (Medina et al, 2002:20; Van Engelant et al, 2008: 141).

Cabe mencionar que el comportamiento individual, así como la interacción de las unidades de un sistema doméstico o internacional, pueden modificar tanto a su estructura como al comportamiento bilateral y multilateral de estos actores, y consecuentemente limitarlo inversamente y acarrear consecuencias para quienes componen el sistema (Waltz, 1979:110-112). En el contexto del conflicto colombiano, el comportamiento del Estado, influyó sobre las FARC y viceversa, estableciendo en el país una estructura basada en la interacción de éstos actores. Esta dinámica incidió para que la guerrilla, el Estado y los habitantes adquieran nuevos atributos o características: las FARC se consolidaron como un grupo anárquico³, insurgente y como una amenaza contra la estabilidad del país; el gobierno como legítimo protector de la nación y finalmente el pueblo como la víctima del conflicto (Rosell, 2009:17).

1.1.2. Estrategias políticas de las FARC

Waltz (2000:11) plantea que en los sistemas políticos nacionales, los Estados están legítimamente reconocidos como unidades jerárquicas, que a través de una relación de supra ordenación garantizan a sus súbditos (electorado) orden y gobernabilidad, y por ende, se definen como buenos. No obstante, a pesar de que en ciertos contextos, si pueden atribuírseles las

³A lo largo de la investigación el término anarquía o anárquico como atributo de las FARC se sustenta en el postulado neorrealista de Kenneth Waltz que caracteriza a los actores disidentes de un régimen como los "sectores anárquicos" (Waltz, 1979: 170) que surgen dentro de los sistemas. Para el autor, las unidades, que buscan generar cambios estructurales mediante revoluciones pacíficas o violentas con el objetivo de derrocar a las élites y grupos de poder, y son además capaces de vulnerar la seguridad nacional o internacional y establecer un nuevo ordenamiento, son anárquicas. (Waltz, 1979: 137). Por tal motivo en el contexto de este trabajo y en el marco del neorrealismo de Waltz, las FARC representan un grupo anárquico debido a los mecanismos y estrategias de "caos y desorden" (Waltz, 1976: 168) que implementan para alcanzar sus objetivos. En efecto, el atributo de anarquía de las FARC no responde a que la organización guerrillera carezca de orden o que su objetivo responda al desorden público, pues contrariamente, la estructura fariana es jerarquizada y su objetivo fundacional busca cambiar el sistema actual e implantar un nuevo ordenamiento estructural.

características mencionadas a los regímenes nacionales, en otros, éstos son sinónimos de violencia y opresión (Waltz, 1979:152,153, 168). Para las FARC, el gobierno Uribista representó precisamente un régimen autoritario y represivo que no cumplió con su cometido político, económico y social; por tal motivo, desde la posesión del Presidente, la organización se planteó derrocarlo para proteger la identidad, los derechos fundamentales y los intereses de la población campesina y popular (Medina et al, 2002:11,26-30). El neorrealismo sugiere que a través de un cambio en los principios ordenadores y la ruptura de la estructura de un régimen, los grupos contrarios a éste lograrían la apropiación de los medios de control y contarían con mayor poder relativo que su adversario (Waltz, 1979: 146,194). Por esta razón, el discurso político de las FARC estableció como objetivo principal *"la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario"* (Torrijos, 2004:304) comandado por la organización.

La principal estrategia política de las FARC instaurada desde que se consolidaron como un grupo insurgente en 1964, se basa en la difusión de su ideología dentro y fuera de la organización con el objetivo de que todos los miembros tengan una formación integral y participación activa en la gestión política del grupo. Respondiendo a esta estrategia, la guerrilla está diseñada para impartir su doctrina y valores a todos sus miembros de manera permanente a través de las Células Políticas, organismos responsables de esta formación (Medina et al, 2002:42-43). Kahhat (2005: 10,13), Medina y Uribe (2002: 147, 148) argumentan que a partir de su idea de aleccionamiento político y la transformación del Estado, las FARC se plantearon la creación de un organismo que tutele su revolución política y, que a largo plazo les permita convertirse en un Estado con los medios necesarios para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir leyes y derechos. No obstante a causa de la recriminación y segregación hacia los grupos insurgentes y políticos disidentes del régimen, la imposibilidad de realizar abiertamente una campaña política, y en virtud del peligro que esta actividad representa para los integrantes de las FARC, la organización decidió que su movimiento debía ser clandestino. De esta manera se crean en el año 2000 el Partido Comunista Colombiano Clandestino PCC3 y el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia MBNC.

La creación de estos movimientos responde a la necesidad de las FARC de tener a su disposición estructuras políticas legales o ilegales que

complementen de manera integral su lucha político-militar. El PCC3 y el MBNC se establecieron como organizaciones clandestinas para que la lucha política de la organización no perezca ante la militar. Su objetivo principal fue la difusión de la ideología y el aleccionamiento de masas a través de la infiltración y control de sectores estratégicos políticos, económicos y sociales de Colombia (CNMH, 2014:236). Por un lado, mientras que el MBNC se encargó del fortalecimiento y reclutamiento de partidarios afines a los ideales de las FARC (Medina et al, 2002:148), en el PCC3 se realizaron misiones de infiltración en medios de comunicación, círculos políticos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, y de proselitismo político en entidades educativas superiores, movimientos sociales, gremiales y sindicatos; además los militantes del PCC3, recibieron inducción en las relaciones internacionales, ciencias y economía política, entrenamiento militar, bélico y de inteligencia (CNMH, 2014: 237,239).

Medina y Uribe (2002: 37,38) establecieron que a medida que la estructura social de Colombia evolucionó y la mayoría de la población colombiana se trasladó a las urbes, el discurso fariano se adaptó y en 1978, en la Sexta Conferencia guerrillera se fomentó paulatinamente el reclutamiento de personal urbano, académico y profesional y ya no únicamente el reconocimiento y exaltación de la población rural (CNMH, 2014:83; Medina et al, 2002:10-65). El objetivo de las FARC fue contar con el respaldo de la población urbana para penetrar con mayor facilidad en esas zonas y hacerse al poder. En efecto, para la guerrilla, la toma de los espacios urbanos es trascendental pues es ahí donde se radican los grupos de poder del país y pueden forjarse soluciones estructurales para la problemática política, social y económica de Colombia (Medina et al, 2002:63). Por tal motivo, el trabajo político con los movimientos clandestinos desde el 2000, representó para las FARC una estrategia política que permitió su evolución de un grupo rural a uno que participe también con diferentes grupos sociales a nivel nacional, disuadiendo de sobremanera a las fuerzas de inteligencia del Estado puesto que su percepción del guerrillero (campesino, sin educación, armado) no encajó en el nuevo perfil de los miembros de las FARC. La labor de estas organizaciones clandestinas fue agilizar el proceso de urbanización de la guerrilla sin la necesidad de un conflicto armado, factor que representó un peligro para el aparato Estatal pues se vulneró su seguridad e institucionalidad (CNMH, 2014:223).

De acuerdo con Villamarín (2012: s/n), las estrategias de infiltración y adoctrinamiento de las FARC resultaron exitosas en la administración de Álvaro Uribe porque se valieron de la demagogia, la debilidad y corrupción institucional, para atacar a las estructuras del gobierno. Además, el enfoque meramente militar del Presidente para aplacar a las FARC le otorgó a la organización ventaja en el contexto político, y, al oponerse a su ideario, las acercó a gobiernos como Venezuela que compartían su ideología (López, 2007: 14); de esta manera, al sentirse amenazadas por el poder enemigo, las FARC efectivizaron el “ascenso del interés común” que según Waltz (1979: 106) refleja la cooperación entre unidades para alcanzar un fin de interés colectivo, en este caso, la consolidación del socialismo sobre los regímenes capitalistas dominantes. En efecto, la guerrilla forjó relaciones con organizaciones y movimientos socialistas latinoamericanos, lo que impulsó su representatividad internacional, cabida y reconocimiento extranjero (Montero, 2012a: s/n).

Pécaut (2008:47) considera que a pesar de la efectividad de las estrategias políticas de la guerrilla, éstas se debilitaron a causa de la dificultad de la aplicación de mecanismos de control y disciplina dentro de la organización y debido a la dureza con la que las FARC impusieron su ideología a la oposición, a grupos afines y a la población puesto que su doctrina, que enaltece la idea de una sociedad civil armada, únicamente generó rechazo y representó un retroceso político y deslegitimación nacional e internacional. Asimismo Medina y Uribe (2002:61,64) sugieren que otra de las razones del fallo en la consecución de los logros políticos de las FARC es que a causa del origen campesino de sus miembros (90%) (Medina et al, 2002:64), continúan siendo una organización rural, cuya lucha y discurso político se centran en el beneficio exclusivo de este sector. En efecto, los bajos niveles de escolaridad de los guerrilleros dificultan el proceso de formación política, económica y social necesarios para comprender de manera integral el ideal fariano, repercutiendo en el desarrollo político-militar y organizacional de las FARC (CNMH, 2014:116; Medina et al, 2002:85).

Por último, se reprocha principalmente que las FARC se han alejado de sus objetivos políticos y de la población colombiana puesto que con la intensificación de su lucha militar a partir del 2002, con la ejecución de sus actividades ilegales y los inexistentes métodos de regulación y rendición de

cuentas a la ciudadanía, no promueven ni la democracia ni el cambio social que profesan (Transnational Institute, 2008: s/n).

1.1.3 Injerencia de las FARC en la vida política de Colombia

Tanto Waltz (1979: 137, 141) como Gilpin (2001:21) resaltan la importancia y reconocimiento de los actores no Estatales en la realidad político-económica de un sistema, puesto que con el objetivo de satisfacer sus intereses o simplemente para garantizar su supervivencia, estas unidades ejercen presión a través de estrategias, mecanismos y conductas que afectan, alteran y modifican los resultados esperados de un régimen así como de su estructura establecida. Este postulado se refleja en contexto político entre el Estado colombiano y las FARC, ya que a pesar de no estar reconocidas como una organización legítima en Colombia o en el ámbito internacional, ni ser capaces de participar legalmente como representantes políticos del ideario fariano, la guerrilla juega un rol significativo en la vida política de la nación, puesto que han logrado influenciarla, a través de acciones, declaraciones públicas y ataques contra la población civil e infraestructura. Las FARC han conseguido también desestabilizar procesos electorales, imponer personal político de su preferencia y para su beneficio e instaurar en sus territorios de ocupación una variante a la participación e autoridad política tradicional. Estas estrategias les ha garantizado mayor trascendencia y mejores resultados que a cualquier partido político reconocido (International Crisis Group, 2011; Van Engellant et al, 2008: x, 147; Vargas, 2010:165).

La interferencia política de las FARC en lo referente a la desestabilización de procesos electorales nace, de acuerdo con López (2010:95), desde la campaña política hasta la posesión, permanencia y desarrollo de actividades de los candidatos electos. En efecto, en zonas alejadas y sin control de la Fuerza Pública⁴, la organización utiliza tácticas de intimidación, sabotaje y hostigamiento para arremeter contra los aspirantes,

⁴ La Fuerza Pública está compuesta por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). Adyacente a la gestión de la Fuerza Pública, cabe mencionar al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, como la entidad encargada de realizar principalmente labores de inteligencia estratégica, antiterrorismo y narcotráfico, investigación criminal, control migratorio, seguridad y en capacidad de asumir las competencias de la Policía Judicial. El DAS nace en 1953 en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, sin embargo la organización fue disuelta por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011 debido a los escándalos de espionaje ilegal a líderes de oposición. A lo largo de su historia el DAS ha sido inculpaado de filtrar información y establecer alianzas con grupos paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y narcotraficantes; también se le atribuyen amenazas a personal civil, violaciones de derechos humanos como torturas y desapariciones forzadas y otros actos coercitivos que no fueron regulados o penados por el Estado (Amnistía Internacional, 147, 149,150; El Tiempo, 2011, s/n).

suspender elecciones u obligarlos a renunciar a su cargo⁵ (CNMH, 2014, 257). Asimismo, a pesar de no favorecer a ningún partido político en particular, las FARC interfieren en los resultados electorales a través del patrocinio, aval y protección a candidatos y líderes políticos o sociales de su preferencia, ajustándolos para que respondan a sus intereses puntuales en una localización geográfica específica (López, 2010:27-91); por ejemplo, únicamente en el 2009, 27 miembros del gobierno enfrentaron acusaciones por su presunta participación con la guerrilla (International Crisis Group, 2011: 12).

Con esto, las FARC no obstaculizaron únicamente procesos democráticos, sino que además fomentaron la corrupción especialmente en las alcaldías, pues los funcionarios estaban obligados a otorgar favores a la guerrilla, como la construcción de obras públicas y la contratación de personal impuesto por la organización (CNMH, 257-258:2014). Consecuentemente, aunque el control político de las FARC no es fuerte en todas las regiones del país, al interferir en asuntos políticos y someter a los candidatos y al electorado a su voluntad, la guerrilla vuelve antidemocrático al proceso electoral; asimismo, la presión y el miedo que infunden en los votantes coartan sus derechos civiles e incrementa el ausentismo electoral, lo que sume a la población en incertidumbre política (López, 2010:23-27).

En lo referente a las tácticas utilizadas para interferir en la política colombiana, Van Engellant y Rudolph (2008:146) han caracterizado a las FARC como una organización que recurre a prácticas coercitivas como el secuestro, asesinato, acosos y extorsiones. Esto la convirtió en la guerrilla colombiana que más actos de violencia política perpetró desde 1997 hasta 2008 (International Crisis Group, 2011: 6). Con respecto a los secuestros y homicidios políticos, en su informe “La Violencia Electoral en Colombia 1997-2006”, la Fundación Seguridad y Democracia (s/f:5-8), establece que entre el 2001 y 2006, las FARC cometieron 112 y 40 respectivamente; estas cifras representan el 40.5% y 30.5% del total ejecutado por otros grupos guerrilleros y criminales, siendo la región más afectada por la organización la Costa Caribe con 21 secuestros y 6 homicidios políticos durante el periodo indicado (Fundación Seguridad y Democracia, s/f: 24). Uno de los objetivos de estas prácticas fue entablar negociaciones e intercambio monetario por rehenes y

⁵ A partir de Junio de 2002, en el Bloque Oriental, y posteriormente en otros Bloques, se ejecutó una política de ajusticiamiento contra los líderes políticos que no cesen con sus labores políticos. La zona más afectada políticamente fue Caquetá (CNMH, 2014: 246)

disuadir a los candidatos de participar en campañas electorales (International Crisis Group, 2011: 6; Van Engellant et al, 2008:146).

Las acciones políticas en contra de Álvaro Uribe iniciaron meses antes de su posesión, con atentados al candidato, secuestros a personal político y el pedido realizado por las FARC para que los pobladores rurales no voten a favor de este (Semana, 2002: s/n). Además, al posesionarse el Presidente en 2002, la organización dejó claro su rechazo mediante la toma de rehenes, el asesinato de oficiales de la Fuerza Pública y personal civil y el bloqueo por varias semanas de las vías principales de 11 departamentos (Van Engellant et al, 2008:146). Al iniciarse el primer mandato de Uribe, 246 alcaldes no pudieron iniciar con sus funciones debido a la presión de la guerrilla contra el Presidente (Fundación Seguridad y Democracia, s/f: 24). Este hecho demuestra que la influencia de las FARC en asuntos políticos, repercute a la población de manera social y económica.

En efecto, al instituir miedo a través de actos ilegales y coerción la organización impide que los funcionarios Estatales cumplan con su trabajo o continúen en el cargo de manera estable y por ciclos prolongados; por ende la consecución de proyectos (políticos, sociales, económicos, obras públicas) durante un periodo de gobierno se dificulta (López, 2010:27). Los intentos de asesinato y sabotajes contra el Presidente se utilizaron para disolver su mandato y para poner en riesgo las relaciones políticas y económicas del país con Estados Unidos, ya que sin un líder conocido en el poder, la cooperación de este país para Colombia (ayuda militar y económica antiterrorista) pudo haber concluido al finalizar el primer periodo del mandatario (Stratfor, 2004: s/n). Posteriormente, semanas antes de llevarse a cabo las elecciones del 2006, las FARC cometieron actos en contra de la infraestructura y el personal civil y privado, no solo en protesta frente a la segunda reelección de Uribe, sino también como represalia por la firma de acuerdos económicos con Estados Unidos y las acciones bélicas contra la organización (Fundación Seguridad y Democracia, s/f: 34).

A pesar de su interferencia en los procesos democráticos durante los mandatos de Uribe, las FARC no lograron generar un verdadero cambio político a nivel nacional (CNMH, 258:2014), ya que no se modificaron ni el principio ordenador o la estructura del país, elementos a través de los cuales se determina el ordenamiento, relaciones y acciones de las unidades de un

sistema (Waltz, 1979: 122). No obstante, debe recalcar que en las cabeceras municipales y gobiernos centrales, las estrategias de las FARC han deteriorado la fuerza de la participación política, no solo por truncar el proceso electoral, sino porque con su presencia la función política gubernamental es nula y no tiene injerencia sobre la población (CNMH, 258:2014). Sin embargo, la organización logró convertir al conflicto interno en uno internacional en materia política, no solo por el hecho de contar con el apoyo de otros países, sino que con la persecución, captura, canje u homicidio de rehenes han atraído la atención mundial (Pécaut, 2008:50); y, a pesar de que dentro que los intereses de las FARC, el dominio internacional ha sido descartado, su impacto político ha excedido las fronteras colombianas llegando a modificar la política externa y de seguridad de otras naciones⁶ (Van Engellant et al, 2008:145-147). Lo anterior demuestra que el comportamiento de los actores no Estatales no solo influye en el contexto nacional, sino que sus decisiones e interrelación con organismos reconocidos legítimamente, afectan también los resultados y orden del sistema internacional (Allard, 2004:3).

1.2. Las relaciones forjadas entre la guerrilla y la población civil

La incipiente presencia del Estado en las zonas rurales de Colombia, así como su escasa participación e incumplimiento de sus responsabilidades ejecutivas, legislativas y judiciales, no solo ha incrementado los problemas sociales en el país y enfatizado la desatención gubernamental hacia la población campesina, sino que se ha convertido en una oportunidad de fortalecimiento, reconocimiento y crecimiento humano y territorial para las FARC. En efecto, aprovechando el abandono del Estado, a lo largo de su historia la guerrilla ha empujado tácticas sociales mediante las cuales fortalece sus relaciones con la población y se apodera de las competencias gubernamentales. De esta manera, la organización ha logrado desacreditar la gestión Estatal, difundir su ideología e incrementan su poder político, social, económico y militar, lo que les ha permitido consolidarse como un poder paralelo al Gobierno.

⁶ Para Estados Unidos y los países que comparten su ideología, las FARC representan una amenaza a la seguridad interna y externa de las naciones, pues además de ser consideradas como un grupo terrorista, la difuminación de su ideología y el alcance transnacional de sus actividades ilegales y de comercio, son perjudiciales para la consolidación de la paz y la democracia (Van Engellant et al, 2008:145-147).

1.2.1. Desatención Estatal

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2005:10,11), la inexistente presencia gubernamental en ciertos sectores del territorio colombiano ha convertido a estas zonas en vulnerables, impidiéndole a la población gozar de sus derechos civiles y exponiendo a los ciudadanos a escenarios de pobreza⁷, desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación y dependencia económica. La población vulnerable colombiana se caracteriza por su condición de inaccesibilidad a recursos institucionales, de salud, educación, cultura, de entorno y medio ambiente. En consecuencia, al existir una incipiente gestión Estatal que no vela por las necesidades básicas del pueblo, la brecha de la pobreza y desigualdad se expande, lo que trae consigo repercusiones políticas, económicas y sociales tanto para el gobierno como para los ciudadanos.

Justamente, para el año 2010, 57.65% de la población se consideró pobre (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas [DANE], 2012:34) y se identificó que 20% no satisfizo sus necesidades básicas y estuvo expuesta a la desnutrición (Ronderos, 2010: 1); además, a pesar de que la percepción de bienestar de los habitantes fue 7.3 sobre 10 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2010:177), en el país, más de 6 millones de personas fueron consideradas como vulnerables, la mayoría establecida en áreas rurales (Friedrich Ebert Stiftung [FESCOL], 2010:12).

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2012:15-16), la pobreza total de Colombia en el periodo 2002-2010 fue de 49.7% y 37.2% respectivamente mientras que la pobreza extrema de 17.7% y 12.3%. Sin embargo, a pesar de la disminución nacional, el resultado promedio departamental del periodo mencionado muestra el estado de fragilidad de la población (UNDP, 2003: 13), siendo los más afectados por la pobreza Chocó

⁷ La medición de pobreza que utiliza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE se basa en los métodos directo e indirecto, propuestos en la clasificación de conceptos y medidas de pobreza de Amartya Sen (1981). De acuerdo con el primero son pobres las personas cuyo consumo de bienes no satisface necesidades básicas como salud, vivienda, alimentación y educación, variables que en Colombia se calculan a través del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. La DANE realiza la medición directa a través del Índice de Pobreza Multidimensional IPM. Por otro lado, el método indirecto o monetario, evalúa la capacidad adquisitiva de los hogares con respecto a la canasta básica familiar y clasifica como pobres a las personas cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza (valor de la canasta básica de alimentos y no alimentos). En un hogar de cuatro personas, la canasta básica familiar en Colombia fue de \$201.09 en 2002 y \$392.62 2010. A través de este enfoque pueden determinarse la carencia de ingresos y la desigualdad económica de la población (DANE, 2015:2; Banco de la República, s/f: s/n). Cabe mencionar que para el periodo de estudio de este trabajo se toma en cuenta únicamente el método monetario debido a que en Colombia el directo se aplicó por primera vez en el 2012. Sin embargo, la medición y conceptualización de pobreza del método indirecto del DANE satisface los propósitos de esta investigación puesto que se pretende determinar la localización geográfica de la población cuyos ingresos son menores a la línea de pobreza.

(70.1%), Sucre (64.5%) y Córdoba (64.1%); y por la pobreza extrema Chocó (39.2%), Cauca (31.9%) y La Guajira (29.8%) (DANE 2012:16,15). Estos resultados enfatizan que la pobreza y pobreza extrema en Colombia, consecuentemente la población vulnerable, se concentran en áreas rurales y periféricas (PNUD, 2003: 13). A pesar de que solamente 26% de la población colombiana es rural, de ese total, 65% vive en condiciones de pobreza y 21.5% en pobreza extrema, contrariamente a la población urbana, con 39% de pobreza y 8.7% de pobreza extrema (Perry, 2010: 2). Las estadísticas del DANE (2012:15,16) identifican a los departamentos urbanos y los de alto desarrollo económico como los menos afectados. De hecho, entre el 2002 y 2010 Bogotá D.C. tuvo los índices más bajos, con 24.7% de pobreza y 4.9% de pobreza extrema.

En lo que se refiere a la desigualdad de ingresos, el índice de GINI de Colombia en el 2002 fue de 58.3 y en el 2010 de 55.5. Del mismo modo, el DANE (2012:17) expuso que los departamentos con GINI más alto en el periodo 2002-2010 fueron Antioquia (57.3), Chocó (57.15), Boyacá (56.75), Bogotá (54.9) y Nariño (53.3). Por otro lado, con respecto al Índice de Desarrollo Humano IDH, el PNUD (2002:269; 2010:144), catalogó a Colombia como un país de desarrollo humano medio con 0.770 en 2002, mientras que en 2010, a pesar de que la nación se ubicó entre los países de alto desarrollo, ocupando el puesto 79 con 0.689, fue la segunda con mayor desigualdad de la región latinoamericana después de Haití (FEDESARROLLO, 2012:6). Para ese año, los componentes del IDH demostraron que las barreras para que Colombia alcance mejores niveles de desarrollo fueron sus altos grados de desigualdad en salud (0.846) educación (0.533) e ingresos (0.61) (FESCOL, 2010:12).

Para enfatizar el sesgo entre los beneficios sociales y desarrollo humano entre la población urbana y rural se tomaron en cuenta indicadores de salud, acceso a servicios públicos y educación. Con respecto al primero, en el 2010 88.7% de la población estuvo afiliada al Sistema General de Seguridad Social, sin embargo, del total nacional, 85.8% de la población beneficiada se localizó en zonas urbanas y 79.5% en el campo (DANE, 2011:23; Perry, 2010: 9). Por otro lado para el 2010, el acceso a servicios públicos acueducto, alcantarillado, electricidad y teléfono fue mayor en las ciudades (75.4%) que en las zonas rurales (42.2%) (Perry, 2010: 2- 9). Finalmente, en lo referente a

educación, para el 2010, en las urbes el nivel educativo fue de 9 años, la tasa de analfabetismo de 6.8% y 70% de las personas en edad de trabajar tuvieron estudios secundarios y superiores. Por el contrario, en el campo la escolaridad alcanzó los 5 años, el analfabetismo el 14.5%, y únicamente 20% y 6% del total de la población rural en edad de trabajar cursaron la educación primaria y secundaria respectivamente (Perry, 2010: 9).

Asimismo, Perry (2010:2, 3,9) indica que la vulnerabilidad de la población rural ha incrementado. Una de las razones fue la centralización de recursos humanos y financieros y el hecho de que las políticas sociales del gobierno colombiano idealizaron como principal beneficiaria a la población urbana, anulando las fortalezas de las zonas rurales. A nivel institucional, la población rural también es vulnerable debido a *“las bajas capacidades de la mayoría de gobiernos territoriales”* (Perry, 2010:11) y a las incipientes reformas agrícolas y de desarrollo social implantadas nacional y localmente, puesto que no permiten una adecuada redistribución y acceso a la tierra. En efecto, estas políticas se han establecido *“sin tener en cuenta las condiciones y opiniones de los pobladores rurales”* (Perry, 2010:11). Como resultado, para el 2009, 39.3% del total de personas con títulos mobiliarios poseían 3.7% de la superficie catastral de Colombia, y únicamente a 3.8% le pertenecía el 41.1% de ese total (Perry, 2010: 3).

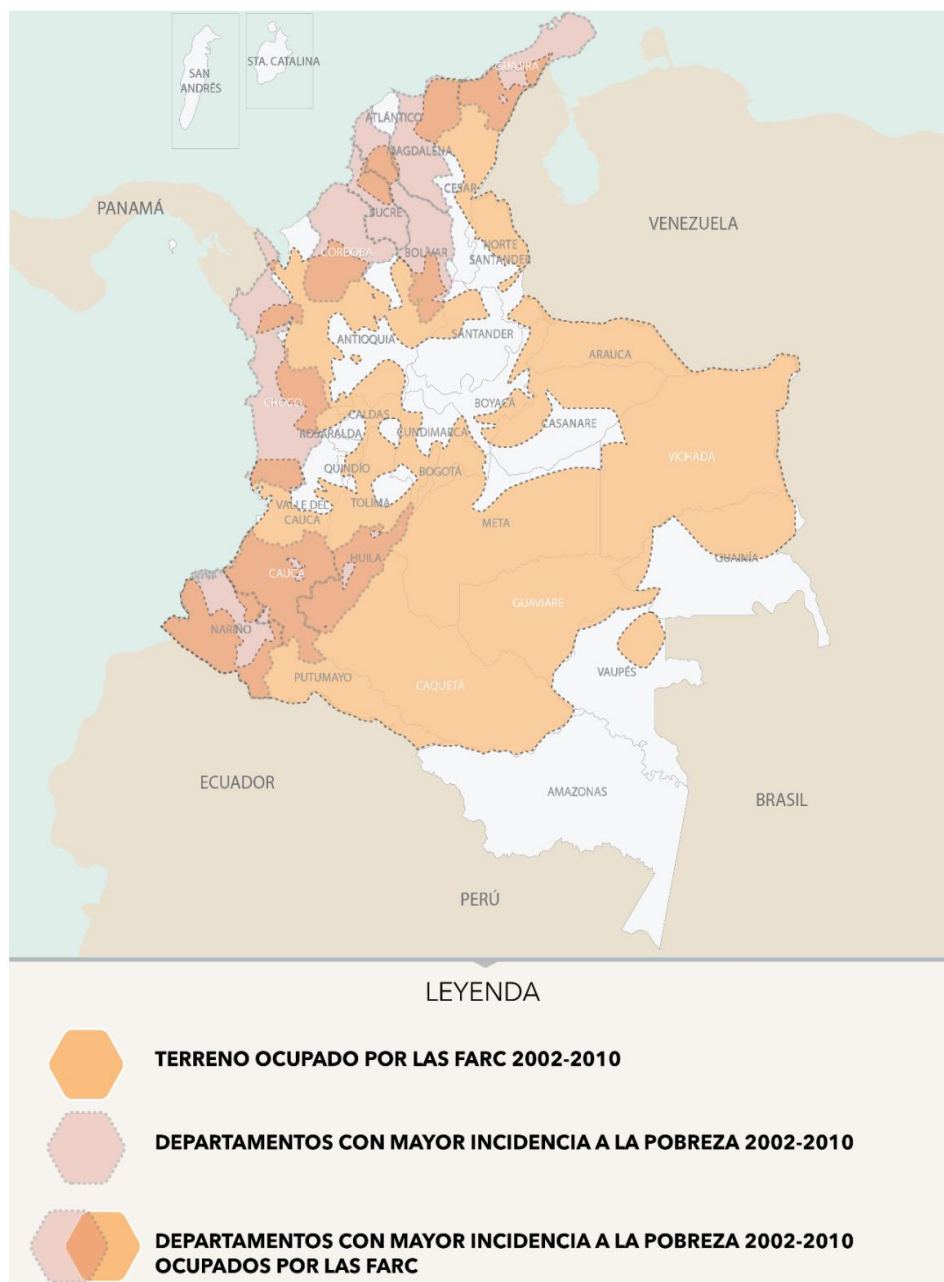
Ante este panorama y con el objetivo de garantizar a la población igualdad de derechos, protección y crecimiento económico, Álvaro Uribe instaura en el 2002 el Plan Nacional de Desarrollo PND, a través del cual el Presidente se propone incrementar el presupuesto para gasto público social. En efecto, este rubro aumentó de 10.6% del PIB en 2003 a 13.6% en 2010 (Torres, 2013: 38). No obstante, a pesar del incremento, en ese periodo se cuestiona la expansión de la brecha de la pobreza y desigualdad en la nación, así como el incipiente beneficio social. Las críticas se basan en que el gasto de defensa nacional se incrementó de \$3.62 mil millones a \$10.62 mil millones en el periodo 2002- 2010 (Ministerio de Defensa, 2010a: 80). Para Waltz (1979: 158), el gasto en defensa se justifica debido a que este es indispensable para la supervivencia de un Estado, y en efecto, al recordar que solo con la supervivencia se garantizará la consecución de los objetivos y maximización de los beneficios de una nación, tal desembolso, así como la utilización de capacidades humanas para la protección nacional, son necesarios. No obstante, el autor establece también que a pesar de ser necesario, este gasto

es igualmente perjudicial para el país ya que no solo puede descuidarse el bienestar de otros sectores sino que se desvía el capital que podría invertirse en el desarrollo del pueblo.

Posterior a los mandatos de Álvaro Uribe en 2010, más del 64.1% (DANE, 2013:18) de la nación declaró que en el país *“no se protegen y garantizan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad”* (DANE, 2013:18). Además, el DANE (2013:21) reveló que 22% de la población no confió en la gestión de instituciones Estatales siendo la menos popular el Órgano Ejecutivo con 28.1% de rechazo. Por tal motivo, en base a los informes del UNDP (2003:3), a pesar del incremento en gasto social y desarrollo del país, no puede negarse que este se ha dado de manera inequitativa, y que las diferencias sociales y económicas interregionales y entre la población urbana y rural son abismales. De acuerdo con Gilpin (2001:402), eso se debe a que los Estados modernos se han convertido en actores egocéntricos y cada vez menos interesados en el bien común, que no establecen la estabilidad nacional como una prioridad, y que además tienden a favorecer, en materia política y socioeconómica a las élites y grupos de poder.

La debilidad e impotencia del gobierno colombiano frente a la resolución de los problemas sociales políticos y económicos que aquejan al país es evidente (Castellanos, 2013:4); concluyéndose entonces que la desatención Estatal, la exclusión y la violación de los derechos civiles, sociales y humanos por parte del Estado, específicamente en zonas rurales, garantizan a las FARC mayor apoyo popular y un entorno favorable para el reclutamiento (Medina et al, 2002:11). En el siguiente mapa puede observarse la incidencia de las FARC en los departamentos que entre el 2002 y 2010 presentaron los mayores índices de pobreza:

GRÁFICO 1
POBREZA Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS FARC EN COLOMBIA 2002-2010



Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014; DANE, 2012
 Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

1.2.2. Estrategias sociales

Para alcanzar reconocimiento político nacional y cumplir a cabalidad con sus objetivos económicos, políticos y militares, las FARC se acercan a la población para establecer relaciones sociales, ya que éstas, además de mejorar su dinámica con los civiles, les garantizan a los guerrilleros apoyo popular, legitimación, protección, supervivencia, la obtención de recursos, el

adoctrinamiento político, su consolidación territorial, la inmersión en los núcleos sociales y políticos y el fortalecimiento de su estructura (Lair, 2000: 141; Medina et al, 2002:49; CNMH, 2014:175). De acuerdo con el Estatuto de las FARC, estas relaciones deben estar fundamentadas en el respeto, confianza y defensa de los intereses colectivos de la población civil (Medina et al, 2002:49). No obstante, en su consecución se le atribuyen a la organización técnicas de manipulación y coerción material y psicológica, como la destrucción de vías e infraestructura local para aislar a la población de la protección Estatal y la desestabilización de regiones pacíficas para crear conflicto (Castellanos, 2013: 6; CNMH, 2014:24; Medina et al, 2002:12).

Los territorios seleccionados por las FARC para forjar relaciones sociales son aquellos con poca presencia y regulación Estatal, cohesión social y deficiente situación económica, en los que además hay una inequitativa redistribución de la riqueza; es decir que presentan escenarios de injusticia social y en los que el Estado falló como la entidad encargada de garantizar seguridad y cubrir las necesidades del electorado (González, 2004: 14). En efecto, Waltz asegura que los territorios en los que se experimentan situaciones de desigualdad y vulnerabilidad política, social o económica son proclives a la inestabilidad para las unidades interactuantes, y consecuentemente representan objetivos estratégicos para actores disidentes, quienes aprovechando la debilidad de la estructura desean cambiarla (Waltz, 1979:195).

La colonización de las FARC se produce en zonas de retaguardia⁸ y en zonas de disputa. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014:24,25) y Hernández (2002:34), en zonas de retaguardia, la organización se acerca a la población en busca de refugio para eludir la persecución del ejército; posteriormente se proclaman como autodefensa campesina e intentan tomar el control de las organizaciones políticas y sociales y actuar como órgano complementario al Estado, interfiriendo en conflictos sociales laborales y judiciales para ganar la aceptación, poder y legitimación local. Sin embargo, en zonas de disputa y combate las FARC se imponen a los habitantes por la fuerza y se aprovechan de los recursos económicos de la población; en estas

⁸ Se considera a las zonas de retaguardia como territorios que históricamente le pertenecen a la organización y en donde han consolidado su territorio. En estas áreas, que están alejadas de las zonas de conflicto, se radica la cúpula de las FARC y los guerrilleros conviven, entrenan y se resguardan. Generalmente las zonas de retaguardia son en su mayoría áreas de difícil acceso y alejadas geográficamente (Giraldo, Losada et Muñoz, 2001, 34).

zonas, las prácticas ilegales de comercio, ajusticiamiento y abuso son más comunes (CNMH, 2014:24-25).

Con respecto a las tácticas de acercamiento, a pesar de que la principal estrategia de aproximación o dominio social de las FARC es el miedo, los guerrilleros aplican también tácticas militares, económicas y políticas; en el caso de esta última, se presentan como defensores de las ideas revolucionarias de próceres latinoamericanos para convencer a la población del maltrato y desatención Estatal (CNMH, 2014:21; 25; Lair, 2000: 145). Estas tácticas, con las que se fomentan y crean relaciones sociales entre la población y la guerrilla están principalmente a cargo de los mandos medios y de las milicias⁹. En el caso de los mandos medios, debido a que en su mayoría son oriundos del territorio de implantación y se han relacionado previamente con la población civil, son un puente entre la guerrilla y el exterior y facilitan la comunicación e integración entre las partes (Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2010:9-10). Por otro lado, las milicias, están consideradas como elementos necesarios para el engrandecimiento del grupo, pues los milicianos, al no ser guerrilleros per se, están habilitados para representar a las FARC en territorios urbanos y diseminar su ideología en otros entornos. No obstante, a pesar de su gestión, estos actores constituyen un peligro pues actúan en el nombre de la organización y cometen arbitrariedades contra los ciudadanos, como ajusticiamientos y acoso afectando la reputación política de las FARC (Medina et al, 2002:56-57).

La efectividad de las estrategias sociales de las FARC se refleja en el reclutamiento, actividad que hasta el 2010 se realizó en aproximadamente 68.75% del país, y que ha transformado a estas zonas en entornos vulnerables y de alto riesgo (Castellanos, 2013:5-6). La principal crítica contra el reclutamiento de las FARC es la incorporación voluntaria y forzosa de menores de edad. En efecto, aunque en su reglamento la organización acuerda que la edad mínima de ingreso para menores es de 15 años, en la práctica, esta inicia desde los 7 (Castellanos, 2013; 6-12).

El éxito en el acercamiento social y reclutamiento se justifica por los problemas sociales como el resquebrajamiento familiar, violaciones de

⁹ Las milicias de las FARC son grupos integrados por civiles que no cumplen las funciones de guerrilleros, pero que actúan bajo el mando de la guerrilla. Estas se clasifican en Bolivarianas y Populares, y se diferencian principalmente en que las primeras tienen mayor grado de instrucción político-militar, están más comprometidas con las FARC y forman parte de la vida guerrillera. Por otro lado, las milicias Populares son temporales y sus lazos con la organización no son fuertes (Medina et al, 2002:56-57).

derechos fundamentales, bajos niveles educativos, las repercusiones inherentes al conflicto y las incipientes condiciones de crecimiento social y económico. Se atribuye al Estado la responsabilidad de esta actividad puesto que las víctimas encuentran en la organización un ente protector que, a diferencia del gobierno, atiende sus necesidades, en efecto, de acuerdo con las víctimas, la guerrilla les proporciona oportunidades de crecimiento, trabajo, protección, alimentación y educación, que no hubieran sido posibles en otro contexto (Transnational Institute, 2008: s/n; Medina et al, 2002:73-74). Sin embargo, a pesar de que en ciertos sectores campesinos la población se siente identificada con el ideario fariano, se afirma que el apoyo civil a las FARC no tiene que ver con lealtad, sino con la protección y orden que la organización impone, por lo que los resultados sociales y proximidad a la población son cuestionables (Transnational Institute, 2008: s/n).

Por otro lado, debe recalcarse que con el fin de promover el ingreso de representantes que conozcan la realidad de la población civil en las urbes para que su lucha se convierta en una nacional y que no solo el sector rural se sienta identificado y se relacione con la organización, las estrategias expansionistas de la guerrilla se han extendido hacia las capitales urbanas del país. Sin embargo, a causa de su escaso conocimiento de los habitantes, sus necesidades e inclinaciones económicas, políticas y culturales, la penetración de las FARC en estas zonas no ha sido fructífera. Además, al abandonar las selvas y zonas conocidas, exponen y vulneran la gestión de sus miembros. El factor más crítico para el incipiente proceso de urbanización de las FARC es el nivel educativo de la ciudadanía y la percepción negativa de esta hacia el grupo guerrillero (Medina et al, 2002: 152, 153). Este último aspecto se condiciona directamente debido a la interferencia de los medios de comunicación en la difusión de los acontecimientos, ya que la mayoría de información se refiere a actos contra la población y otras actividades ilegales socialmente rechazadas (CNMH, 2014:268).

Las FARC aseguran nunca haber atacado directamente a la población civil o haber cometido crímenes de lesa humanidad contra ellos, ya que ninguno de sus planes u objetivos se diseñaron para victimizarlos, por lo que consideran que las víctimas son el resultado indirecto de los enfrentamientos y culpan a la Fuerza Pública por utilizar a la población como escudo en las disputas (Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario, 2014: s/n). En cada sistema, los actores deben establecer su posición frente a la estructura impuesta por el grupo de poder, es decir que de acuerdo a sus intereses y necesidades, enfrentan la disyuntiva de rivalizarse o aceptar dicho ordenamiento (Waltz, 1979: 108). Tal postulado se adecua al contexto entre las FARC y la población civil que fue colonizada por la guerrilla, debido a que al convertirse, a causa de la desatención Estatal, en el ente hegemónico y regulador de estos territorios, la población debe determinar si se subleva¹⁰ o se adapta a los dictámenes de la organización; en este caso el elemento principal que determina la conducta de estas personas será la garantía de su seguridad y supervivencia.

1.2.3. Las FARC como poder paralelo al Estado

Desde su fundación, las FARC desconocen al Estado colombiano como la unidad política autónoma de mayor relevancia, por lo que buscan convertirse en la cabeza de Colombia y controlar a la población, su territorio y los recursos (Kahhat, 2005: 51; Hernández, 2002: 34). Este objetivo se ha facilitado a causa de la consolidación del grupo en zonas de débil presencia Estatal (Castellanos, 2013: 13), convirtiéndolo en un *“Estado en formación”* (Medina et al, 2002:131). Para Pécaut (2008:34) y Oslender (2010:34,104), esta toma de poder y el reconocimiento de las FARC como una autoridad paralela al Estado, corresponde a una lucha de supervivencia y a una forma de resistencia política contra los postulados capitalistas del gobierno, y se fundamenta en la inequidad que se vive en el país, en el compromiso de brindar seguridad al pueblo y en otorgar a sus miembros un Estado libre, seguro y en donde sus actividades se realicen sin persecución política o militar y rechazo social.

Para esto, la guerrilla propone un cambio en el orden político, económico y social de la nación a través de la reestructuración de las entidades responsables de garantizar el bienestar al pueblo. Este cambio, que se ha ejecutado a través de la suplantación de competencias Estatales, responde también a lógicas políticas y militares, ya que de este modo las FARC iniciaron la formación de frentes y zonas de retaguardia (CNMH, 2014:22-23). El alcance de las FARC ha llegado a convertirla en el órgano que controla los aspectos

¹⁰ Con el objetivo de frenar las ocupaciones territoriales y acercamientos sociales de la guerrilla, la población ha optado por la “resistencia civil en caliente”, movimiento popular en el que los habitantes oponer resistencia y luchan sin armas ante la presencia de las FARC. Este movimiento se fundamenta en la preservación de la seguridad y bienes públicos sociales a través de demostraciones culturales y políticas simbólicas, la participación de miembros de la iglesia u organismos comunitarios y apropiaciones colectivas de lugares públicos. Según Hernández (2002:26, 27,30) estas resistencias nacen ante la incompetencia gubernamental de lograr un acuerdo de paz.

económicos, penales, judiciales, legislativos y sociales de la población, principalmente a causa de la incipiente presencia Estatal y los inexistentes mecanismos de control del gobierno (Oslender, 2010: 104, Medina et al, 2002:12).

Con respecto a la administración de los territorios ya ocupados por la guerrilla, la organización se empodera y gestiona, desde las actividades concernientes al cuidado del medio ambiente y el comercio comunitario, hasta las del trabajo (voluntario o forzado) con las autoridades políticas y sociales de la localidad (Ladino, 2012: 6). Igualmente las FARC establecen reglas de orden social y de convivencia, con las que normalizan incluso asuntos familiares y conflictos dentro de la comunidad, convirtiéndose, de acuerdo con Pécaut (2008:33) y Ladino (2012:6), en un órgano estabilizador y administrador de justicia. En efecto, para ejercer el poder judicial, en ciertos casos las FARC se instauran como entidad complementaria o extraordinaria, encargada de regular conflictos sociales y proporcionar soluciones y sanciones a casos graves, respetando la autonomía de la población.

Por otro lado, cuando las FARC se establecen en zonas de disputa o en territorios donde planean consolidarse, practican la justicia sin intervención de las instituciones zonales (CNMH, 2014:14, 62, 262). En el caso de las disputas civiles por territorio, especialmente en zonas cocaleras, la guerrilla no solo instituye límites territoriales sino que se encarga de apaciguar los enfrentamientos y la violencia entre la población y otros grupos armados o paramilitares; además, establecen soluciones para los futuros problemas económicos de estas personas, contrario a la gestión gubernamental. Por este motivo el servicio judicial de las FARC se legitima ante el pueblo y le permite a la organización consolidarse pues la comunidad ve en ella un órgano que los protege contra las políticas Estatales (Pécaut, 2008:33; Transnational Institute, 2008: s/n). Sin embargo las formas de resolución de conflictos y ajusticiamientos se consideran ilegales ya que incluyen fusilamientos, hostigamientos, masacres, secuestro y uso de minas antipersonales. Estas prácticas ilegales convirtieron a las FARC en la perpetradora de violaciones contra la población (CNMH, 2014:14).

En lo que concierne a las FARC como ente económico, éstas se han asegurado de controlar las fuentes económicas de la ciudadanía y ejecutar actividades (ilegales) que les permitan solventar a ambos actores (Pécaut,

2008:34). En efecto, el cobro de tributos y contribuciones (forzosas) a cambio de seguridad, el secuestro, extorsión y chantaje se utilizan como herramientas jurídicas y económicas, pues les permiten hacer cumplir su ley y funcionan como fuentes de ingreso. Esas actividades, además de la comercialización ilegal de armas y drogas implantaron un régimen de economía ilegal en los territorios conquistados (CNMH, 2014:14; Pécaut, 2008: 36). Otro de los métodos de reconocimiento y beneficio económico, es la apropiación y liderazgo de sindicatos, especialmente agrícolas y ganaderos puesto que constituyen organismos influyentes en las zonas rurales del país. De esta manera al encabezar y liderar estas asociaciones, la guerrilla no solo gana acceso a territorio y bienes, sino que se legitima ante la población y puede influenciar de manera negativa la opinión de la población contra el Estado a través de una institución socialmente aprobada (Pécaut, 2008:34, 38).

No puede negarse que el mayor beneficio que otorgan las FARC a la población civil es la protección, anulando la capacidad Estatal. Sin embargo, a través de la seguridad, la organización ha coartado las libertades humanas, civiles, sociales económicas y políticas de los habitantes (Pécaut, 2008:34); por lo tanto, a pesar de que la guerrilla está respaldada, su gestión influye para que el apoyo se convierta en *"obediencia coercitiva"* (Pécaut, 2008:36). Para el pueblo colombiano, la justicia impuesta por la guerrilla representa métodos de represión ilegales e injustos, que no dan cabida a la oposición o alegato de decisiones penales y jurídicas y que utilizan el asesinato como mecanismo de intimidación. En modo de compensación, las FARC deben demostrar a la población su compromiso con la causa social para que su credibilidad y autoridad no se vean afectadas pues su consolidación en un Estado paralelo radica en el monopolio del poder local y en el cumplimiento y satisfacción de las necesidades de los habitantes (Pécaut, 2008:34, 35; Oslender, 2010: 104). De acuerdo con Medina, Uribe, (2002:132) y Transnational Institute (2008:s/n) las FARC se han convertido no solo en un símbolo de orden y protección civil, sino también en un sinónimo de resguardo, demostrando a los pobladores su interés en el desarrollo colectivo a través de proyectos sociales, obras de infraestructura y establecimiento del orden (CNMH, 2014:22-23).

Gracias a sus tácticas sociales, la organización se convirtió en un *"alter-Estado dentro del Estado-nación"* (Oslender, 2010: 104), puesto que se responsabilizó y apropió tanto de la gestión gubernamental como de su

infraestructura, inhabilitando la labor de los funcionarios públicos y el ejercicio del poder Estatal (Medina et al, 2002:12). De esta manera, la guerrilla recalcó la poca injerencia y obra del gobierno y su incapacidad de satisfacer las necesidades del pueblo. De este modo, la gestión de las FARC se consolidó como una estrategia política y social ya que la ayuda que dieron al pueblo representó para el Estado el rechazo de la población, convirtiéndolo de este modo en su detractor (CNMH, 2014:22-23; Transnational Institute, 2008: s/n).

Waltz (1979:114) aplica el criterio de la racionalidad para explicar la elección de los consumidores de un actor económico frente al otro. Tal decisión está basada en la capacidad de cada uno de suministrar de manera más competitiva sus bienes o servicios a quienes lo requieran. La elección de los consumidores resulta exitosa y le genera mejores resultados a uno de los competidores, mientras que simboliza la quiebra para otros. Si analizamos la gestión del Estado y de las FARC con el pueblo bajo esta premisa neorrealista, se comprende el éxito social de la guerrilla en las zonas olvidadas por el gobierno puesto que las FARC no solo se empoderaron de las tareas gubernamentales, sino que lograron suministrar el servicio (necesidades básicas, seguridad) de mejor manera. Comparando a la guerrilla como un actor económico, la organización le arrebató este segmento de mercado al gobierno.

No obstante, puede deducirse que el interés y ayuda de la guerrilla hacia la población radica principalmente en que si las FARC no desempeñan a cabalidad sus funciones y se encargan de satisfacer las necesidades del pueblo, el apoyo desaparece y la organización podría ser desplazada por el Estado (Pécaut, 2008:35). Esto se debe, como indica Gilpin (2001:21,22) a que entre la unidad encargada de satisfacer las necesidades políticas y económicas del electorado y el pueblo, se crea una relación de lealtad que se pierde y atenta con la desaparición de dicha unidad si estas necesidades no son satisfechas o los habitantes sienten descontento. A pesar de que las FARC apoyan a la población, su presencia convierte a estas zonas en vulnerables debido a los problemas y la violencia que la organización atrae (Castellanos, 2013: 5-6). Asimismo, Pécaut (2008:34) argumenta que al ser el control social imprescindible para las FARC, la disolución de organizaciones sociales y desorden civil no solo les es indiferente, sino beneficioso, puesto que su régimen recibe mejor cabida ante escenarios conflictivos y de débiles bases socio-políticas y económicas.

1.3. Intervención militar de las FARC

Debido a los permanentes ataques del Estado, para garantizar su supervivencia y cumplir sus objetivos político-militares las FARC establecieron mecanismos y estrategias de defensa a través de los cuales lograron frenar el poder militar del gobierno, convirtiéndose en una organización político-militar que, además de garantizar la seguridad de sus miembros, representa una fortaleza armada contra sus enemigos. Con esta premisa, la organización forjó una estructura que permanentemente se adaptó a la geografía colombiana y evolucionó con los diferentes escenarios y etapas del conflicto. La formación de esta estructura político-militar y la utilización de estrategias e instrumentos militares le permitieron a las FARC sobrevivir y consolidarse como un ejército igual o más poderoso que la Fuerza Pública.

1.3.1. Estructura político-militar

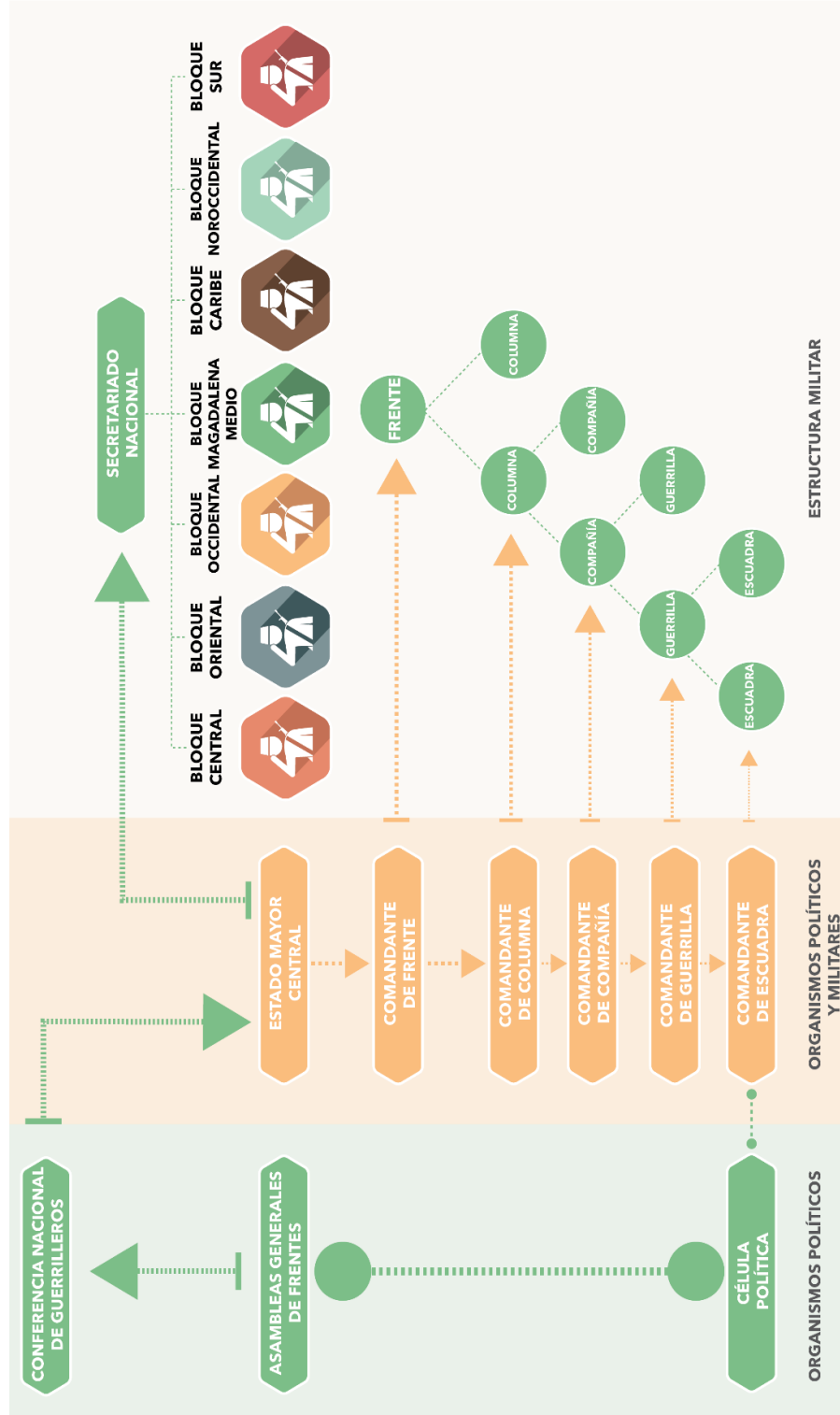
La estructura organizacional de las FARC ha evolucionado junto con el conflicto, adaptándose a las diferentes etapas y contextos políticos, sociales y militares del momento. Para definirla, debe considerarse que gracias a que la guerrilla cuenta con territorio, habitantes, está respaldada por una legislación y es autónoma, ésta se asemeja a un Estado. Waltz (1979: 122-123) plantea que la estructura de los sistemas políticos nacionales (Estados) es jerárquica, ordenada y que en ella se han establecido conductas de mando y subordinación a través de las cuales los actores conocen sus roles dentro del ordenamiento y están obligados a cumplirlos. Asimismo, ésta está diseñada para resistir y luchar contra el enemigo y garantizar la seguridad y supervivencia de sus miembros. Tales características responden a la estructura político-militar de la guerrilla, la que además se identifica por ser vertical, por su definida línea de mando; también por su funcionalidad, debido a que las FARC están respaldadas por mecanismos de control y disciplina, por su estructura social, por el ingreso de nuevos miembros y por su poder económico. Estos elementos representan una fortaleza por cuanto le garantizan a la guerrilla operatividad permanente (Forigua, 2006: s/n; In Sight Crime, s/f: s/n).

Con respecto a la organización político-militar, las FARC establecieron un tipo de estructura que integra a los organismos políticos y militares, sin subordinar la gestión y alcance del uno frente al otro; no obstante, a causa de la evolución del conflicto, el desarrollo militar de la guerrilla se convirtió en la piedra angular para frenar los ataques del Estado. Un rasgo distintivo de la

organización es que su estructura es dispersa, lo que les permitió extenderse, operar ampliamente en los territorios olvidados del país e incrementar su capacidad combativa. Por otro lado, la estructura fariana es altamente centralizada respecto a la toma de decisiones políticas, militares y planeación estratégica y económica (Immigration and Refugee Board of Canada, 2011: s/n; Forigua, 2006: s/n). Por ejemplo, en lo referente a transferencia de recursos financieros y manutención, las FARC se basan en un modelo económico en el que las unidades abastecen al núcleo, pues a pesar de que cada frente está encargado de su subsistencia económica, el restante debe ser entregado a la cúpula política de la organización (FIP, 2010: 9).

El organigrama de las FARC está dividido en los organismos de dirección políticos, político-militares y estructura militar, con los cuales la organización busca mantener la unidad interna y establecer sus prioridades y objetivos políticos, militares y económicos. Estas entidades se rigen por la primicia de dirección colectiva y tienen atribuciones de dirección y mando. Sin embargo, para eliminar procedimientos dictatoriales (propios de una jerarquía), fortalecer la participación conjunta en la organización y disminuir los abusos y la concentración del poder, se estableció un sistema de organismos “colegiados” (Forigua, 2006: s/n; Medina et al, 2002: 44, 45, 46, 50).

GRÁFICO 2
ORGANIGRAMA DE LAS FARC 2010



Fuente: Medina et Uribe, 2002
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

Como puede identificarse en el organigrama, los organismos de dirección política de las FARC son la Célula Política, las Asambleas Generales de Frentes y la Conferencia Nacional de Guerrilleros (Medina et al, 2002:50). La primera está encargada de la difusión del ideario fariano y del estudio y adoctrinamiento político de los guerrilleros operando desde la unidad básica del organigrama. Las Asambleas Generales de Frentes se encargan del ajusticiamiento, disciplina, y del nombramiento de los delegados de la Conferencia Nacional de Guerrilleros (Medina et al, 2002:43). Esta última es el organismo superior de mando de las FARC, responsable de la elaboración de planes políticos y militares y del nombramiento del Estado Mayor Central EMC. La Conferencia está organizada por el Secretariado, y en ella pueden participar todos los guerrilleros (Forigua, 2006: s/n).

Los organismos de dirección político-militares son el Estado Mayor Central EMC, el Secretariado y la Estructura Jerárquica (Medina et al, 2002:46-48). El EMC es la primera instancia de dirección y mando de la organización, está encargado de determinar a los miembros del Secretariado, los comandantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes, tomar decisiones financieras y establecer los temas de la Conferencia Nacional de Guerrilleros. El Secretariado del EMC es la autoridad suprema del EMC y cuenta con siete comandantes. Este, ejecuta las resoluciones y directrices de la Conferencia Nacional de Guerrilleros (Forigua, 2006: s/n). Finalmente, la Estructura Jerárquica está conformada por los comandantes del EMC, comandantes de Bloques, de Frentes, de Columna, de Compañía, de Guerrilla y de Escuadra (Medina et al, 2002:48, 49,50).

La estructura militar de la organización está dispuesta de la siguiente manera. La unidad básica de las FARC es la Escuadra, conformada por doce guerrilleros; a partir de esta, se forma la Guerrilla (26 miembros) compuesta de dos Escuadras; la Compañía (54 miembros), formada por dos Guerrillas; la Columna (110 miembros), con dos o más Compañías; y el Frente, conformado por más de una Columna, cuyo número de integrantes está sujeto al territorio de ocupación (Medina et al, 2002:50). Las FARC han dispuesto siete Bloques: Central, Oriental, Occidental, Sur, Caribe, Noroccidental y Magdalena Medio (CNMH, 2014: 82). Estas unidades se encargan de manera autónoma del trabajo de sus sub unidades militares y políticas, y son responsables de su gestión estratégica, económica, de movilización y trabajo con la sociedad civil

(Bargent: 2014, s/n). No obstante, no todos los Frentes están dedicados al trabajo militar pues al menos ocho han formado áreas operacionales de producción y comercialización de estupefacientes (European Strategic Intelligence and Security Center [ESISC], 2010: s/n).

Siguiente en la cadena jerárquica está el Bloque de Frentes, organismo encargado de la coordinación y gestión de cinco o más frentes en un determinado territorio y la elaboración de planes estratégicos y campañas militares y de movilización (ESISC, 2010: s/n; Medina et al, 2002:50-51). Sin embargo cuando las condiciones para la conformación de un Bloque de Frentes no son óptimas, toma su lugar el Comando Conjunto, organismo que se encarga de gestionar las actividades de los Frentes. Finalmente, a nivel superior y con el objetivo de encargarse del cumplimiento del Plan Estratégico de la organización, está el Comando General, el cual iniciará su actividad bélica únicamente al desarrollarse una ofensiva a nivel nacional (Medina et al, 2002:50-51).

Adjunto a estas unidades, pero sin formar parte de la estructura militar de las FARC, está la Unidad Táctica de Combate UTC conformada por seis guerrilleros pertenecientes a distintas unidades, y que son responsables de tareas exploratorias, misiones de corta duración y actividades de hostigamiento (Medina et al, 2002:50). Igualmente, para incrementar sus habilidades militares, la guerrilla ha destinado unidades especiales cuyo entrenamiento se basa en la elaboración y utilización de armas caseras, minas antipersonales, así como instrucción en reconocimiento de terreno, geografía y topografía. Además de estos organismos, las FARC cuentan con el apoyo de Milicias Bolivarianas y Populares y redes de apoyo logístico y militar para mantener una dotación constante de alimentos, armamento, estupefacientes y realizar actividades ilegales como secuestro, tráfico de armas y droga (CNMH, 2014:113; In Sight Crime, s/f: s/n).

De acuerdo con la Fundación de Ideas para la Paz (2009:9), se reconoce al espíritu de cuerpo de las FARC como su mayor fortaleza, así, la organización se convierte en una familia para los guerrilleros, disminuyendo el nivel de desertiones. Sin embargo, no puede negarse que a pesar de su cohesión, la estructura de las FARC se ha modificado y debilitado principalmente debido a la presión militar de la Fuerza Pública, a la desmovilización de combatientes, y a la rápida ascensión en la cadena de

mando de la guerrilla por cuanto las promociones ya no toman en cuenta ni la antigüedad o los méritos militares y políticos¹¹. Esto afecta a la formación del guerrillero, a las relaciones forjadas entre miembros e interfiere en la influencia que este puede ejercer sobre sus subordinados (FIP, 2010: 23). Otro problema que afrontan las FARC por la dispersión territorial de la organización es la indisciplina, falta de liderazgo y criminalización de unidades, por lo tanto es indispensable que personal de confianza esté a la cabeza de la regulación de los frentes más alejados, autónomos y pudientes (In Sight Crime, s/f: s/n; McDermott, 2013: s/n).

1.3.2. Estrategias militares

Hasta el 2010, las estrategias militares de las FARC se han establecido siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico (1982-2008) y el Plan Renacer¹² (2008) (Medina et al, 2002:114; CNMH, 2014:19,275), los cuales a pesar de diferir drásticamente por haberse instituido de acuerdo al contexto político, social y militar del conflicto están basados esencialmente en la resistencia, subsistencia y engrandecimiento de la organización (CNMH, 2014:20; Dunne, Kurki et Smith, 2007: 74). El neorrealismo insiste en que la seguridad y supervivencia de un actor son prioritarias, por lo que éste debe recurrir a herramientas que le permitan frenar el poder de su enemigo y generar dentro del sistema un cambio estructural que se adecue a sus intereses. Este cambio dentro del sistema podrá generarse únicamente a través de una revolución pacífica o violenta (Waltz, 1979:152,153). Por ende, las estrategias militares de las FARC están consideradas como el medio para romper la estructura gubernamental e instaurar en el país un nuevo orden.

Tomando en cuenta además, que para las FARC una revolución política no es posible, las pretensiones para el cambio estructural por parte de la guerrilla se volvieron militares y su revolución se planteó de una manera violenta. No obstante, debido al enfoque bélico de las FARC para arremeter contra el gobierno, sus estrategias han sido consideradas como ataques y atentados “terroristas”¹³ (Cragin, K., Chalk, P. Daly S., Jackson, B., 2007:77) ya que son utilizadas para agredir directamente a la Fuerza Pública, el Estado, el

¹¹ De acuerdo con las normas internas de las FARC, para ascender, los guerrilleros deben tener al menos dos años de pertenencia en la organización, servir de ejemplo tanto para los miembros como para la población civil, promover y fomentar el cumplimiento de los valores farianos, demostrar capacidades de liderazgo, disciplina, honestidad, no ser analfabetos y tener la capacidad de adoctrinamiento político y militar (Medina et al, 2002:48, 49,50).

¹² También conocido como Plan Revolucionario de Masas o Plan 2010.

¹³ De acuerdo con la Ley 599 establecida en 2000, el terrorismo se define como el acto de atemorizar a la población “mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos” (Ministerio de Defensa, 2010a:30)

personal civil, y porque involucran la destrucción de infraestructura privada y gubernamental, como oleoductos, puentes edificios privados, centros religiosos y comunitarios (Cragin et al, 2007:77; CNMH, 2014:202).

En marzo de 1982, se consolida en la Séptima Conferencia, el Plan Estratégico de las FARC. El Plan, que tuvo una duración de 26 años, definió las tácticas y estrategias militares de la organización para que estas sean congruentes con sus planes. El objetivo principal del Plan Estratégico fue tomar Bogotá y derrotar al Estado mediante ataques militares ofensivos, obtención de armamento extranjero y levantamientos populares para conseguir el poder político de Colombia e instaurar un nuevo gobierno (Medina et al, 2002:13; CNMH, 2014:18, 114,116). El Centro Nacional de Memoria Histórica (2014:22, 111, 112, 116,181) argumenta que la estrategia militar de las FARC consistió en convertirse en una guerrilla de alcance nacional, que aceche al enemigo y propicie el combate, objetivo que se conseguiría a través de la localización de 50% de sus miembros en la cordillera oriental para expandirse militarmente, para cercar la capital y controlar localidades contiguas. En el periodo de implementación del Plan Estratégico las maniobras militares de las FARC se basaron en el reclutamiento, innovación de instrumentos y consolidación en el territorio central del país (Martínez, 2013: s/n). Asimismo, intensificaron la expansión de frentes, la presencia de las milicias en las ciudades y la creación de bloques móviles (CNMH, 2014:180,203).

Para el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014:22), Medina y Uribe (2002:22) la puesta en práctica y cumplimiento del Plan Estratégico propulsó la escalada del conflicto en el país debido al compromiso de las FARC para cumplir con sus objetivos y su modernización humana y técnica patrocinada con el dinero del narcotráfico. En efecto, a partir del 2001, la estrategia militar de las FARC se propagó a las capitales colombianas mediante operaciones de larga escala y “terrorismo urbano” (Cragin et al 2007:77) que incluían instrumentos tecnológicos no desplegados con anterioridad (Cragin et al, 2007:72). Esto se atribuyó a las conexiones que las FARC sostuvieron desde 1997 hasta el 2001 con el Ejército Republicano Irlandés Provisional PIRA¹⁴ para aplacar la labor militar del Estado. La decisión de las FARC de recibir apoyo de PIRA se debió a que el conocimiento e indumentaria

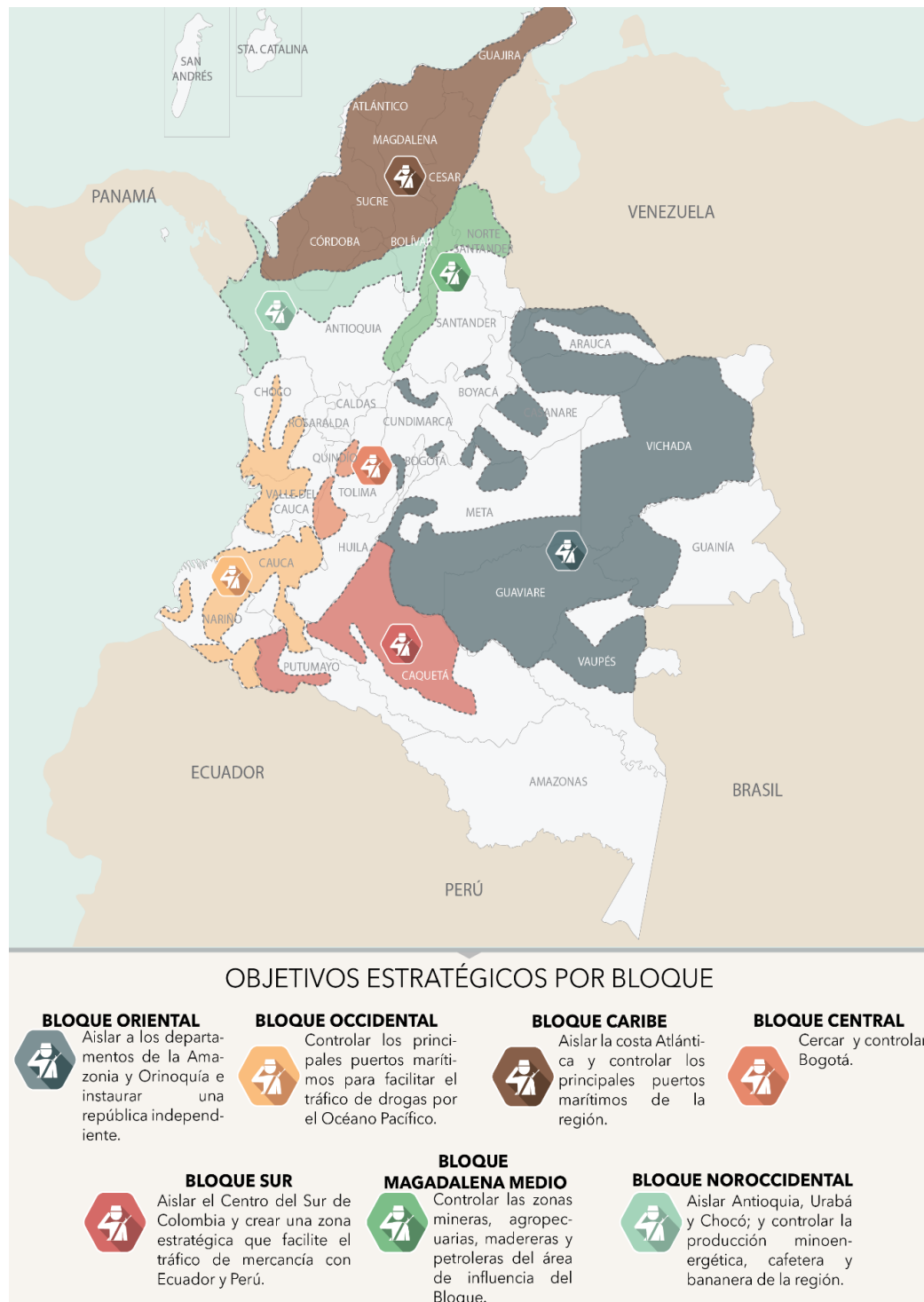
¹⁴ PIRA es un grupo norirlandés republicano establecido en 1969 que lucha por la unificación de Irlanda, la descolonización de Gran Bretaña y el respeto de este último hacia los derechos civiles y la justicia del pueblo irlandés. Debido a la utilización de tácticas violentas, PIRA ha sido catalogada como una organización terrorista (Arbizu ,2011:25).

que poseían hasta ese momento no satisfizo su necesidad militar de expansión y alcance urbano (Cragin et al, 2007:77,81).

Las habilidades técnicas adquiridas del grupo irlandés fueron la fabricación y detonación de bombas, explosivos, minas antipersonales, carros bomba y morteros radiodirigidos, además de la inteligencia emocional y la militar en entornos urbanos, planeación y selección estratégica de objetivos, vigilancia y emboscada (Cragin et al, 2007:83,86). La implementación de estas estrategias fue exitosa ya que el gobierno subestimó el poder de la organización y no previó su capacidad combativa, por tal motivo, fue imposible neutralizar los ataques contra el Palacio Presidencial en 2002 y el Club El Nogal en 2003. No obstante, aunque PIRA no reconoció su interacción con las FARC (Cragin et al, 2007:83, 85), Oppenheimer (2011: s/n) asegura que el entrenamiento que recibió la organización por alrededor de cuatro años involucró a más de 30 miembros de PIRA y les costó alrededor de 20 millones de dólares, los cuales se saldaron a cambio droga y armamento. A pesar de que el Plan Estratégico logró la consolidación económica y militar de las FARC, a partir del 2004 la organización sufrió un debilitamiento causado por el desconocimiento de la evolución social de Colombia y por la implementación del Plan Patriota de Álvaro Uribe (CNMH, 2014:22,173).

A nivel de los Bloques, las siguientes fueron las estrategias militares y territoriales planteadas por las FARC:

GRÁFICO 3
ESTREATEGIAS MILITARES DE LAS FARC POR BLOQUE



Fuente: Villamarín, 2014
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

A causa de la presión desplegada por el ejército, la longeva estrategia de las FARC dejó de rendir frutos y los guerrilleros se vieron obligados a modificar su lucha militar, motivo por el cual, en 2008, y bajo el mando de Alfonso Cano la organización implementa el Plan Renacer. Esta herramienta se instauró principalmente a causa del alto riesgo que el fortalecimiento del Estado representó para la organización pues repercutió en su consolidación territorial, económica y militar. La disminución del riesgo es imprescindible ya que puede encaminar a un actor a su erradicación. Por lo tanto únicamente a través de la disminución de riesgos una unidad puede garantizar su supervivencia y seguridad, elementos imprescindibles para la maximización de las capacidades y consecución de los objetivos planteados (Waltz, 1979:156).

TABLA 1
PUNTOS PLAN RENACER

PUNTOS DEL PLAN RENACER	
POLÍTICOS	Un fuerte trabajo de infiltración y control de los movimientos y las organizaciones sociales.
	Replantear el trabajo internacional que se vino a menos, luego de la muerte de Reyes y la evidencia encontrada en sus computadores.
	Fortalecer las relaciones con Venezuela a través de personajes como el ex ministro del interior Rodríguez Chacín.
	Todo un andamiaje, que buscará "resucitar" a la organización frente a la opinión pública nacional e internacional.
	Fortalecimiento del "Movimiento Bolivariano".
	Lograr el apoyo de políticos y personalidades en la legalidad.
ECONÓMICOS	El uso de misiles, tierra - aire, para enfrentar el poderío aéreo. Disponer de 6 millones de dólares de los "fondos" del Secretariado, para adquirir material de guerra y comunicaciones, especialmente potentes radios que ofrecerán gran dificultad para ser monitoreados.
	Fortalecimiento de las milicias (de 5 a 6 millones de dólares para dotación de armas y equipos).
MILITARES	La utilización de la guerra de guerrillas como respuesta al Plan Colombia y a la Política de Seguridad Democrática.
	El aumento de la siembra de minas antipersona, como método para detener el avance de las tropas.
	La obligación de realizar atentados terroristas, urbanos o rurales, con explosivos, como requisito indispensable para la "graduación" de nuevos guerrilleros.
	El empleo de francotiradores quienes dispondrán de fusiles rusos, de alta precisión, del tipo 'VD o Dragunov'.
	Desarrollar trabajos conjuntos con el ELN en algunas regiones del país.
	Realizar acciones tipo 'comando' contra objetivos seleccionados y estratégicos.

Fuente: Apuleyo, 2013
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

1.3.3. Efectos

La destreza militar adquirida por la organización junto con los planteamientos de su Plan Estratégico le otorgó a las FARC el conocimiento, fortaleza y trayectoria para consolidarse desde su fundación como el grupo irregular de mayor capacidad bélica a nivel nacional. Desde 1995 las FARC tomaron más de 300 cabeceras municipales en el país y a partir del 2002, con la posesión de Álvaro Uribe en agosto, la organización llegó a su nivel bélico máximo. En efecto, la ofensiva se triplicó a 7 ataques por día especialmente en áreas urbanas contra la Fuerza Pública y actores políticos (Ávila, 2001: 30; CNMH, 2014: 214-214). El periodo 2002–2008, preliminar a la implantación del Plan Renacer, se caracteriza por ser el de mayor actividad militar de las FARC, enfatizando los hostigamientos y ataques a infraestructura pública. En este periodo, las actividades bélicas más recurrentes fueron el daño a instalaciones públicas (17% del total de las acciones), hostigamientos (11%), emboscadas, asaltos y ataques (8%) y daño a infraestructura de la Fuerza Pública (4%) (Echandía, 2011:19). El total de las acciones bélicas en 2002 fue de 2.063 reduciéndose paulatinamente, hasta que en 2007 llegaron a 1.057 (Ávila, 2011:38). Con respecto a muertes por las minas antipersonales, en el periodo 2003-2008 hubo 5.896 (CNMH: 222), aumentándose en más del 1000% los ataques realizados desde 1998 (Martínez, 2013: s/n). Asimismo, en el periodo 2002-2007 las FARC hirieron a más de 10 mil efectivos y dieron de baja a más de 3 mil (Ávila, 2011:17).

En 2008, al implantarse el Plan Renacer, la organización se recuperó de los ataques militares del Estado, recobró fuerza combativa e impidió el avance de la Fuerza Pública ganando posicionamiento territorial e incrementando las bajas del ejército gracias a los ataques con UTC (Ávila, 2011:44-45). La nueva táctica ofensiva de las FARC se convirtió en una estrategia militar exitosa pues a pesar de que en el Periodo 2007-2010 las FARC disminuyen su intensidad combativa con respecto al periodo 2002-2007, desde el 2009 el Plan Renacer les garantizó el aumento de sus actividades bélicas (Echandía, 2011: 21; Llorente, 2011: 5). No obstante, la estrategia implicó pérdidas militares, sociales y económicas por cuanto al implementarla, las FARC se aislaron de la población confinándose en zonas alejadas. Estas movilizaciones disminuyeron su presencia a nivel nacional, afectaron su ejercicio económico impidiéndoles adquirir material bélico y disminuyeron los niveles de reclutamiento (Aguilera, 2012: 86). Al mismo tiempo, al haber ejecutado 50% de sus ataques con

explosivos y minas, evitando el combate frontal, sus tácticas se recrudecieron degradando al conflicto y a su imagen militar (Ávila, 2011:45). Con respecto a acciones ofensivas, en 2008 se ejecutaron 1.553 y en 2009, 1.614. Asimismo, en 2009 se registraron 2.320 bajas y personal herido de la Fuerza Pública; y, a partir del 2008 la infraestructura gubernamental y de los sectores de petróleo y energías se vio afectada, con 239 ataques en ese año (CNMH, 2014:282, 284; Ávila, 2011:2).

Entre el 2002 y 2010, el número total de heridos de la Fuerza Pública fue de 16.069 siendo el 2004 y 2010 los años con más víctimas, 12.12% y 12.76% respectivamente. Con respecto a los decesos, en ese mismo periodo el total fue de 4.983. En este caso, los años con más muertes fueron el 2005 con 717 y 2002 con 699 (Ávila, 2011:43). Debe tomarse en cuenta también al personal desaparecido, en 2010 el total fue de 21 (Márquez, 2010:46). Para ese mismo periodo, se calcula que anualmente hubo 267 víctimas civiles a manos de las FARC (Ávila, 2011:40). En este periodo la organización cometió más de 3000 violaciones al Derecho Internacional Humanitario; estas violaciones atentan al doble de los municipios afectados por acciones bélicas (Centro de Investigación y Educación Popular [CINEP], 2010: 6). Asimismo, la lucha armada de la organización atentó además con la seguridad de los grupos vulnerables de Colombia, quienes aseguran que la violencia ocasionada por las FARC se origina directamente en su cúpula y que los guerrilleros pretenden no solo derrocar al gobierno sino erradicar la autoridad aborigen y ancestral en el país (Ávila, 2011:38; CNMH, 2014: 312).

La investigación realizada a lo largo de este capítulo responde al primer objetivo específico de la disertación, el cual pretende demostrar la proliferación de la violencia en Colombia a partir de la implementación de tácticas políticas y militares de las FARC en territorio nacional. En efecto, el fortalecimiento tanto político como militar basado en la intensa lucha por los medios de control y el recrudecimiento de sus tácticas en ambos contextos, le permitieron a las FARC fortalecer sus capacidades y lograr mayor poder frente a la población y el Estado. De este modo, valiéndose del intenso uso de recursos bélicos y el miedo como herramienta de coacción, las FARC propagaron en el país un régimen de terror, inseguridad y violencia, con el que la guerrilla coartó las libertades de los habitantes, impidió el correcto desarrollo de las capacidades Estatales y vulneró la seguridad de la nación. Hecho que ejemplifica, como

indica Waltz (1979:152, 164), que los conflictos más destructivos y violentos se generan en contextos nacionales a partir de la lucha entre unidades para conseguir o mantener el poder, la justicia y el orden a través del uso de la fuerza. Asimismo, analizadas desde un punto de vista neorrealista (Waltz, 1979:146,194), estas tácticas se justifican ya que representan el medio indispensable a través del cual las unidades de un sistema pueden garantizar su seguridad y supervivencia, y en este caso convertirse en el hegemón del sistema nacional.

CAPITULO II

LA INJERENCIA DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES DE COMERCIO DE LAS FARC EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA

2.1. La minería ilegal, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas de comercio

La incursión de las FARC en actividades ilegales de comercio nació a partir de su necesidad de financiamiento, subsistencia y protección, pues sin estos recursos, la organización no tendría la capacidad combativa ni financiera para persistir en su lucha y hacerle frente al Estado. La trascendencia de la guerrilla en el conflicto armado y su permanencia como fuerza insurgente por más de medio siglo se debe a su exitosa participación y dominio de estos negocios. Igualmente, su incapacidad de intervención como actor económico legal y el constante acecho Estatal para erradicar estos negocios obligaron a las FARC a diversificarlos y aprovechar los recursos naturales y humanos presentes en sus zonas de influencia, innovando las técnicas comerciales y expandiendo su oferta de servicios y productos así como su mercado. Indudablemente, las actividades económicas ilegales de las FARC se convirtieron en el motor financiero de la organización y en su herramienta de consolidación social, económica, militar y territorial.

2.1.1. La minería ilegal: Extracción, tráfico y extorsión

Debido al aumento del precio de los metales en el mercado internacional la extracción y comercialización de minerales como el tungsteno, el oro y el coltán se convirtieron para las FARC en fuentes de ingresos más atractivas que la producción y comercialización de estupefacientes (Massé et Camargo, 2012:7; Abad, 2013: s/n). Esto, además de las leyes implantadas para erradicar el narcotráfico, el permanente acoso a productores y comercializadores de narcóticos, el repliegue militar contra la organización y su expulsión a las selvas y páramos representó una oportunidad para la guerrilla ya que aprovecharon los recursos naturales de esas zonas e iniciaron su actividad minera (Massé et al, 2012:4-8). De acuerdo con Waltz (1979: 154) dentro de un sistema, las unidades interactuantes son capaces de influir y modificar los resultados y comportamientos de otros actores de manera directa; razón por la cual el cambio de la estrategia económica de las FARC responde según el neorrealismo a su necesidad de supervivencia, pero también a la reacción de la guerrilla frente a la persecución del Estado. Del mismo modo, se

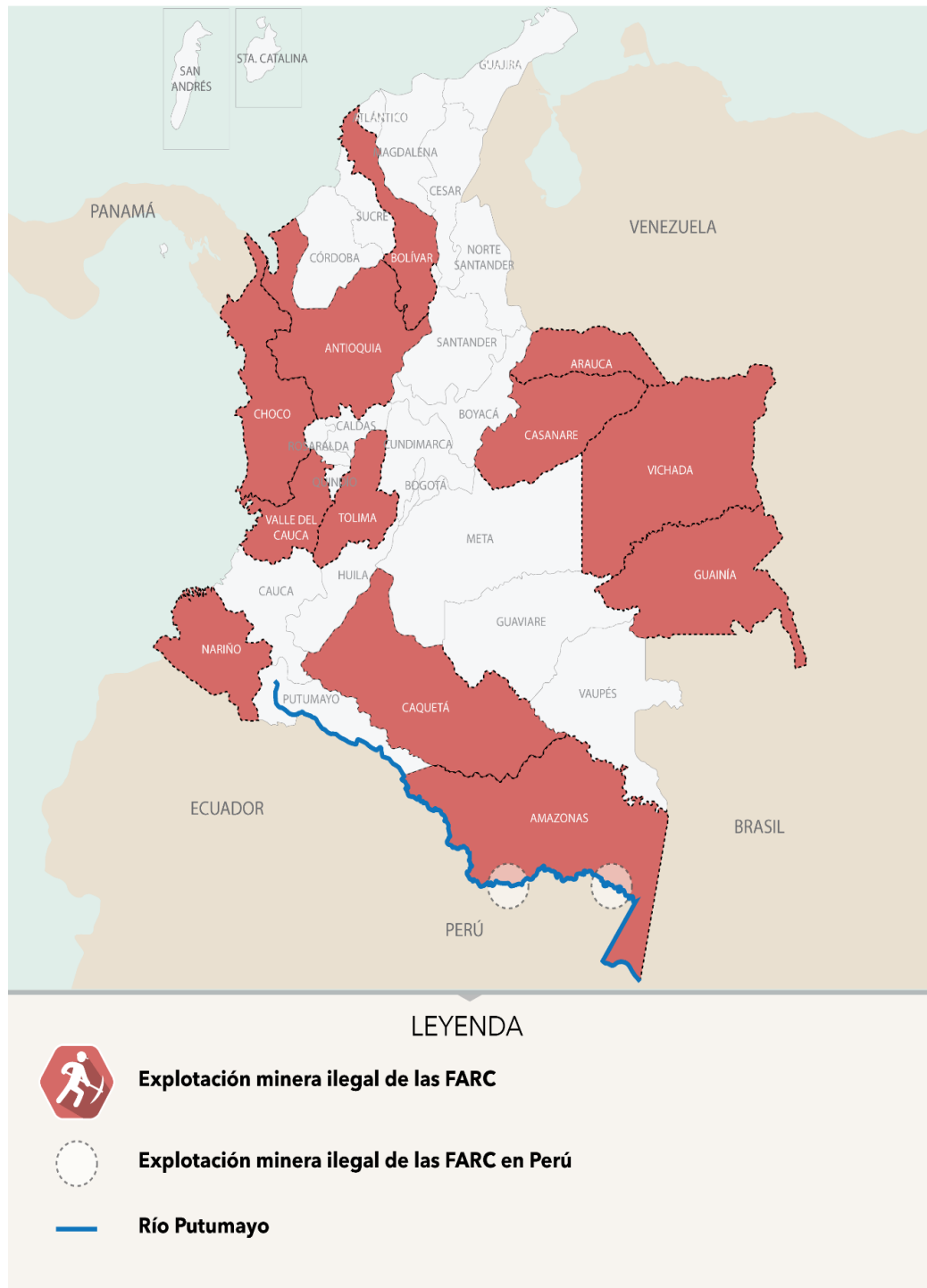
atribuye la diversificación de actividades económicas ilegales de las FARC al principio neorrealista de racionalidad ejecutado por las unidades o actores económicos de un sistema, a través del cual éstos buscan la consecución de sus objetivos, y la maximización de sus intereses y beneficios a menor costo (Gilpin, 1981:57; Waltz, 1979:154).

La minería representa un negocio rentable, seguro y relativamente más fácil que el narcotráfico en relación al precio del mineral por kilo, tiempo de extracción y facilidad de comercialización, pues mientras que un kilo de oro puede extraerse en ocho días, uno de cocaína representa una hectárea de cultivo y su producción requiere alrededor de cinco meses, además de cuidados y gasto permanente. Otro de los beneficios que ofrece este negocio es la legalidad de la mercancía, cuya comercialización está sujeta únicamente al pago de impuestos, por lo que para efectivizarla, las FARC solo necesitan de una tercera persona con licencia de explotación (Abad, 2013: s/n). Asimismo, el marco legal establecido en 2001 por la ley 685 del Código minero favoreció la proliferación de la extracción ilegal de minerales en el país debido a su subjetivo concepto de minería artesanal y el fácil otorgamiento de licencias para explotación (Massé et al, 2012:8). Acosta (2012: s/n) y Rudas (2001:21) señalan que desde el 2001 hasta el 2010 el gobierno concedió 8.928 licencias destinando 8.4 mil hectáreas para esta actividad.

Se ha identificado que las FARC operan en 87 de los 340 municipios en los que se practica la minería ilegal, expandiéndose de norte a sur en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Tolima, Caquetá, Guainía, Arauca, Vichada, Casanare, Antioquia y Bolívar; y a nivel internacional en Perú¹⁵ (Cawley, 2014: s/n; Minería Panamericana, 2013: s/n):

¹⁵ Se estima que desde el 2007 el Frente 63 de las FARC inició operaciones de extracción en territorio peruano debido a la riqueza minera del río Putumayo y gracias a las alianzas formadas con mineros ilegales de este país, a quienes ofrecieron servicios de protección y coordinación logística a cambio de tributos (Cawley, 2014: s/n).

GRÁFICO 4
PRINCIPALES ZONAS DE MINERÍA ILEGAL DE LAS FARC



Fuente: Cawley, 2014; Minería Panamericana, 2013
 Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

A pesar de que la organización saca provecho de la minería a nivel nacional, las ganancias generan diferentes ingresos por localidad, por ejemplo, al noreste, la explotación aurífera de las FARC representa el 45% de sus ingresos, mientras que al sur esta representa el 5% (Gómez: 2015:5). Los principales metales que se comercializan son el cobre, el coltán el oro y el tungsteno. En el caso del coltán, su valor por kilo aumenta a más del 100% en mercados internacionales, con un valor de extracción de \$5 a \$5000 por kilo exportado (Abad, 2013: s/n). Con respecto a la explotación aurífera, esto se debe a que el precio del oro a nivel internacional aumentó desde el 2002 hasta el 2012, de \$310 dólares a \$1.800 la onza respectivamente (Gómez, 2015:4). Por otro lado, la explotación del tungsteno radica en la importancia de este metal para la elaboración de equipos tecnológicos y arsenal militar (ocasiona daños a artefactos blindados). Estos metales se exportan en su mayoría a América del Norte y Europa (Massé et al, 2012:8)

Para las FARC, el funcionamiento de este negocio se da de manera directa e indirecta (Gómez, 2015:51). En el caso de la primera, la organización se localiza en zonas lejanas de extracción y sin presencia Estatal, adquiere maquinaria y debido a que no se necesita un alto número de trabajadores, inaugura sus minas propias. La guerrilla encubre esta labor a través de la presunta explotación artesanal o la creación de empresas ficticias con las que pueden conseguir licencias para la explotación y exportación de minerales. Cuando las FARC practican la minería directa, prohíben a la población la apertura de minas particulares obligándolos a trabajar para la organización (Massé et al, 2012:12-15). En lo referente a la intervención indirecta, la guerrilla ha logrado sacar provecho de toda la cadena de producción minera pues a pesar de no tener minas propias en todo el país, cobran tributos mensuales por la mayoría de actividades que se realizan en el proceso (Gómez, 2015:51; Ardila, 2012: s/n).

En efecto, se estableció el impuesto del gramaje o derecho de extracción, a través del cual la población está autorizada a laborar a cambio de una retribución del 5% a 10% por extracción, que puede pagarse en dinero o metal (González, 2013: 63). Asimismo, la guerrilla cobra tributos a la utilización e importación de la maquinaria que ingresa en las zonas mineras en las que están presentes (Ramsey, 2012: s/n). Específicamente en Tolima y Guainía, se estima que la organización cobra 10% de impuestos a la producción; en

Timbiquí, 50% y 30% de tributos a maquinaria y producción respectivamente; y en Putumayo, mil dólares mensuales por retroexcavadora (Ardila, 2012: s/n). Para asegurarse que se les pague las cantidades correctas, la guerrilla inserta personal armado y de confianza en las minas, el cual reporta la cantidad de mineral extraído (González, 2013: 63). Del mismo modo, se implantó el impuesto por ingreso de gasolina y el cobro de peajes terrestres, aéreos y fluviales para quienes adquieran el mineral y lo transporten a través de sus zonas y rutas de comercialización (Massé et al, 2012:15; Zapata, 2014: s/n).

Al tratarse esta de una actividad ilegal y con altos índices de criminalidad, las FARC obtienen beneficios al cobrar tributos para brindar seguridad a los trabajadores y a las empresas mineras de otros actores armados o para no atentar contra ellas (Gómez, 2015:53). Según Ronderos (2011: s/n), existen asociaciones entre empresas nacionales y multinacionales con las FARC, con el objetivo de que la guerrilla desaloje a los habitantes y comunidades indígenas y despeje de las zonas extractivas. De esta manera, a través de métodos de hostigamiento, secuestro y homicidios, la organización facilita la implantación de empresas nacionales y extranjeras en el país (Massé et al, 2012:19). Las FARC no solo extorsionan minas pequeñas y artesanales, sino también a grandes multinacionales y a las autoridades zonales que cobran los impuestos de la producción (Gómez, 2015:49). Como se mencionó, las FARC dominan la cadena de comercialización de minerales, por lo que se han convertido en la organización de mayor relevancia en la minería ilegal y han transformado esta actividad en una fuente de ingresos para el engrandecimiento de la organización y la adquisición de droga y armamento (Massé et al, 2012:8; Zapata, 2014: s/n). Ramsey (2012: s/n) asegura que en 25% del territorio nacional, esta actividad ha desplazado a la producción de coca de las FARC convirtiéndose en su actividad principal en lugares específicos (Massé et al, 2012:8).

La participación de la guerrilla en la minería ilegal ha acarreado problemas sociales y medioambientales. Con respecto a los primeros, se critica la violación de derechos por parte de la organización, ya que desde de su inmersión en este negocio se han vulnerado territorios ancestrales y derechos de pueblos indígenas. Del mismo modo la guerrilla atenta contra la salud y los derechos humanos y laborales de quienes participan en este proceso pues

además del maltrato psicológico, las condiciones para la explotación ilegal son inhumanas y el jornal es ínfimo en relación al trabajo (Abad, 2013: s/n).

Además, la criminalidad en las zonas mineras se ha incrementado no solo debido a las pugnas por territorio y materia prima, sino a causa del afianzamiento de redes ilegales de tráfico de insumos como herramientas y gasolina, necesarios para la extracción; incluso, se le atribuye a las FARC alianzas con las bandas criminales emergentes BACRIM tanto para la extracción como comercialización de oro (Cawley, 2014a: s/n; González, 2013: 63). Por otro lado, con respecto a los perjuicios medioambientales, la guerrilla no solo irrespete las áreas naturales protegidas, sino que tampoco cuenta con los permisos de funcionamiento ni con las normas medioambientales estipuladas, por lo que al extraer el metal con instrumentos nocivos como el cianuro y mercurio, el impacto a la flora, fauna y el capital humano es mayor (Rubiano, 2012:2).

2.1.2. El tráfico ilegal de armas

Desde la implantación del Plan Colombia (1999) y con el repliegue militar del Ejército colombiano a partir del Plan Patriota (2003), las FARC incrementaron la adquisición de arsenal militar para protegerse, contrarrestar los ataques del Estado y quitarle a éste el monopolio del uso de la fuerza (Pinedo, 2007: s/n). La comercialización ilegal de este material se volvió vital para la organización pues su consolidación económica, política y militar es directamente proporcional a su suministro de armas; sin estos recursos la capacidad combativa y de ataque de la guerrilla se vulneraría. Por tal motivo, las FARC exploran nuevas rutas y mercados para abastecerse constantemente ya que deben proporcionar como mínimo un arma por miembro (Pinedo, 2007: s/n).

La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen [UNODC] (2006:27) asegura que debido a las condiciones climáticas y el entorno en el que habitan los militantes, los enfrentamientos, las pérdidas de armamento en combate y las incautaciones del ejército, el tráfico de armas no solo se ha convertido en un negocio lucrativo sino en un mecanismo de supervivencia, que, en el último decenio representó más del 50% de los gastos de la guerrilla (Villamarín, 2013:103). El fortalecimiento bélico resulta imprescindible para las FARC pues según Waltz (1979:146,194) representa no

solo un medio de protección, sino una herramienta para que puedan desarrollarse las capacidades militares y tecnológicas de un actor y que éste gane mayor poder relativo frente a su enemigo.

Las FARC obtienen armamento principalmente de su adquisición en el mercado negro mundial, robo y compra de equipo a instituciones gubernamentales, ejércitos y compañías manufactureras de armas nacionales e internacionales y mediante la elaboración artesanal. Con respecto a la última, la organización no solo domina la cadena de producción de artefactos explosivos, morteros, cohetes, granadas, armas ligeras y repuestos, sino que realiza su propio mantenimiento y reparación (UNODC, 2006: 33; Cragin et al, 2005: xx). La guerrilla ha forjado también alianzas con organizaciones criminales y traficantes internacionales y ha comercializado armas con países de Norte, Centro y Suramérica, Europa y el Medio Oriente (Aguirre, 2011: 43,44, 50). Por ejemplo, Pinedo (2007: s/n) asegura que las FARC compraron más de 7.000 granadas al ejército ecuatoriano, acto que culminó en la explosión del Fuerte Galápagos (Riobamba) en noviembre del 2002 con el objetivo de que se justifique la desaparición del armamento; y que en 2009 se decomisaron a la guerrilla lanzacohetes de fabricación sueca comprados al ejército venezolano en 1980. No obstante, aunque puede constatarse la proveniencia del armamento, no se ha logrado comprobar la participación de los gobiernos ni sus relaciones directas con el grupo, ya que se utiliza una tercera persona encargada de realizar las transacciones (UNODC, 2006: 31-32).

La posición geográfica y extensión de Colombia colaboran con la comercialización de armas pues el país conecta el centro y sur del continente; además, a causa del deficiente control policial y militar en las fronteras terrestres y marítimas por la concentración de efectivos en ciudades, el traslado de mercancía a través de puntos fronterizos sin control se facilita (Cragin et al, 2005: xvii). De acuerdo con la UNODC (2006:26), tan solo las FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, representan el 80% de la importación ilegal de armas. Con respecto al transporte de la mercancía, la organización las adquiere a través de rutas terrestres, aéreas y marítimas. Por tierra (vía más utilizada), el tráfico se da a través de camiones, mientras que por mar, los traficantes ocultan la mercancía en bolsas plásticas, las lanzan al agua y estas se recogen en embarcaciones

más pequeñas. En ambos casos, el medio de transporte regresa lleno de droga o minerales como forma de pago (Cragin et al, 2005: 36). A continuación se identifican las principales rutas de tráfico de armas de las FARC a través de las fronteras colombianas:

GRÁFICO 5
ROUTAS DE TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS DE LAS FARC HACIA COLOMBIA



Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, 2006
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

La mercancía ingresa a Colombia a través de los 4 países vecinos, sin embargo, debido a su ubicación, Panamá constituye un corredor privilegiado para la comercialización ilegal del armamento exportado desde Centro, Norte

América, Europa y Asia, siendo las fronteras marítimas y el transporte aéreo los más recurrentes ya que el envío terrestre se dificulta a causa de las selváticas zonas fronterizas. El escenario anterior se repite en la frontera con Brasil, por lo que el transporte aéreo y marítimo a lo largo del río Amazonas es el principal medio de tráfico; se detectó también que este país sirve como puente entre Surinam y Colombia (UNODC, 2006: 36, 36, 39,40). Con respecto a la frontera con Ecuador, el transporte terrestre es la principal vía de acceso gracias a la cantidad de pasos fronterizos legales e ilegales y a la constante actividad comercial de bienes, la cual se aprovecha para camuflar la mercancía en camiones y transporte de carga. Esto convirtió a Ecuador en el principal proveedor de explosivos de las FARC. Asimismo, se aprovecha el dinamismo de la frontera colombo-venezolana y las extensas zonas limítrofes despobladas, de difícil acceso y sin presencia militar para transportar la mercadería ilegal por tierra; no obstante, la guerrilla recurre también al transporte aéreo desde pistas de despegue ilegales (UNODC, 2006: 36, 38, 39). Finalmente, a pesar de que la organización ha adquirido material bélico de Perú, esta frontera es la que representa menor movimiento de tráfico de armas (UNODC, 2006: 41).

A partir del fortalecimiento militar del Estado y con el rearme de las FARC se generó en Colombia un ciclo en la adquisición de armas, que inicia con el deseo de la guerrilla de aplacar al gobierno y fortalecerse; en consecuencia otros grupos ilegales y paramilitares compran armas para enfrentar a las FARC y finalmente la población se arma para protegerse de ambos (Cragin et al, 2005: 10). En efecto, se identificó que las FARC incrementaron sus volúmenes de compra, y que aunque generalmente la organización adquiere armamento en pequeños volúmenes para eludir los controles y facilitar el transporte de la mercancía, estas compras también se efectúan al granel (Cragin et al, 2005: xv). Asimismo las FARC se dotaron de equipos de vanguardia como rifles de alta precisión, instrumentos de visualización nocturna, artefactos adaptados para francotiradores, material bélico pesado y de destrucción masiva¹⁶, como misiles y cohetes (Urrutia, Ortega et Andrade, 2009:18; UNODC, 2006: 26).

¹⁶ De acuerdo con las Naciones Unidas (s/f: s/n), las armas de destrucción masiva se clasifican en nucleares, químicas y biológicas. Se entiende como arma de destrucción masiva a *"cualquier tipo de explosivo, bomba incendiaria, o gas tóxico como bombas, granadas, cohetes, misiles, minas o dispositivos similares a los antes descritos; cualquier arma diseñada con la intención de causar daños corporales de muerte o serios por su liberación, diseminación, o el impacto de productos químicos tóxicos o venenosos, o sus precursores; cualquier arma que implica un organismo de enfermedad; cualquier arma que es diseñada para liberar la radiación o la radiactividad en un nivel peligroso a la vida humana"*(FBI, s/f:s/n).

De acuerdo con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen, (2006: 27), en el 2004 y 2005, del total de los fusiles decomisado por el ejército colombiano, 43.7% y 63,4% respectivamente tenían como destino las FARC. Así mismo, las municiones incautadas para la guerrilla representaron para esos años 60.9% y 76.6% del total. Gracias a estos operativos e incautaciones, puede determinarse que históricamente los guerrilleros han utilizado morteros, armas ligeras (pistola, revólver), fusiles (AK-47, AKM, MPIKM, FAL) y rifles (Roger Mini-14, COLT, AR-15, M-16, Match Target) (UNODC, 2006: 27).

Waltz (1979:134) establece que los mercados nacen, se desarrollan y evolucionan a partir de las actividades y necesidades individuales o comunes de los actores económicos. Tal premisa se plasma en Colombia, pues a partir del desarrollo de actividades militares e ilegales de comercio, necesarias para cumplir con los objetivos económicos y de subsistencia de las FARC, la organización, dio paso a la proliferación del tráfico de armas, instaurado en el país un nuevo mercado ilegal con alcances internacionales, en el que participan un sinnúmero de actores cuyos intereses se fusionan con los de la guerrilla.

2.1.3. Consolidación económica de las FARC a partir de la minería ilegal, el tráfico de armas y otras fuentes ilícitas

Las herramientas económicas son el medio indispensable para la consecución de objetivos y fines político-militares, ya que solamente a través de ellas, los actores estarán en capacidad de solventar sus necesidades y sobrevivir; en efecto, a través del desarrollo de sus capacidades económicas, un Estado puede demostrar su poder relativo frente a otros (Waltz, 1979:141, 146,194). Por lo mismo, la estabilidad y crecimiento financiero de las FARC representa la piedra angular de su consolidación nacional ya que de otro modo la guerrilla no tendría los medios para enfrentar al Estado, costear su lucha y mucho menos garantizar su supervivencia. En efecto, sin un respaldo económico, las estrategias sociales, políticas y militares de las FARC fracasarían, pues en el caso de las primeras, la lealtad del pueblo con la organización se fundamenta en su aportación económica; y con respecto a las militares, sin un sustento económico, no podrían abastecerse de armamento (Montero, 2012a: s/n). Además, el poder económico de las FARC es indispensable para saldar sus gastos anuales, los cuales en el periodo 2003-2013 alcanzaron \$48 millones de dólares en alimentación, \$1 millón en salud,

equipos técnicos y de comunicación respectivamente, \$2 millones en propaganda, \$4 millones en viáticos y transporte, \$10 millones para la manutención de las familias de los guerrilleros, \$20 millones en uniformes y vituallas, \$40 millones en aparatos explosivos, \$60 millones en construcción y obras públicas y \$ 200 millones en armamento (Villamarín, 2013: 103; Matta, 2014:s/n).

Los egresos permanentes de las FARC la impulsaron a diversificar sus actividades económicas y a especializar a sus unidades. Esto se debe a que el desarrollo económico de un régimen se alcanzará a través de la división del trabajo, ya que gracias a esta especialización cada unidad desarrollará de mejor manera las actividades en las que sobresalgan sea por sus capacidades relativas individuales o colectivas, y así, cada actor incrementará su valor dentro del sistema a partir de su aporte individual (Waltz, 1979: 158). Si comparamos a la guerrilla con un Estado, puede concluirse que el desarrollo económico de las FARC se ha logrado a partir de la especialización de cada bloque y frente en las actividades ilegales de comercio en las que son mejores debido a sus capacidades relativas, como territorio y recursos naturales. Gracias a su desarrollo económico, las FARC fueron catalogadas como el tercer grupo irregular con más recursos a nivel mundial después del Estado Islámico (\$2.000 millones de dólares) y el grupo Hamás (\$1.000 millones) (Macías, 2014: s/n). Se estima que en 2002 la organización percibió casi \$500 millones de dólares y \$1.925 millones al finalizar la década, incrementándose su capital en 385% (Villamarín: 2013: 1100; 2014:99).

Sin embargo, debe considerarse que los cálculos del capital de las FARC se basan en incautaciones de armas y droga realizadas por el ejército, estimaciones del precio de los metales a nivel internacional y memoria colectiva, por lo que no puede establecerse una cantidad exacta del patrimonio total de la organización. Históricamente los ingresos de las FARC se han dividido de la siguiente manera: 35% narcotráfico, 20% minería ilegal, 30% secuestro y extorsión y 15% otras entradas “legales” (Montero, 2012a: s/n). Estas actividades están directamente relacionadas y dispuestas a mantener la estructura de la guerrilla y garantizarle expansión y supervivencia, ya que tanto el tráfico de metales y droga sirven de fuente de financiamiento y pago para la adquisición y fabricación de armas, a partir de las cuales la organización

defiende su capital físico y humano, ejerce control y poder económico y social, y reduce sus gastos (Aguirre, 2011: 43).

Como puede verse, después del narcotráfico, los actos coercitivos de las FARC como el secuestro, el chantaje, el hostigamiento y la extorsión, son su segunda actividad económica más rentable. El grupo guerrillero ha aprovechado su fuerza y recursos militares para acribillar a la población y empresas nacionales e internacionales obligándolos a pagar un sinnúmero de tributos a cambio de no arremeter contra ellos, como venganza o simplemente como fuente de ingreso. Con estos actos, que atentan contra los derechos humanos, las FARC inyectaron a la organización alrededor de \$150 y \$575 millones de dólares en el 2002 y 2010 respectivamente (Villamarín: 2013: 99; 2014:1100). Sin embargo el aporte de estas actividades no es solo económico sino también social y territorial, pues con esto la organización se impone como ente hegemónico e impulsa la migración interna apropiándose de los bienes de la población. Por otro lado, con respecto a la minería ilegal, a pesar de que en 1989 se estableció a la extracción como una actividad lucrativa, no fue sino hasta el 2007 que su ejecución fue fructífera (Montero, 2012a: s/n).

Para la Fundación Ideas para la Paz (2012:3) y Cawley (2014: s/n) esta actividad es de suma importancia económica ya que como se mencionó anteriormente, en zonas de riqueza mineral, este negocio es más rentable que el narcotráfico, y no solo contribuye con ingresos de mínimo \$3 millones y \$ 90 mil dólares mensuales en Colombia y Perú¹⁷ respectivamente, sino que funciona como activo transable para la adquisición bienes. Por ejemplo, las FARC pueden negociar alrededor de 96 fusiles por un kilo de oro (El Tiempo, 2015: s/n). La guerrilla se ha consolidado como la principal organización ilegal dedicada a la extracción de minerales. En efecto, únicamente con respecto a la explotación aurífera en el departamento de Chocó se extraen alrededor de 15 kilos de oro al mes. Las ganancias por la extracción y comercialización de metales fueron de \$100 millones de dólares en 2002 y \$385 en 2010 (Villamarín: 2013: 99; 2014:1100).

Otro de los ingresos económicos de las FARC son sus actividades económicas “legales”, las cuales, según Montero (2012a: s/n) generan ingresos a través de las empresas fachada de la organización y de las donaciones de ONGs internacionales y entidades latinoamericanas comunistas que apoyan su

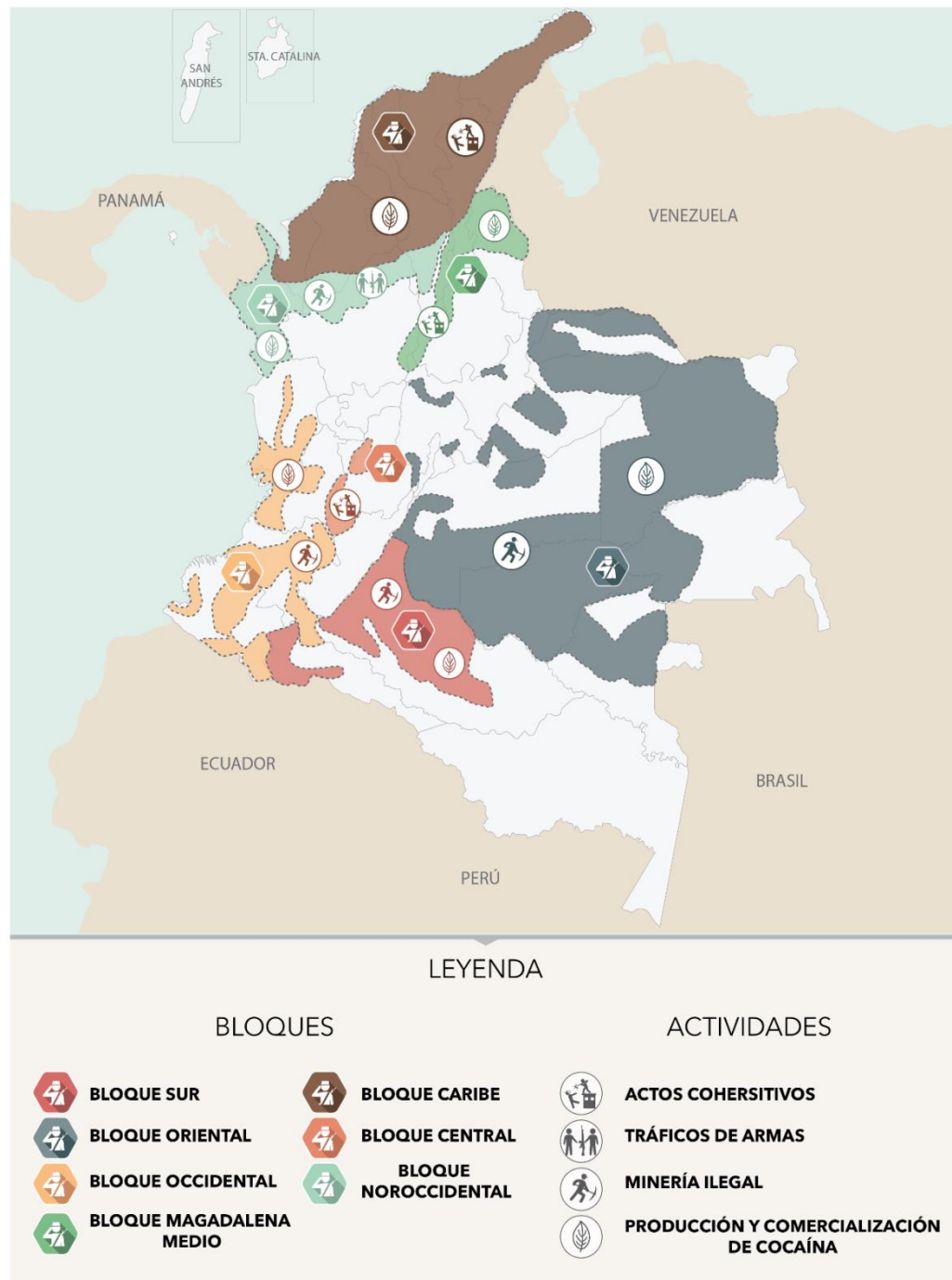
¹⁷ Total aproximado de las actividades mineras directas e indirectas de las FARC en este país.

lucha, con las que la guerrilla realiza propaganda cibernética contra el Estado y las Fuerzas Armadas a causa de su supuesta violación de derechos humanos contra la población rural. En el periodo 2002-2010, estas generaron \$75 y \$288 millones de dólares respectivamente (Villamarín: 2013: 99; 2014:1100, 1669). Por último, con relación al tráfico de armas, a pesar de que puede considerarse más bien como un gasto, esta actividad es esencial para la consolidación económica y territorial de las FARC porque de esta manera, y debido a su organización logística, su posicionamiento y poder adquisitivo, han logrado suministrar armas a todos sus miembros, convirtiéndose en una amenaza a nivel nacional e internacional (Cragin et al, 2005: xxi). Se estima que hasta el 2010 las FARC contaban con 20 mil armas, 90% fusiles y 10% pistolas y revólveres (RCN, s/f: s/n).

Se calcula que para el 2010, las FARC estuvieron presentes con mayor o menor influencia en todo el territorio nacional y su capital les permitió abastecer, con un promedio de 2 armas por persona, a 8.978 guerrilleros (Saumeth, 2011:4; RCN, s/f: s/n) distribuidos en 103 frentes y 13 estructuras móviles. Además, según Matta (2014: s/n) con todo el dinero y material bélico que invirtió las FARC en su estructura entre el 2003 y 2009, pudo haberse proporcionado armamento para a 87 batallones de las Fuerzas Armadas. Es importante mencionar que a pesar del crecimiento económico general existen diferencias de ingresos entre los 7 bloques de la organización, siendo los más pudientes aquellos dedicados a la producción y comercialización de drogas.

Como indica el GRÁFICO 6, el Bloque Caribe y Bloque Central son los que menos ingresos perciben, puesto que mientras el primero se dedica principalmente a la extorsión y el contrabando de petróleo desde Venezuela y se presume que cuenta con cultivos y laboratorios de coca, el segundo se financia exclusivamente de tributos a empresas o a la población. Por otro lado, el Bloque Noroccidental (Iván Ríos) es uno de los más pudientes debido a que controla el tráfico de armas, metales y droga hacia América Central. Asimismo, el Bloque Alfonso Cano controla cultivos de coca y explotación minera y se encarga del contrabando por el Océano Pacífico. El Bloque Magdalena Medio participa en el tráfico de drogas y la extorsión a compañías petroleras, además representa una fuerza económica y militar para la guerrilla. Finalmente, los Bloques Sur y Oriental han afianzado su fortuna a través de la minería ilegal, especialmente del oro y el coltán, además del cultivo de coca (León, 2012: s/n).

GRÁFICO 6
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS BLOQUES DE LAS FARC



Fuente: León, 2012
 Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

Sin embargo, aunque estas actividades han fortalecido y consolidado a la organización en el ámbito económico y territorial, también han deteriorado su lucha e imagen y han corrompido a los guerrilleros, ya que aquellos localizados en frentes de gran dinamismo económico, no solo han despilfarrado el dinero

en estupefacientes y objetos suntuosos, sino que han establecido su propia estructura financiera y no tributan al Estado Mayor Central (Macías, 2014: s/n). Es importante mencionar que la facilidad con la que las FARC realizan sus actividades ilegales de comercio, a través de las cuales la guerrilla está en capacidad de ejecutar sus estrategias políticas y militares, radica en que al consolidarse como un grupo disidente y como el opositor político del régimen la organización desconoce tanto la normativa legal nacional así como la extranjera. En efecto a pesar de la existencia de leyes que a nivel interno y externo regulan y prohíben el desarrollo de actividades ilegales como el tráfico de mercancía y la violación de los derechos humanos, las FARC rechazan cualquier tipo de autoridad y mandato (Hernández, 2002: 34); por lo tanto al contar con el camino libre para su ejecución, no le temen a las consecuencias legales que la violación de tales leyes acarrearán.

2.2. La injerencia del narcotráfico en el sector agrícola

Desde hace más de 30 años el narcotráfico se ha constituido como la fuente principal de ingresos de las FARC, no solo por su rentabilidad sino porque a partir del conocimiento adquirido de los cárteles colombianos, la organización llegó a dominar la fabricación de estupefacientes convirtiéndose en uno de los productores y comercializadores más poderosos e inquebrantables de Colombia. Gracias a la penetración territorial, la utilización de tácticas sociales y coercitivas y su extensa red de alianzas internacionales, la guerrilla ha captado los recursos naturales y mano de obra indispensables para la consolidación de su cadena de producción en Colombia y en el extranjero. A partir de este punto, las FARC dejaron atrás sus postulados socialistas y se convirtieron en un agente económico productivo, para quien el ejercicio de actividades comerciales fue prioritario; consecuentemente, valiéndose de su poder vulneraron el desarrollo económico y social de la población, principalmente la rural.

2.2.1. Narcotráfico: Producción y comercialización

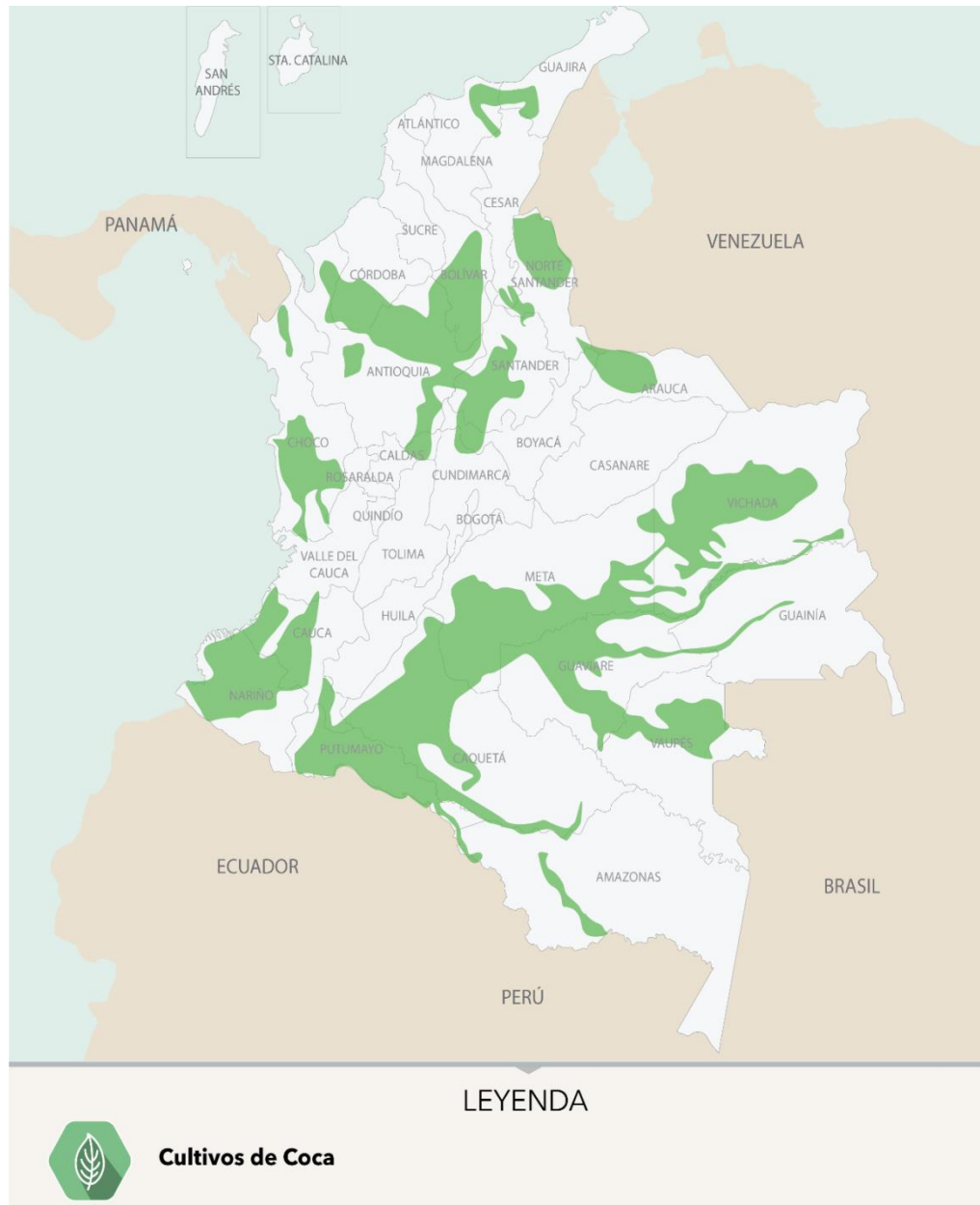
El acercamiento de las FARC con el narcotráfico se dio a partir de 1970 a través la alianza creada entre los cárteles colombianos y la guerrilla, mediante la cual, esta última les resguardó de la persecución Estatal, les sirvió de apoyo logístico y actuó como ente protector de sus territorios (Villamarín, 1996:153-162). Según Mackenzie (2007:348) esta asociación fue imprescindible para ambos actores pues mientras que las FARC necesitaban

liquidez, los narcotraficantes carecían de un ejército que controle a la Fuerza Pública. A través de este servicio la organización percibía casi \$20 mil dólares por kilo de cocaína comprado, entre \$60 mil y \$80 mil por kilo vendido y alrededor de \$100 mil por aterrizaje. Estos rubros le generaron aproximadamente \$40 millones al año, capital que se utilizó en la adquisición de armas y aceleró su consolidación territorial y humana en el país (Villamarín, 1996:179-599).

No obstante, a pesar de contar con ingresos permanentes y cuantiosos fruto de la minería ilegal, el secuestro, las extorsiones y el cobro de tributos, estos no fueron suficientes para la consecución del Plan Estratégico y sus objetivos políticos, económicos, militares y sociales, por lo que en la Séptima Conferencia de las FARC (1982) se acordó la intensificación de las actividades ligadas al tráfico de drogas (Villamarín, 1996:382; Mackenzie, 2007: 385). Este cambio significó el fortalecimiento de la gestión narcotraficante de la guerrilla desde 1987 hasta 1992, periodo en el que valiéndose del rápido crecimiento urbano, el abandono rural, la experiencia, el capital humano, físico y económico que adquirieron y substraieron de los cárteles, las FARC se instauraron como organización narcotraficante (Villamarín, 1996:187, 636,1033).

Las FARC están relacionadas al narcotráfico en su totalidad, sin embargo, el cultivo, la transformación y venta se diversifica por zonas, lo que genera una relación directa entre crecimiento económico y disposición de las unidades, pues aquellas localizadas en zonas cocaleras generan mayores ingresos (Villamarín, 1996:771-789). En el caso del cultivo, esta actividad se extiende a todos los bloques en mayor o menor cantidad, pues cada uno es responsable de al menos 66 semillas de coca por ciclo de producción (Mackenzie, 2007: 385). La superficie total de coca sembrada por la organización para el 2010 fue de 49 mil hectáreas (80% de la producción cocalera nacional), localizándose las mayores extensiones en los territorios del Bloque Occidental (Nariño y Cauca) con 15 mil hectáreas, del Bloque Sur (Putumayo, Amazonas y Caquetá) con 10.370 mil, del Bloque Oriental (Guainía, Casanare, Guaviare, Arauca, Meta, Vaupés y Vichada), con 8.426, y del Bloque Noroccidental (Antioquia, Chocó y Córdoba) con 6.977 hectáreas.

GRÁFICO 7
PRINCIPALES ZONAS COCALERAS DE LAS FARC



Fuente: León, 2012
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

En 2010, los cultivos de la guerrilla generaron cerca de 200 toneladas (Centro Democrático: 2015 s/n; RCN, 2013; s/n) y, para ese año las ganancias representaron 0.16% (\$0.45 billones) del PIB¹⁸ colombiano (Gobierno de Colombia et UNODC, 2011:8). A finales de los 90, la organización también fue responsable de 80% del total nacional con 140 mil hectáreas, lo que demuestra

¹⁸ \$287.18 mil millones de dólares (Banco de la República, 2016:4)

que a pesar de haberse reducido el volumen de producción, la organización la ha dominado por más de dos décadas (Villamarín, 1996:2080).

Con respecto a la comercialización de clorhidrato de cocaína, los principales frentes dedicados a esta actividad son el 29 y 48, localizados en los departamentos de Nariño y Putumayo (frontera con Ecuador); el frente 30 en el departamento de Valle del Cauca y el 55 en la frontera con Panamá; y los frentes 33 (Norte de Santander), 10 y 16 (Frontera con Venezuela y Brasil) (McDermott, 2013b: 20). Para las FARC, la venta de cocaína es sumamente beneficiosa, pues no solo fijan el precio del mercado interno, sino que el kilo incrementa su precio a medida que se internacionaliza. Este se comercializa entre \$2 mil y \$3 mil dólares en Colombia, alcanzando los \$4 mil y \$6 mil en países fronterizos, \$8 mil a \$15 mil en Centro América y México hasta llegar los \$25 mil en Estados Unidos y \$60 mil en Europa (McDermott, 2013a: s/n). En 2010, el precio promedio de 1 kg de hoja de coca fue de \$1.300 dólares; de pasta de coca \$1.015; de base de cocaína \$1.475 y de cocaína \$2.439 (Gobierno de Colombia et al, 2011:54).

En lo que se refiere a la exportación de cocaína, aunque las FARC utilizan las mismas rutas que en el tráfico de minerales y armas, la principal vía de salida del narcotráfico es por el Océano Pacífico, para lo cual la organización utiliza transporte terrestre aéreo, marítimo y submarino para trasladar la droga a Centroamérica y México. No obstante, a pesar de la evidencia contundente que vincula a las FARC con el narcotráfico, la organización niega su participación y justifican sus ingresos con el cobro de impuestos por las actividades que se realizan en su territorio (RCN, 2013; s/n; McDermott, 2013a: s/n). El pago de impuestos a la guerrilla es un requerimiento mandatorio tanto para compradores como vendedores de cualquier derivado de cocaína, insumos, medios de transporte o servicios relacionados, pues dentro de territorio fariano, la organización controla minuciosamente el pago y participación individual en todas las transacciones; la pena de evasión es la muerte o actos coercitivos en contra el individuo o su familia. En sus áreas de influencia, las FARC cobran tributos de hasta \$50 y \$200 por kilo a los compradores y vendedores de base de coca respectivamente, además de los gravámenes y peajes por el uso de laboratorios de transformación (\$100/kg producido) y de las rutas de transporte

y movilización terrestre o marítima de la mercancía (\$100/kg) (McDermott, 2013a: s/n).

El éxito de la organización en lo referente al narcotráfico radica en su capacidad organizativa y financiera, el control de la cadena de producción, la permanente dotación de la materia prima e insumos, el transporte y sobre todo las alianzas internacionales (Villamarín, 1996:444, 621). En efecto, Villamarín (2014: 372-621) identifica a traficantes peruanos, la guerrilla Sendero Luminoso, la mafia rusa y los grupos terroristas IRA, ETA, y AL QAEDA como contactos de las FARC, y asegura que gracias al dinero del narcotráfico, desde el 2005 la organización financió las campañas políticas de los gobiernos de Argentina, Cuba, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela; asimismo este autor (1996:418; 2014:2652) vincula al grupo guerrillero con los cárteles mexicanos de Sinaloa, Juárez, Guadalajara y Tijuana, a los que exporta 55% de su producción.

Las relaciones forjadas entre las FARC y sus socios comerciales para lograr el enriquecimiento ilícito a través de la participación en la cadena del narcotráfico, evidencian, como aseguran Waltz (1979: 154) y (Gilpin 1981:57) que las unidades semejantes o aquellas que buscan la consecución de un objetivo común, aplican el principio de racionalidad para lograrlo a través de la creación de relaciones de autoayuda e interdependencia. En efecto la interdependencia entre los actores mencionados no solo le garantizaron a las FARC su consolidación internacional sino su título de la guerrilla más peligrosa a nivel mundial y el tercer cártel narcotraficante en Colombia, igual y más fuerte que el de Cali o Medellín. Gracias a estos componentes, los réditos del narcotráfico no solo le permitirán a las FARC permanecer activas por más de una década, sino que se han incrementados históricamente, desde 175 millones de pesos en el periodo 1991-1993 (Villamarín, 1996:1407), a un promedio de \$380 a \$620 millones de dólares al año en el último decenio (Corporación Nuevo Arcoíris et Fundación Avina Colombia, 2013: 17).

A pesar los beneficios económicos del narcotráfico, este hecho ha afectado enormemente a la guerrilla en los aspectos sociales y políticos, pues no solo pone en tela de duda los postulados fundacionales de la organización y su trabajo político, sino que ha generado repudio nacional a causa de la ilegalidad de sus actividades y de su relación con traficantes y grupos terroristas. Además, con la profesionalización de su cártel ejemplifican el

capitalismo y la sed de poder mas no el respeto a los derechos campesinos y la lucha social, pues incluso vulneran los derechos de menores de edad y ciudadanos aborígenes obligándolos a participar en la cadena de producción de estupefacientes (Villamarín, 1996:1319-837, 844).

Asimismo, su sola presencia, sumada a la proliferación de esta actividad es sinónimo de violencia y problemas sociales como el alcoholismo y la prostitución (Mackenzie, 2007: 385). En efecto, la violencia que genera el narcotráfico ha incrementado las disputas por territorio cocalero con otros cárteles, con los paramilitares, las AUC y BACRIM y la población rural; ante este escenario, las FARC dejaron de ser un problema de seguridad nacional convirtiéndose en una amenaza de alcance continental (McDermott, 2013a: s/n; Villamarín, 1996:1016; 2014:130). La creación de alianzas entre las FARC y otros actores internacionales no solo le garantizó a la organización el fortalecimiento de sus capacidades económicas frente a otras unidades nacionales e internacionales, sino que a causa del incremento de su poder relativo, la guerrilla se convirtió en una amenaza para la seguridad de ambos sistemas (Dunne, et al, 2007: 73-74); lo que demuestra, como asegura Waltz (1979: 91, 178, 180), que la interrelación y el comportamiento de actores no Estatales nacionales y extranjeros es determinante en los resultados deseables y el equilibrio de poder tanto de los sistemas nacionales e internacionales.

2.2.2. Consecuencias para el sector agrícola

El sector agrícola es el motor económico de Colombia pues de su productividad y calidad dependen la sostenibilidad alimentaria del país, la participación de sus productos en mercados nacionales e internacionales y el desarrollo social de la nación. En efecto, para el periodo 2002-2010, el agro empleó a 20.3% de la población nacional y 50% de la rural (26.3% de la población total) (Leibovich et Estrada, 2009:140; Banco Mundial, 2016: s/n). Además en ese mismo periodo 38% del suelo se destinó a la agricultura y se generaron en promedio 25.6 mil TM contribuyendo con 6.96% al PIB nacional (Banco Mundial, 2016: s/n; Kalmanovitz, s/f: 25; Piñeros et Beltrán, 2013:14). Sin embargo, el fortalecimiento económico de las FARC ha ralentizado el crecimiento del agro pues a causa la violencia e inestabilidad que genera la presencia de la guerrilla, 20% de la población campesina ha abandonado sus tierras convirtiéndose en mano de obra no calificada en las capitales (Kalmanovitz, s/f : 20). Asimismo, el cultivo de coca ha frenado la inversión y la

producción agrícola tradicional debido a la diferencia de precios de comercialización, al incremento de mano de obra en cultivos de coca y al temor de expropiación territorial por parte de las FARC (Villamarín, 1996:355; Ministerio de Justicia et UNODC, s/f: 19).

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014: 344-345), el propósito fundacional de las FARC fue el establecimiento de una reforma agraria que garantice el respeto a la población rural, el acceso gratuito y equitativo a la tierra, la estabilización de los precios de comercialización de los productos agrícolas, y el apoyo físico y humano para reactivar la industria e impulsar el desarrollo agrario. No obstante, al convertirse el narcotráfico en una herramienta indispensable para la consecución de sus objetivos, la organización se transformó en latifundista, violó los derechos campesinos y se apropió de su capital y de sus zonas productivas para convertirlas en cocaleras; y, mediante actos coercitivos, miedo y ofertando el crecimiento económico, la guerrilla introdujo a los agricultores a la siembra de coca, presionándolos además para que formen parte de la cadena de producción de la droga, tomen partido en sus actividades políticas, y se enlisten en la organización (Mantilla, 2012:55; Villamarín, 1996:100-436). Asimismo, con el objetivo de resguardar sus cultivos ilícitos, las FARC instigaron a los agricultores de coca a protestar y denunciar las acciones gubernamentales y extranjeras de erradicación enfatizando que los esfuerzos se deben únicamente a que se busca drenar los recursos naturales de Colombia y abusar de la población (Villamarín, 2014:685-695).

De este modo, para el 2002, de un total de 169 mil hectáreas de coca, las FARC cultivaron 135 mil, convirtiendo a este en el cuarto producto más cultivado por hectárea después del café (869 mil), el plátano (366 mil) y la caña (174 mil); para el 2010 la coca ocupó el quinto puesto con 62 mil hectáreas, detrás de los cultivos de café (914 mil hectáreas), plátano (351 mil) caña (172) y cacao (110) (Pérez et Pérez, 2002: 54; Ministerio de Agricultura et Agronet, 2016: s/n). Como se mencionó anteriormente, para ese año la organización destinó 49 mil hectáreas al cultivo de coca (Centro Democrático: 2015: s/n).

Las razones para abandonar la agricultura tradicional e iniciar con el cultivo de coca no se relacionan ni con la afinidad política de los campesinos hacia la organización ni con el origen rural de las FARC, sino con la rentabilidad de un minifundio de coca, pues este genera mayores ingresos que

uno de pancoger¹⁹ (Villamarín, 1996:195). Por ejemplo, mientras que el ingreso anual de un agricultor tradicional en 2010 fue \$933.78 dólares²⁰ (Banco de la República, 2016: s/n), el ingreso anual de los campesinos dedicados al cultivo de coca fluctuó entre \$1.427 y \$9.000 dólares (Gobierno de la República et al, 2011: 8; UNODC, 2005:54). En 2010 las principales razones de los agricultores para el cultivo de coca en Colombia fueron la rentabilidad del negocio (30%), las escasas oportunidades socioeconómicas (25%) y la facilidad de comercialización del producto (22%) (Ministerio de Justicia et UNODC, s/f: 29).

Debe recalcar que la hoja de coca genera ingresos de casi \$2.465 dólares/kg²¹, la pasta de coca en \$1.923, la base de cocaína en \$2.795/kg y la cocaína en \$4.623. Con este impulso principalmente económico, se estimó que en 2010, las 310.130 mil personas que se dedicaron al cultivo de coca produjeron 350 TM de cocaína y un ingreso de \$443 millones de dólares (0.2% del PIB y 3% del PIB agrícola). De estos totales, se estima que las FARC emplearon a 245.140 trabajadores, produjeron 280 TM y generaron \$354.4 millones (0.16% del PIB y 2.4% del PIB agrícola). Igualmente se evidencia que en el periodo 2006-2010, mientras que los cultivos de coca representaron el 60% de los ingresos agropecuarios para zonas rurales, la agricultura tradicional 27% (Ministerio de Justicia et al, s/f: 2, 22; Gobierno de la República et al, 2011: 55).

Los ingresos que generan la producción de cocaína y sus derivados han desplazado a la agricultura tradicional, pues a pesar de no tener experiencia agrícola alguna, los labriegos coccaleros compran, arriendan o se apropian de pedazos de tierra con el objetivo de formar parte de la cadena de producción, desaprovechado suelo fértil y arriesgando la seguridad alimentaria de la población, del ganado, y el desarrollo del sector agrícola. Este hecho se refleja en la tasa de crecimiento del sector, pues en el periodo 2001-2011 su crecimiento fue de 2.14% únicamente (Ministerio de Justicia et al, s/f: 19-22; Piñeros et Beltrán, 2013:14).

Para el Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (s/f: 9), el entorno socioeconómico de las zonas con

¹⁹ Productos agrícolas tradicionales de subsistencia: maíz, yuca, plátano, fréjol, etc.

²⁰ De acuerdo con Leibovich y Estrada (2009:152), los agricultores perciben menos de la mitad del salario básico, para el 2010, este fue de \$155.63 (Banco de la República, 2016: s/n).

²¹ Valor mayor al kg de café: \$6.05 /kg y cacao: \$2.35/kg (Trading Economics, 2016: s/n).

presencia de cultivos ilícitos se caracteriza por sus altos niveles de violencia, desigualdad social y económica, vulnerabilidad e inequitativa distribución del suelo, lo que se deriva en un lento desarrollo social. Sin embargo las FARC no asumen su responsabilidad en los graves daños que ha sufrido el sector agrícola, aduciendo que la desatención y violencia Estatal contra los campesinos los obligó a resguardarse en la producción ilegal de coca para subsistir, y además justifican sus colonizaciones y violencia con su deseo de realizar una limpieza social y exterminar a los opositores de la revolución rural²² (Villamarín, 2014:685-1358).

No puede negarse que el éxito de la productividad cocalera de las FARC y sus resultados económicos se deben al volumen de mano de obra involucrado tanto en el proceso de cultivo como en el de comercialización. El sistema cooperativo entre las FARC y los campesinos responde el principio neorrealista de interdependencia entre actores, el cual indica que como estrategia de desarrollo y supervivencia, los actores cooperarán entre ellos, formarán alianzas y dependerán los unos de los otros (Waltz, 1979: 154). No obstante, la interdependencia económica entre actores no necesariamente es sinónimo de beneficio para ambas partes pues al existir asimetrías entre ellas, generalmente son los actores poderosos quienes obtienen mayores beneficios mientras que la unidad más débil debe acogerse a sus requerimientos (Allard, 2004:5). Esta realidad se enfatiza al contrastar las ganancias de las FARC y aquellas de los agricultores cocaleros.

Por otro lado, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, la UNODC (s/f: 3) y Quimbayo (2009: s/n) el cultivo de coca acarrea además serios problemas medioambientales pues permanentemente se utilizan químicos que perjudican a humanos, fauna, flora y recursos hídricos. En efecto, únicamente en la siembra son necesarios alrededor de 25 tipos de fertilizantes, 15 herbicidas y 22 pesticidas (catalogados como altamente dañinos), mientras que para el exterminio se realizan fumigaciones con glifosato a pesar de que se comprobó que las aspersiones no son eficientes pero sí perjudiciales, debido a los costos que generan al Estado y a los problemas de salud que causan a la población (dermatológicos y abortos) (Arias, Camacho, Ibáñez, Mejía et Rodríguez, 2014:17). Otro problema es la deforestación: a inicios del 2000 se calculó que

²² Con el objetivo de dinamizar y fomentar competitividad en el agro colombiano, el Presidente Uribe otorgó financiamiento para proyectos de transporte, gestión de riesgos y desastres naturales, investigación, accesibilidad a la tierra, ayuda a pequeños productores y alternativas agrícolas para reducir los cultivos ilícitos (Beltrán et al, 2013:53; Leibovich et al, 2009:163).

se deforestaron 55 mil hectáreas de bosque para el cultivo de coca, mientras que al finalizar la década, a pesar de que el área deforestada se redujo a 22 mil hectáreas, esta cifra indica que 35% de los cultivos de coca se originan a partir de la tala de bosques (Gobierno de Colombia et al, 2011:22).

A pesar de los daños, no puede negarse que la intensificación de las FARC en el negocio del narcotráfico propulsó el crecimiento económico de sus zonas de influencia debido a los insumos y vituallas necesarios que la guerrilla debe adquirir para efectuar sus actividades y para sobrevivir. Del mismo modo, las FARC establecieron el orden social, político y económico en esas poblaciones brindando seguridad a los habitantes (Villamarín, 1996:400).

2.2.3. La Enfermedad Holandesa fruto de la producción coca

El término Enfermedad Holandesa se acuñó en 1960, cuando Holanda, al descubrir sus vastos suministros de gas natural inició la exportación del recurso para suplir la demanda mundial. Este fenómeno ocasionó la apreciación de la moneda a nivel internacional, el incremento de la producción de bienes no transables²³, la ralentización de la industria manufacturera y la baja de la exportación de productos con valor agregado (Giraldo et Conde, 2011: 10; Reina, Alejo et Devia, 2015:3). Históricamente se han detectado en Colombia casos similares en los sectores cafetero, petrolero y mineroenergético debido al incremento de la demanda y el alza internacional de los precios (CESLA, 2012: 6). Sin embargo, a pesar de que estos booms exportadores si contribuyeron con el desarrollo económico del país, la bonanza fue de corto plazo, pues al basar su economía en recursos naturales, Colombia la restringió a adaptarse a la volatilidad de los precios internacionales de estos commodities (Giraldo et al 2011: 14, 17).

Según el Centro de Estudios Latinoamericanos (2015:7), en el país, los síntomas más evidentes de la enfermedad holandesa fueron la apreciación del peso a nivel internacional, la desindustrialización y la utilización de mano de obra en el sector primario. En efecto, en el 2010, la revaluación del peso colombiano fue del 12.8%, contrastando las de Chile y Brasil: 3.8% y 1.4%. Además en la última década la participación de la industria colombiana en el PIB disminuyó de 22% entre 1990-1999 hasta 15% al finalizar el 2010; y se experimentó un crecimiento de las exportaciones tradicionales, pasando de

²³ Bienes que pueden comercializarse únicamente en el país de producción, como servicios.

20% a 60% de participación en el 2002 y 2010 respectivamente (Giraldo et al 2011: 10). Por último, con respecto al empleo, en el periodo 2005-2008, la industria generó 13.1% de total, siendo menor que los sectores comercial (59.4%) y agrícola (19.5%) (Clavijo, Vera et Fandiño, 2012: 40).

Para Giraldo y Conde (2011:4), estos efectos fueron perjudiciales para la economía y desarrollo social colombiano, ya que con la revalorización de la moneda local en mercados extranjeros, el país perdió competitividad internacional pues aunque internamente los costos de producción permanecieron estables, el bien se encareció al momento de importarlo. Del mismo modo el país destinó la inversión y capital humano en la explotación de esos recursos, descuidando el sector manufacturero y otros sectores productivos, lo que consecuentemente generó un lento desarrollo y desequilibrios económicos (Reina et al 2015:4; Perry et Olivera, 2009: 4).

Además de los recursos naturales mencionados, se ha contemplado la posibilidad de que el narcotráfico sea también un causante de la enfermedad holandesa en el país (Steiner y Corchuelo, 1999:15). Con el perfeccionamiento y alcance de la cadena de producción de estupefacientes, las FARC se convirtieron en una empresa multinacional EMN. Como puede inferirse de la teoría neorrealista, la importancia de estos actores es trascendental puesto que con su expansión y consolidación son capaces de generar resultados que influyen en los mercados globales así como en el establecimiento de políticas económicas a nivel mundial (Gilpin, 2001:4). En el caso de las FARC, la intensificación del cultivo de coca intervino para que Colombia sufra de la enfermedad holandesa.

De acuerdo con Giraldo, Conde (2011:4-5), Steiner y Corchuelo (1999:15) los principales estragos económicos que el comercio de drogas ocasionó en Colombia han sido el incremento en el flujo de divisas, y por ende la apreciación de la moneda; la disminución de la producción y exportaciones manufactureras, especialmente en el agro; y el incremento de la inversión en el sector inmobiliario. El último efecto se debe a que con los ingresos de esta actividad, se *“desbordó la capacidad de acumulación de riqueza en las regiones”* (Rocha, 2000:20). Se considera que este es un mal perenne pues ha estado presente en la economía colombiana desde el boom cocalero de los años 70 y se ha intensificado por la alta competitividad de la cocaína colombiana internacionalmente (Rocha, 2000: 15). La primera consecuencia del mal

holandés producto del narcotráfico se da mediante la repatriación del capital ilegal, el cual generalmente reingresa al país a través del lavado de dinero y contrabando. Sin embargo, al utilizarse métodos ilegales, no puede establecerse el monto exacto de las regalías ni su efecto en el PIB colombiano, pero se estima que estas alcanzaron en promedio anual \$4 billones de dólares en la última década, y que más del 70% está localizado internacionalmente.

Es importante mencionar que a pesar de que ni los ingresos totales del narcotráfico en Colombia, ni únicamente los de las FARC (80% del total) tienen una participación importante en el PIB, este dinero si ha fomentado la inversión y crecimiento inmobiliario en el sector agrícola y rural a través de la adquisición de tierras y ejecución de obras civiles para facilitar la comercialización del estupefaciente (Rocha, 2000:19). Sin embargo, en contraposición a las exportaciones tradicionales, las regalías generadas por la venta de cocaína, no se redistribuyen ni se invierten en el desarrollo social sino que incrementan las arcas de los cárteles, generando un retroceso económico local y una mutación social a una economía de narcotráfico (Giraldo, 2011: 4,16). Por otro lado, con respecto a la ralentización a la industria manufacturera causada por el cultivo y comercialización de coca, debe tenerse presente que dicha actividad no afecta directamente a la participación de este sector en el PIB o a la disminución de las exportaciones de bienes manufacturados, sino que principalmente desincentiva el crecimiento del sector agrícola pues el narcotráfico capta mano de obra y la subutiliza en las labores de cultivo, transformación y comercialización, imposibilitando la estabilización de la estructura social y económica de las zonas afectadas (Reina et al 2015:5).

La trascendencia de la enfermedad holandesa producto del narcotráfico se origina en la alta competitividad de la cocaína colombiana. Esto se debe principalmente a que desde la década de los setenta, el país se convirtió en el principal productor y comercializador mundial de este producto, estableciendo desde los precios internos de la materia prima hasta los internacionales del producto final. Por tal motivo, a diferencia de otros commodities, al ser la producción y exportación de coca constantes, estas no se ven afectadas por la volatilidad del mercado internacional. Asimismo, además de la premisa de que la oferta exportable de coca en Colombia es igual a su demanda, la cocaína es un bien extremadamente valorado e inelástico en su segmento de mercado (Rocha, 2000: 14).

2.3. El reflejo de las actividades ilegales de comercio en la economía nacional

En el camino para su consolidación económica las FARC perjudicaron directamente el desarrollo económico, productivo y social de Colombia. En primer lugar, la presencia de las FARC, sus constantes amenazas, ataques, y violencia en contra de la fuerza productiva nacional e internacional desprestigiaron al país a nivel mundial, arrebatándole fuentes de inversión nacional y extranjera y obligando al gobierno a desviar la inversión social e incrementar el gasto en seguridad. Asimismo, su intensa gestión financiera para la legalización de sus bienes y el blanqueo de su capital atrajo no solo la corrupción al sector público y privado sino que repercutió en el sector fiscal del país, debilitando consecuentemente consecuencia la estructura económica colombiana.

2.3.1. La inversión nacional y extranjera

Colombia es un país atractivo comercialmente debido a su ubicación geográfica, la calidad de su capital humano, sus abundantes recursos naturales y la protección que el gobierno brinda a los inversionistas (Kalmanovitz, s/f a: 34; PROCOLOMBIA, 2016: s/n). Asimismo, su estabilidad y crecimiento económico con relación a otros países de la región²⁴, su mercado de más de 46 millones de consumidores, y la flexibilidad de su oferta laboral convierten a la nación en un destino estratégico de inversión extranjera IE (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] et Organización de Naciones Unidas [ONU], 2010:16). De acuerdo con Garavito, Iregui, Ramírez (2012 :35) y Kalmanovitz (s/f a:26-30), la importancia de la IE para Colombia radica no solo en la inyección de flujos de capital, sino en el fortalecimiento de la economía nacional y de los sectores fiscal, real y externo, pues además de reactivar la producción interna, sus beneficios se difunden a los sectores directos y a los subsectores relacionados, resultando en una reactivación económica y productiva a partir de la cual se genera transferencia de tecnología, empleo, rendimiento e innovación (Kalmanovitz, s/f a:25).

En el periodo 2002-2010, la IE hacia Colombia alcanzó los \$57.870.8 mil millones de dólares, con un ingreso de \$2.133.7 mil millones en 2002, \$10.235.4 mil en 2005 y \$6.429 mil en 2010. Los principales países inversores

²⁴ Crecimiento del PIB en 2010 fue de 4%; mayor que Centroamérica, Honduras y Ecuador (CEPAL et ONU, 2010:16; Banco de la República, 2016a, 4)

en este periodo fueron Estados Unidos con un 29% de participación, Inglaterra con 20% y Panamá con 9% (Banco de la República, 2016: s/n). En la última treintena la IE hacia Colombia incrementó de 0.9% (promedio) a 2.3% del PIB en los periodos 1980-1992 y 1993-2003 respectivamente, llegando a 4.2% del PIB en entre 2004-2011. El crecimiento de más de 450% de la participación de la IED en el PIB del último periodo se debe principalmente a las medidas de apertura comercial y ataques contra las FARC adoptados por el Presidente Uribe. En efecto, el pico más alto de inversión en los últimos 30 años fue en el 2007 con un aporte de 7% al PIB. En ese periodo, los sectores en los que más se invirtió fueron el minero e hidrocarburífero y la explotación de recursos naturales (Garavito et al, 2012:25).

A pesar del crecimiento de la IE en Colombia, a causa de las actividades políticas, militares y económicas de las FARC, se ha privado al país de los beneficios monetarios resultantes del desarrollo máximo de las empresas, pues la guerrilla ha frenado el progreso de todos los sectores económicos y productivos de la nación, mediante la expulsión de empresas nacionales e internacionales del mercado (Arias et al, 2014:2; Kalmanovitz, s/f a: 6). En efecto, la organización perjudica directamente al desarrollo económico y social de Colombia a través de amenazas, chantajes, extorsiones y atentados contra el bienestar e infraestructura de empresas nacionales e internacionales²⁵ para ejercer presión económica, para obtener recursos a cambio de protección, no atacar sus bienes físicos y humanos y como actividades publicitarias para recordarle su poder militar al gobierno (Álvarez et Rettberg, 2008: 23; Universidad de los Andes, 2014:46). El conflicto armado ha ocasionado una reducción de alrededor de 0.5% de la tasa de crecimiento anual en la economía colombiana, y ha ralentizado la evolución del PIB departamental a tal punto de duplicarse cada 18.5 años; asimismo únicamente en 2003, se perdieron \$366.2 mil millones de dólares en producción por ausentismo laboral causado por la vulnerabilidad que ocasionó el conflicto (Universidad de los Andes, 2014:206; Álvarez et al 2008: 28).

De acuerdo con Gilpin, (2001:402) la cooperación entre elementos está supeditada al logro de los intereses y necesidades económicas o políticas individuales de los grupos que en alguna medida cuentan con mayor poder

²⁵ Alkosto, Nike, Ecopetrol, Pacific Rubiales Energy, Nestlé, Toyota, Microsoft y Goodyear conflicto (Universidad de los Andes, 2014:206; Álvarez et al 2008: 28).

relativo que otros; razón por la cual estos actores no toman en cuenta ni satisfacen de manera prioritaria los requerimientos del conglomerado o se preocupan por su seguridad. Tal premisa se refleja en el comportamiento de las FARC, puesto que al ser su crecimiento económico y la consolidación de la seguridad prioridades, el daño económico-social que el grupo guerrillero causa a la población y al desarrollo productivo del país, le es irrelevante. Del mismo modo se atribuye la reacción del electorado y de las empresas al postulado neorrealista que asegura que las unidades de un sistema son capaces de modificar, tanto con sus acciones como con su presencia, el comportamiento y resultados de otros actores (Allard, 2004:8,14). Como ejemplo, la sola presencia de las FARC genera desconfianza nacional e internacional para invertir, a tal punto que la permanencia de comerciantes colombianos y extranjeros en el mercado es directamente proporcional al número de ataques armados a la infraestructura gubernamental, privada y la mano de obra (Universidad de los Andes, 2014:46).

Evidentemente, los atentados impiden el desarrollo productivo y económico de otros actores, y frenan la producción e imposibilitan que la industria alcance su máximo potencial presentándola como poco competitiva en mercados internacionales (Álvarez et al, 2008: 22). La baja en la competitividad se refleja en la traba productiva de las empresas, que a causa del permanente estado de violencia, han ajustado su producción a niveles mínimos para que las pérdidas en caso de allanamiento, daño o destrucción sean menores, disminuyendo el tiempo y volumen producido pero encareciendo los costos operativos y logísticos (Ibáñez, 2012: s/n). Del mismo modo, el riesgo de secuestro tanto para trabajadores nacionales e internacionales, especialmente de compañías hidrocarburíferas y mineras forjó la fuga de mano de obra y capital (Kalmanovitz, s/f a: 4).

Se considera que el sector productivo más afectado es el de los hidrocarburos y minería debido a las constantes transgresiones contra su infraestructura las cuales han paralizado su crecimiento y han ocasionado enormes daños medioambientales por los derrames causados al atentar contra oleoductos (solo en 2002 se registraron más de 170 atentados a uno solo) (Álvarez et al, 2008: 23; Dettmer, 2012: s/n). Estos ataques han generado críticas contra las FARC hasta catalogarlas de cobardes, ya que no se trata solamente de destrucción a infraestructura sino que perjudican a la población y

al ecosistema debido a la contaminación hídrica que generan los derrames de petróleo. Asimismo, al contaminar el agua la organización ha vulnerado su acceso en poblaciones indígenas, afro descendientes y rurales coartando sus necesidades básicas y ocasionando daños a la salud (CNMH, 2013, 277).

Por otro lado, con respecto a la inversión nacional, a causa del conflicto armado y la presencia y ataques militares de las FARC el presupuesto del Estado no se ha destinado en su mayoría a actividades productivas ni a gasto público y social, como salud y educación, sino más bien a rubros de defensa y seguridad (Kalmanovitz, s/f a: 6). Únicamente en el Presupuesto General de la Nación 2009-2010, los gastos generales y de personal de defensa representaron 8.34% del total (Ministerio de Hacienda, 2009:17). De acuerdo con Ibáñez (2012: s/n) esta es una de las causas principales de la vulnerabilidad y desigualdad que sufre el país; pues además, las zonas que presentan menor inversión y potencial de crecimiento son las alejadas geográficamente y con poca presencia Estatal. Asimismo, debe tomarse en cuenta que a causa del gasto en ayuda social y estabilización de víctimas que el gobierno debe afrontar, el capital nacional destinado a actividades productivas es mínimo (Álvarez et al, 2008: 28). En efecto, sin la presencia del conflicto armado, en el periodo 2002-2010, la tasa de crecimiento anual por departamento hubiera aumentado en 4.4% (Universidad de los Andes, 2014:206).

La violencia que acarrearón las FARC no solo atentó contra la seguridad de la nación sino que además dio paso a la creación de otros grupos irregulares y paramilitares, generando un desvío de capital humano y financiero para seguridad que tanto en el sector público y privado pudo destinarse para inversión (s/n; Kalmanovitz, s/f a: 6). En el sector privado, las empresas consideradas como grandes y medianas emplearon entre 3.5% y 10% de sus ingresos totales en seguridad y, a nivel nacional en 2006, el sector privado pago \$9.8 billones de dólares en impuestos a seguridad y defensa, como ejemplo, solamente para la protección de infraestructura mino energética se requieren alrededor de 80 mil soldados (Álvarez et al, 2008: 28-30; Dettmer, 2012:s/n).

Del mismo modo, considerando que la presencia fariana es mayoritaria en las áreas rurales, el mercado interno se redujo pues la oferta de bienes y servicios no abarcó al territorio nacional en su totalidad (Kalmanovitz, s/f a: 6).

Sin embargo, a pesar del desarrollo económico y disminución de la violencia en Colombia, no puede negarse la latente desigualdad y vulnerabilidad de las zonas descuidadas por el gobierno, pues en estos lugares de incipiente inversión nacional y extranjera, es donde se resalta la gestión de las FARC como organismo que genera trabajo, empleo, capital e inversión (Massé et al, 2012:10).

2.3.2. El fisco

El sector fiscal es imperativo para el desarrollo social y económico de Colombia, ya que con una política fiscal con la que el establecimiento y la recaudación de impuestos sea eficiente, un país puede generar el crecimiento de su aparato productivo, desarrollo económico y la disminución de problemas sociales en la población (Isaza, 2008:4), en efecto como ha mencionado Waltz (1979:141), las herramientas económicas son la piedra angular para solventar problemas sociales y políticos dentro de un sistema. Para la Unidad de Emprendimiento y la Universidad Nacional de Colombia (2010:5-6), con la contribución de este capital, el electorado permite el funcionamiento y fortalecimiento de la administración del Gobierno Central y sus 210 dependencias que constituyen 31 sectores. En Colombia, los impuestos representan más del 50% del presupuesto del Estado y conjuntamente con el endeudamiento Estatal y los servicios parafiscales, se destina aproximadamente 21% para educación, 18% para defensa, 17% en obras públicas, 16% en salud, 11% en proyectos de inclusión social, 7% en transporte, 5% en el sector agropecuario, 2% en el sector minoenergético y 21% en otros rubros (Justicia Tributaria Colombia, 2015:s/n).

En la última década la redistribución geográfica de este capital se concentró en 23% de la población nacional y se distribuyó de la siguiente manera: 32.3% a la región Central, 29.8% a la región Caribe, 9.2% a la Noroccidental, 1.7% respectivamente a la región Sur y Amazonía, y 1.2% para la del Pacífico, siendo la última, la región en donde se localiza el departamento de Chocó, que en 2010 obtuvo 66.25% y 33.35% de pobreza y pobreza extrema respectivamente (Clavijo et Vera, 2013: 38-59; DANE, 2012:15-16). Por tal motivo, a pesar de que la distribución se realizó basandose principalmente en factores de pobreza, puede evidenciarse que en las zonas más vulnerables del país no se satisficieron las necesidades de la población,

convirtiéndose estas en blancos para la posesión efectiva de las FARC y su aceptación popular.

La inequitativa redistribución de los recursos fiscales del Estado se justifica con el postulado neorrealista (Gilpin, 2001:18) que indica que las leyes y beneficios dentro de un Estado se establecen y direccionan basándose en los intereses y necesidades de las élites de la nación y los grupos que ejercen algún tipo de poder (económico, político, militar), más no en aquellos que carecen de este. Para el 2010, el monto de los ingresos recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, representó el 12.7% del PIB. 40.17% de estos ingresos provinieron del impuesto a la Renta, 30.94% del IVA y 28.88% de otros tributos. Históricamente, el impuesto a la renta y el IVA son los que más han aportado, ya que mientras que en 2010 los impuestos a transacciones financieras y al patrimonio contribuyeron con 0.8% y 0.7% al PIB, la participación del impuesto a la renta fue de 5.1% y la del IVA de 6% (Clavijo et al, 2013: 7-141; DIAN, 2011:136-144).

Como se expuso anteriormente, el conflicto armado con las FARC ha perjudicado a la economía Colombiana y específicamente al sector fiscal, generando una ralentización del desarrollo social del país e incremento de la deuda Estatal. En efecto, con los permanentes actos de violencia contra el sector público y privado la organización no solo ocasionó la disminución de la inversión nacional y extranjera, sino que frenó la producción nacional y por ende las utilidades e ingresos fiscales disminuyeron (Durán, 2011:1). Además, debido a que las actividades comerciales de las FARC se efectúan en el mercado negro y por contrabando, la nación pierde anualmente más de 6 billones de pesos por el tráfico de ganado, armas, minerales, automotores, combustible y otra mercadería; y alrededor de 2 billones en impuestos por bienes no declarados.

El contrabando de mercancía es esencial para el desarrollo de las actividades ilegales de la guerrilla y para su subsistencia, por lo que en sus zonas de influencia, la economía informal se ha dinamizado, así como la corrupción de personas y entidades públicas y gubernamentales. En efecto, en la última década la informalidad empresarial en Colombia alcanzó el 60%, y para 2010, únicamente 6.5% y 4.1% de la población económicamente activa PEA y población en edad de trabajar PET declararon impuestos, justificándose así los altos niveles de comercio informal en el país (DIAN, 2010:9; 2011:19-

20). Las pérdidas tributarias se deben a que el aparato fiscal aviva la evasión con la cantidad de impuestos y el valor a tributar, la inequidad de la política fiscal, la ineficiencia del servicio y las cuantiosas comisiones que se cobran por el contrabando de mercancía (DIAN, 2011:19-20). La transformación paulatina de los mercados colombianos de legales a informales representa un resultado económico no deseado dentro del sistema. De acuerdo con el neorrealismo, este tipo de resultados son el producto de la modificación y el rompimiento de las estructuras establecidas dentro de un régimen a partir de la interacción de actores no Estatales (Allard, 2004:14). Por tal motivo las FARC representan al actor no Estatal, que gracias a estrategias económico sociales con la población lograron a menor escala romper la estructura económica establecida por el gobierno.

Otra manera con la que la guerrilla perjudica al aparato fiscal es la evasión directa de impuestos ya que al ser las FARC una organización ilegal, su capital, bienes y transacciones financieras no son legítimos ni están sujetos a declaración. De acuerdo con Villamarín (2014:1100) únicamente el capital de las FARC para el 2010, producto de actividades ilegales de comercio alcanzó los \$1.925 millones de dólares, sin embargo se calcula que a nivel nacional la organización posee 203 mil hectáreas valoradas en \$66.153 millones de dólares; bienes muebles e inmuebles que suman más de \$96 millones; más de 49 mil animales entre vacas, caballos, cerdos y cabras, con un valor de \$29.306 millones (Laverde, 2014: s/n); 3 avionetas y otros medios de transporte; y \$21 millones de dólares en cuentas de Panamá (Villamarín, 2014:440).

De estar constituidas como una organización legal y con derechos y obligaciones económicas y tributarias, las FARC estarían sujetas al pago de los principales impuestos nacionales de Colombia: el impuesto a la renta, el gravamen a los movimientos financieros, el IVA, el impuesto a la riqueza, el impuesto de registro y el impuesto predial; así como a otro tipo de impuestos como la adquisición de vehículos, exportación de minerales, servicios de transporte nacional de carga e importación y exportación de mercancía (PROCOLOMBIA, 2015: 92-93). Como puede verse en la TABLA 2, únicamente con la recaudación de tres tipos de impuestos las FARC estarían en la obligación de tributar casi 30 millones de dólares por concepto del año 2010:

TABLA 2
IMPUESTOS FARC 2010

IMPUESTOS NACIONALES	TARIFA	BASE IMPONIBLE MILLONES DE USD	PROVENIENCIA	VALOR A TRIBUTAR
Gravamen a Movimientos Financieros	0,4%	\$ 21.000.000,00	Capital en Panamá	\$ 84.000,00
Impuesto a la Riqueza	1,15%	\$ 1.925.000.000,00	Actividades comerciales	\$ 28.875.000,00
Impuesto Predial	1,40%	\$ 63.153.000,00	Valor predios	\$ 926.142,00
TOTAL				\$ 29.885.142,00

Fuente: PROCOLOMBIA, 2015
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

Evidentemente con el patrimonio de la organización el porcentaje de participación de los impuestos en el PIB nacional se incrementaría y se generaría más gasto social y disminución de la deuda pública. No obstante, a pesar de que las FARC no aportan a la inversión social a través de la DIAN, lo hacen directamente al empoderarse como órgano paralelo al Estado en las zonas olvidadas por el gobierno (Sarmiento, 2010: s/n).

2.3.3. Lavado de dinero y divisas

La principal fortaleza financiera de las FARC radica en que mediante el lavado de dinero han sido capaces de legalizar la naturaleza de su capital y bienes para usufructuar de los réditos económicos obtenidos de las actividades ilegales que realizan y de esta manera acrecentar su fortuna mediante la adquisición de bienes e inversión (Banco Mundial, 2007:4). Las etapas del lavado de dinero son la colocación del capital en el sistema monetario, la estratificación y mezcla de este dinero con capital legal, y su integración al mercado de manera legal (Roa, 2010:3).

En la primera etapa, el dinero se ubica generalmente en entidades financieras nacionales e internacionales, no obstante, es común que la guerrilla también adquiera bienes muebles, inmuebles, divisas y minerales, así como la inversión del capital en pólizas, en el sector hotelero e inmobiliario y financiación de campañas políticas. A continuación, en la fase de estratificación, se hace uso de las empresas fachada y de los servicios de un sinnúmero de personas encargadas de realizar transacciones mediante giros y transferencias bancarias y cheques, para que finalmente los bienes y capital ilícito se integren legalmente al mercado, disfrazados de ganancias de inversiones o pagos de importaciones y exportaciones ficticias (Roa, 2010:3). Esta actividad se vincula con el financiamiento del terrorismo ya que al legalizar

sus ingresos las FARC garantizan el fortalecimiento de su capital humano y su estructura armada (Banco Mundial, 2007:7).

Los métodos de lavado de dinero de las FARC evolucionan constantemente, y se ha identificado que la guerrilla efectúa esta actividad de por lo menos 140 maneras diferentes (Yagoub, 2015: s/n). Una de las más comunes, es el pitufeo, acto en el que se divide y coloca el capital en pequeños montos y en diversas cuentas bancarias de personal cercano a la organización. Al ser flujos pequeños, estos pueden permanecer indetectables en aquellas cuentas o reinvertirse nacional o internacionalmente en acciones y compañías (Villamarín, 2014:1486). Otra manera es a través de los minerales. Estos se reciben a cambio de droga y se comercializan o se adquieren en el mercado internacional con el dinero de actividades ilegales y se importan, en ambos casos el metal se revende como producción nacional (Massé et al, 2012:7). Pero las FARC no solo lavan dinero a través de la minería ilegal y el narcotráfico, sino que con el objetivo de legalizar su capital, comercializan y contrabandean todo tipo de producto de fácil intercambio en el mercado, como juguetes, línea blanca, bebidas alcohólicas, producción agrícola, ganado, víveres y combustible. En el caso del último, en la frontera con Ecuador, la guerrilla colabora con los traficantes amedrentando a la policía con francotiradores y atentado contra su seguridad (Portafolio, 2013: s/n).

Asimismo, Villamarín (1996:1327) ratifica que las FARC se insertan en la economía formal mediante la creación de empresas fachada, que van desde compañías de transporte terrestre y fluvial, hasta de textiles y haciendas de producción agropecuaria, con las que no solo protegen su patrimonio y comercializan narcóticos y bienes ilegales, sino que estas les sirven para transportar víveres y equipamiento para los guerrilleros. Otra forma es la adquisición de tierra, cosechas y bienes muebles e inmuebles en su nombre o nombre de terceros designados por la organización, quienes se encargan de no dejar rastro de los movimientos. Específicamente en el caso de compra de tierras agrícolas, los campesinos aceptan cuantiosas sumas de dinero por el terreno y la producción, sin embargo aquellos que no están dispuestos a vender o a vincularse a la red de lavado, son amenazados por la organización.

Las FARC han creado una red de trabajo financiero a nivel global y nacional con el ELN, las BACRIM y otras organizaciones criminales, facilitando el lavado de dinero, su transporte y legalización; en efecto, gracias a la eficacia

de estas alianzas y a la cautela con la que se realizan los movimientos financieros, las operaciones han sido exitosas, imposibilitando encontrar el origen y destino del capital (Artunduaga, 2013: s/n). Aunque no se ha tenido evidencia contundente de la localización de bienes o dinero de la guerrilla, se ha determinado que han invertido y colocado 30% de su capital en cuentas nacionales involucrando a altos mandos del sector bancario colombiano y 70% en bancos internacionales (Villamarín, 2014:1555). Entre estos figuran paraísos fiscales centro, sur americanos, y europeos, como Costa Rica, Honduras, Panamá, Surinam y Suiza. Se reconoce también que tienen cuentas en España, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Venezuela, México, Bolivia, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca (El Canal de las Américas: 2015; Mackenzie, 2007: 391)

A pesar de los estrictos controles militares, policiales y judiciales en el sector financiero colombiano, el gobierno no ha podido dismantelar las redes de lavado de dinero de las FARC, pues no cuenta con los recursos humanos y económicos para hacerle frente a esta actividad y porque cada vez existen medios transaccionales más eficientes (Portafolio, 2013: s/n); consecuentemente, para el 2005, Colombia figuró como el primer país en Latinoamérica que blanquea dinero a través de medios no bancarios (le siguen Haití y Argentina); y como el segundo (después de Argentina) que blanquea el capital por medios bancarios (BID, 2004: 273:274).

Del mismo modo, la participación del lavado de dinero en Colombia en el periodo 2005-2007 fue de 0.30% del PIB. Los departamentos que indican una alta incidencia se localizan en las regiones Insular, Caribe, Pacífica y Andina; siendo San Andrés y Providencia, Chocó y Valle del Cauca los de mayor participación, con un promedio de 4.09%, 1.23% y 1.21% respectivamente en ese periodo. Por otro lado la incidencia de los departamentos localizados en la región Amazónica y Orinoquía es media y baja (Roa, 2010: 344-343). No obstante, aunque el lavado de activos no esté presente directamente en todos los departamentos, las repercusiones son generales ya que se afecta la economía formal interna al mezclar el capital legal con el ilegal (UN Radio, 2014).

Las consecuencias del lavado de activos en Colombia trascienden al entorno social, político y económico del país, ya que esta actividad prolifera la delincuencia, la corrupción, el abandono de actividades productivas legales por

ser menos rentables, y el debilitamiento del sector público, privado y fiscal, pues además de ocultar la proveniencia de los bienes, se evaden impuestos. Esto ha generado que las empresas colombianas busquen protección mediante excesivos controles para el acceso al crédito (Banco Mundial, 2007:14; UN Radio, 2014). Asimismo, las FARC desestabilizan el mercado interno, pues a través de los bienes y las empresas pantalla que utilizan para blanquear el dinero, establecen precios más bajos que los del mercado sin tomar en cuenta los costos de producción, convirtiéndose en proveedores más competitivos, que además desincentivan la producción e inversión nacional y extranjera, ya que la reputación del país se deteriora. Otro problema de las empresas pantalla es que al ser más competitivas debido a los cuantiosos flujos monetarios que manejan, pueden llegar a controlar sectores de la economía nacional y desviar inversión Estatal (Banco Mundial, 2007:15-18).

A lo largo de este capítulo se ha dado cumplimiento al segundo objetivo específico planteado en este trabajo: identificar las actividades ilegales de comercio que condujeron a la consolidación y fortalecimiento económico de las FARC y repercutieron en la economía colombiana. En efecto, se ha logrado comprobar que la minería ilegal, el tráfico de armas y estupefacientes, así como los mecanismos de contrabando y legalización de bienes contribuyeron activamente con el afianzamiento económico de las FARC y su consolidación como un actor económico multinacional y que además influyeron negativamente en la economía de la nación al haber coartado su desarrollo productivo y proliferado la informalidad económica en el país. De acuerdo con Waltz (1979:186) y Gilpin (Allard, 2004:19), la consolidación de las capacidades económicas de un actor resulta trascendental, pues a través de las herramientas económicas éste logrará garantizar su supervivencia y seguridad; elementos indispensables a través de los cuales las unidades podrán dedicarse a la consecución de otros fines y el gozo de los beneficios ligados a su supervivencia. Asimismo, los autores indican que la importancia de las empresas multinacionales EMN y los actores no Estatales radica en su capacidad de modificar los resultados de la economía doméstica e internacional debido a su alcance, eficiencia, productividad y adaptabilidad. Ambos postulados neorrealistas se tornan verdaderos para las FARC, ya que únicamente al consolidarse económicamente, la organización garantizó la supervivencia de sus militantes y contó con la capacidad monetaria para financiar sus estrategias políticas y militares. Igualmente las FARC se

expandieron como una EMN, ganaron poder y hegemonía en los mercados que crearon, beneficiándose del desarrollo del comercio internacional y de la interdependencia económica entre actores.

CAPITULO III

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DESMANTELAMIENTO COMO HERRAMIENTA CONTRA EL PODER POLÍTICO, ECONÓMICO Y MILITAR DE LAS FARC

3.1. Las políticas de seguridad y desmantelamiento implementadas por el Gobierno de Álvaro Uribe

A su posesión en 2002, Álvaro Uribe dejó en claro que el principal objetivo del régimen sería la erradicación definitiva de los grupos ilegales en Colombia, específicamente las FARC, como medio para ponerle un fin definitivo al conflicto interno, y consecuentemente garantizar paz y seguridad permanente a los colombianos. Para lograr su cometido, y valiéndose del esfuerzo político, económico y militar de actores Estatales e internacionales se establecieron entre el 2002 y 2010 la Política de Seguridad Democrática, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, el Plan Patriota y el Plan de Consolidación como herramientas contrainsurgentes. Las estrategias desplegadas en las siguientes páginas permiten identificar los lineamientos y tácticas político-militares del Presidente para contrarrestar a los causantes del conflicto armado colombiano y los efectos que éste acarreó a la nación.

3.1.1. Política de Defensa y Seguridad Democrática (PSD) y Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD)

El neorrealismo indica que los sistemas políticos están regidos por una estructura, a partir de la cual nacen y se forjan las directrices políticas, económicas, militares y sociales, con las que se espera lograr los objetivos planteados por los regímenes, sean estos nacionales o internacionales, y que además restringirán y definirán el comportamiento de las unidades interactuantes (Waltz, 1979: 104). Asimismo, Waltz (1979:141) sugiere que en los sistemas domésticos, la importancia de la estructura radica en que a través de ella, los Estados buscarán la estabilidad, regularán las acciones de sus unidades y establecerán reglas en el caso de que su conducta no compagine con lo estipulado por los organismos de poder. En el caso del régimen establecido por Álvaro Uribe, se identifica como principio ordenador del sistema a la Seguridad Democrática²⁶ instaurada por el Presidente, por cuanto se

²⁶ El gobierno de Uribe estableció la Seguridad Democrática como requisito ciudadano y herramienta para generar una paz duradera en Colombia que garantice de manera democrática e igualitaria las libertades y derechos de la ciudadanía basándose en mecanismos de transparencia, respeto a la Constitución y protección a los derechos humanos (Uribe, s/f: 1; Ministerio de Defensa, 2007:6).

estableció como el elemento regulador a través del cual se normalizarían las relaciones y conducta de los actores del conflicto armado colombiano.

Bajo la premisa de la Seguridad Democrática, en 2002, al iniciar su primer mandato, Álvaro Uribe instituyó la Política de Defensa y Seguridad Democrática PSD como medio para erradicar a estas organizaciones. El Presidente (2003:5,6, 23) definió a la PSD como distinta a las políticas de seguridad implantadas por los regímenes autoritarios de América Latina, puesto que estos satanizaron a los disidentes políticos catalogándolos de enemigos. Por el contrario, Álvaro Uribe enaltece a la PSD por ser inclusiva y avalar la participación democrática y las negociaciones pacíficas entre el gobierno y los grupos armados ilegales siempre y cuando estos cesen las hostilidades contra la población civil y el Estado. Desde su planteamiento, el gobierno estableció a la PSD como una estrategia a largo plazo, por lo que gracias a los resultados obtenidos en el primer mandato y con su reelección en 2006, Álvaro Uribe garantizó la continuación de su doctrina hasta el 2010 con el establecimiento de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática PCSD. Considerando que para el gobierno la relación entre seguridad y consolidación territorial es directa, se estableció como objetivo central de ambas políticas *“reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática”* (Presidencia de la República et al, 2003:12). Sin embargo, para la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa (2003: 10, 37,42; 2007: 11), la PSD y la PCSD se basan no solo en la seguridad nacional y ciudadana sino también en la profesionalización y desvinculación del régimen y la Fuerza Pública de los grupos ilegales, y el afianzamiento territorial y estabilización del poder Estatal en las zonas desatendidas por el gobierno.

Previa a la implantación de la PSD se identificaron seis amenazas latentes que vulneran la seguridad nacional y entorpecen el fortalecimiento del Estado de Derecho. En primer lugar está el terrorismo, calificado como el acto más peligroso contra Colombia puesto que es la principal herramienta utilizada por las organizaciones ilegales para desequilibrar al país y atacar contra su capital humano y físico. Le siguen el narcotráfico, las actividades ilegales de comercio, el tráfico de armamento y municiones, los actos coercitivos, y el homicidio. Las cinco últimas amenazas constituyen un peligro por cuanto representan las principales fuentes que avivan el terrorismo y engrandecen a

los grupos armados (Presidencia de la República et al, 2003: 24-31). Con respecto a la Política de Seguridad Democrática, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa establecieron como objetivos estratégicos para contrarrestar estas amenazas, *“la consolidación del control Estatal del territorio”* (2003: 32) colombiano, la *“protección a la población”* (2003:32), la *“eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia”* (2003: 32), el resguardo de zonas fronterizas con el *“mantenimiento de una capacidad disuasiva”* (2003: 33) y finalmente, el establecimiento de un cambio institucional que garantice *“eficiencia, transparencia y rendición de cuentas”* (2003: 33) en los procesos administrativos del país.

Para la consecución de los objetivos estratégicos de la PSD se instauraron las siguientes estrategias. En primer lugar, la coordinación, organización y eficiencia entre de la gestión Estatal y las dependencias encargadas de brindar seguridad a la nación. Para lograrlo, a nivel nacional se crearon el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, encargado de la ejecución de la PSD y compuesto por el ejecutivo, el gabinete ministerial y la Fuerza Pública; y la Junta de Inteligencia Conjunta para regularizar, difundir y utilizar la información estratégica recibida para mejorar la gestión interinstitucional. Local y regionalmente se crearon también Consejos de Seguridad y Defensa y Juntas de Inteligencia Conjunta, cuyas responsabilidades estuvieron acorde a las de sus respectivas dependencias nacionales. Asimismo se crearon estructuras de apoyo, que junto con el Ministerio de Defensa se encargarían de mejorar el trabajo conjunto de las entidades mencionadas promoviendo la consecución de la PSD (Presidencia de la República et al, 2003: 34, 35).

Otra de las estrategias que estableció la política de Uribe fue fortalecer a las instituciones gubernamentales, específicamente el sector fiscal²⁷, judicial, la fiscalía, las agencias de inteligencia y la Fuerza Pública, para utilizarlas como herramientas legales en la lucha contra los grupos criminales. La tercera estrategia que se planteó la PSD fue la recuperación y control territorial de las zonas urbanas, rurales y fronterizas colonizadas por grupos criminales a través de la erradicación de estas organizaciones y sus actividades ilegales de comercio (Presidencia de la República et al, 2003: 37, 42,47). Se planteó también la protección del capital humano y físico de la nación; la cooperación para la seguridad comunal, especialmente de personas en situación de riesgo

²⁷ Principal fuente de financiamiento de la PSD (Presidencia de la República et al, 2003: 61).

por su participación política, contexto social y grado de vulnerabilidad; y finalmente la difusión de la gestión y políticas gubernamentales. Este último punto se efectivizó mediante la búsqueda de cooperación internacional y la colaboración nacional solidaria, *“voluntaria y patriótica de los ciudadanos”* (Presidencia de la República et al, 2003: 60), a través de su participación en las redes de cooperantes y el programa de recompensas; con esto, el Estado obtendría información que contribuya a la desarticulación de grupos armados y prevención de agresiones (Presidencia de la República et al, 2003: 49, 60, 61).

Cuatro años después, a pesar del cambio en el contexto del conflicto armado, la ejecución de la PCSD se enfocó del mismo modo en la lucha contra las amenazas establecidas por la PSD, pero además identificó a las FARC como uno de los mayores enemigos del poder Estatal y de la democracia; asimismo moldeó sus objetivos estratégicos enfocándolos específicamente a la afirmación irreversible del poder Estatal que se consiguió en el periodo anterior (Ministerio de Defensa, 2007:23). En efecto, el fracaso de esta política estuvo condicionado a la recuperación territorial de los grupos ilegales y a la expulsión de la Fuerza Pública de las zonas ya consolidadas.

El primer objetivo estratégico se refiere a la consolidación del territorio y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país. Para su consecución se plantearon la Estrategia de Consolidación del Control Territorial y la Doctrina de Acción Integral DAI. La primera se apoya en el esfuerzo conjunto de las fuerzas militares, encargadas del control territorial; de las fuerzas policiales (con apoyo militar), facultadas para salvaguardar el orden localmente; y de las instituciones económicas, políticas y sociales, dispuestas como sostén y estabilizador del entorno en recuperación (Ministerio de Defensa, 2007:34-35). Por otro lado la DAI representa una *“herramienta para la coordinación del uso legítimo de la fuerza y la acción social del Estado”* (Ministerio de Defensa, 2007:37) entre la sociedad civil, la Fuerza Pública y las dependencias Estatales. El Segundo objetivo se refiere a la protección de la población contra las amenazas de seguridad a través de la desarticulación de grupos armados ilegales y la intensificación de operaciones armadas.

El siguiente objetivo plantea la eliminación del narcotráfico a través del incremento de sus costos operacionales y riesgo de su ejecución para desestabilizar la cadena de esta actividad ilegal. Este objetivo consta de cuatro etapas: la erradicación de cultivos ilícitos; el impedimento de transportación de

drogas y armamento por vías terrestres, marítimas y aéreas; la neutralización de las organizaciones criminales que realicen actividades ilegales de comercio; y, la consolidación territorial de por parte del Estado (Ministerio de Defensa, 2007: 37,39-41). El cuarto objetivo plantea la legitimación de la Fuerza pública ante el electorado a través de su profesionalización (Ministerio de Defensa, 2007:41), y finalmente el último objetivo estratégico de la PCSD busca que los niveles e índices de criminalidad decrezcan en las urbes colombianas para garantizar la seguridad de la población a nivel nacional (Ministerio de Defensa, 2007:45).

La PCSD consta de 28 estrategias integrales que se llevaron a cabo pensando en la eliminación de las amenazas para la seguridad ciudadana, para mejorar los nexos entre el gobierno y los habitantes y para legitimar y reformar la gestión pública (Ministerio de Defensa, 2007:29, 31, 49):

TABLA 3
ESTRATEGIAS DE LA PCSD

ACCIONES PARA ENFRENTAR LAS AMENAZAS A LA CIUDADANÍA	ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA	REFORMAS ESTRUCTURALES AL INTERIOR DE LA FUERZA PÚBLICA	ACCIONES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	ACCIONES PARA FORTALECER LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
Plan de consolidación del control territorial	Inversión en seguridad	Programa de educación y formación de las FFMM	Plan para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa	Programa de acercamiento con la ciudadanía
Plan de lucha contra el narcotráfico		Programa de bienestar de la Fuerza Pública		
Plan de seguridad en zonas de desmovilización		Plan de coordinación y definición de roles de la FP.		
Plan de Fronteras	Ley de seguridad y defensa	Creación de un centro de estudios estratégicos	Programa de mejoramiento gerencial del sector	Acción integral
Nuevo plan de guerra		Programa de ciencia y tecnología		
Plan para fortalecer la seguridad ciudadana		Creación de la oficina de veteranos	Programa de estandarización de bienes en las compras del sector	Plan de acción hacia la comunidad internacional
Fortalecimiento de la movilidad, la inteligencia y el pie de fuerza	Reforma y fortalecimiento de la inteligencia	Creación de la oficina de veteranos		
Plan contra el Secuestro y la Extorsión		Reforma de la Justicia Penal Militar		
Plan para la Desmovilización		Plan de Acción en DDHH.		
Plan para mantener capacidades estratégicas mínimas		Firmeza en el uso de las facultades		

Fuente: Ministerio de Defensa, 2007
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

Finalmente, con respecto al costo de la implementación de la PSD y PCSD en el periodo 2002-2010, este se incrementó de \$3.62 mil millones a \$10.62 mil millones respectivamente. En este periodo, el gasto para la realización de la PSD y PCSD representó en promedio 3.64% del PIB. No

obstante, dentro del Presupuesto General de la Nación las políticas de Seguridad Democrática y de Consolidación de Seguridad Democrática están consideradas como una inversión por cuanto se dispusieron para garantizarle bienestar a la población (Ministerio de Defensa, 2010a : 80).

3.1.2. Operativos de desmantelamiento

Con la implantación del Plan Colombia en 1999, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se propusieron la finalización del conflicto armado y la reactivación económica del país mediante una lucha anti narcótica y la erradicación de los grupos insurgentes colombianos. A partir de esta estrategia, se plantea a inicios del 2000 la iniciativa contrainsurgente denominada Plan Patriota, dispuesta según los lineamientos de la Seguridad Democrática, como una herramienta militar que focalizaría sus esfuerzos en la derrota militar y económica definitiva de las FARC (Ministerio de Defensa, 2007:16). La utilización de recursos bélicos por los regímenes domésticos se justifica cuando dentro de éstos existen grupos insurgentes (anárquicos) que buscan la desestabilización de la estructura y son contrarios a los principios ordenadores del país (Waltz, 1979: 104).

El Plan Patriota se ejecutó en el primer mandato de Álvaro Uribe a partir del 2003 con la Operación Libertad I, instaurándose como la continuación del Plan Colombia y como su principal arma militar (CODHES, 2004: 1,8, 9). Los objetivos en los que se basó esta ofensiva militar fueron la desestabilización de la estructura interna de las FARC, la recuperación del territorio colonizado por la guerrilla y el mando de la población civil (Colby, 2012: s/n). Asimismo, la propuesta del Plan Patriota se basó en la movilización estratégica de aproximadamente 15 mil efectivos de la Fuerza Pública hacia los territorios conquistados por las FARC, específicamente los departamentos de Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviaré. La determinación de este territorio se justificó por la fuerte influencia militar y social de las FARC en esas zonas y por el hecho de que la mayoría de sus actividades ilegales de comercio se efectuaban en los departamentos mencionados (CNMH, 2014: 215).

De acuerdo con Waltz (1979: 146) la fortaleza de un actor frente a otro se mide a través de sus capacidades, elementos esenciales que garantizan desarrollo, poder de decisión, autonomía y mayor poder relativo frente a otras unidades. Por lo tanto, a través de esta estrategia militar, le garantizaría al

Estado la apropiación del territorio fariano y el aislamiento y confinamiento de frentes y personal valiosos para evitar el contacto de la guerrilla con las urbes del país, disminuyendo las capacidades económicas y territoriales de la guerrilla y consecuentemente su poder relativo en ambos aspectos, lo que significaría un golpe a la seguridad y autonomía del grupo guerrillero (CODHES, 2004: 11,12). Para la implementación del Plan Patriota las dependencias Estatales responsables estudiaron sus capacidades y limitaciones así como las de las FARC, la trayectoria armada de la guerrilla y además especializaron a sus unidades de lucha en diferentes tácticas militares a partir de la creación de batallones específicos para cada territorio y tipos de ataque con el fin de establecer estrategias que estuviesen acorde al escenario del conflicto (Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:21; Ávila, 2008:9).

Con respecto a la evolución del Plan, este se desarrolló en 3 fases. La primera, de aislamiento y despliegue, se enfocó en contener a las FARC territorial y militarmente mientras la Fuerza Pública se fortalecía; la segunda, pretendía el debilitamiento de la organización a través de acciones ofensivas contra la guerrilla para desarmarla y acercarla a negociaciones de paz con el Estado; y, finalmente, en la tercera fase se llevarían a cabo las negociaciones entre el gobierno y la organización. Estas fases se basaron en una estrategia ofensiva contra el enemigo para cortar sus fuentes de ingresos, reconquistar territorio y neutralizar su capacidad bélica; en una estrategia defensiva en la que la Fuerza Pública salvaguardaría al capital humano y físico del país; y en una estrategia de apoyo y cooperación interinstitucional entre la Fuerza Pública, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la Fiscalía General y otras dependencias nacionales (Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:20, 21 ; CODHES, 2004: 1).

Los principales blancos de ataque de la Fuerza Pública contra las FARC fueron los cultivos ilícitos de la guerrilla y sus cabecillas, el desmantelamiento de los frentes localizados en la zona de Cundinamarca por cuanto este departamento representa una zona estratégica para la guerrilla para conquistar Bogotá, y de los corredores estratégicos de las FARC para impedir su movilidad (Ávila, 2008:9; Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:28). También enfocaron sus esfuerzos militares en el rescate de civiles secuestrados por la organización (Ministerio de Defensa, 2007:23). La ejecución de las operaciones militares del Plan Patriota se llevaron a cabo en

puntos geográficos de difícil acceso no cubiertos con anterioridad, garantizándole al ejército resultados integrales en la recuperación territorial (CNMH, 2014: 215). Asimismo, la Fuerza Pública basó su gestión militar en operativos de inteligencia mediante los cuales el ejército se localizó en territorio fariano para identificar y propinar ataques de confrontación. La confusión que generaron las embestidas, así como el debilitamiento de la defensa de la organización facilitó al ejército la captura de guerrilleros, computadores y documentos valiosos para las FARC (Colby, 2012: s/n).

Cinco años después de haberse implementado el Plan Patriota y gracias a los resultados obtenidos, este fue considerado como la operación militar de mayor envergadura contra las FARC desde Marquetalia (CODHES, 2004: 8,9), por tal motivo, el gobierno consideró pertinente potencializar estos logros con la ejecución del Plan de Consolidación (2007-2010), el cual reflejaría la acción conjunta entre el Estado, la Fuerza Pública y el electorado y afianzaría el poder gubernamental y militar en Colombia (Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:24). Las operaciones ejecutadas denotaron la profesionalización y tecnificación del ejército por cuanto se llevaron a cabo tras arduas labores de inteligencia, renovadas tácticas de combate, con indumentaria de localización satelital y comunicación de vanguardia y mediante asaltos y bombardeos terrestres y aéreos, los cuales ayudaron a la Fuerza Pública a acudir de manera rápida a los focos del conflicto (Ávila, 2008:9; CNMH, 2014: 217). Asimismo se atribuyen los resultados favorables gracias al incremento del pie de fuerza, el cual se engrandeció de 313.406 mil a 441.828 mil efectivos entre el 2002 y 2010 (Ministerio de Defensa, 2010b: 73); a este incremento debe sumársele también la colaboración de los casi 22 mil efectivos civiles que participaron en conjunto con la Fuerza Pública (Ávila, 2008:9).

Las principales operaciones que se ejecutaron durante el Plan Patriota y el Plan de Consolidación fueron:

TABLA 4
PRINCIPALES OPERATIVOS MILITARES 2002-2010

OPERACIÓN	FECHA	LOCALIZACIÓN	LOGROS		
			FRENTES AFECTADOS	CABECILLAS†	BAJAS
Libertad I	Junio - Diciembre 2003	Cundinamarca	Frente 22, 53, 55, 56	Willima A. Marín Danilo Malaver Manuel Sierra	600 ∅
Aromo	Octubre 2007	Bolívar (Aromeras Sur)	Bloque Caribe	Gustavo D. Rueda (Martín Caballero)	21 †
Sol Naciente	Septiembre 2007	Vichada (Cumarimbo)	Frente 16	Tomás Medina (Negro Acacio)	14 †
Fénix	Marzo 2008	Sucumbios (EC)		Raúl Reyes	16 †
Jaque	Julio 2008	Guaviare			11 miembros Fuerza Pública 3 ciudadanos norteamericanos
Fuerte	Febrero 2009	Cundinamarca (Páramo Suampaz)	Cuadrilla Antonio Nariño	José. Guzmán Negro Antonio Mariana Paz	13 †
Camaleón	Junio 2009	Guaviare	Cuadrilla Séptima		5 miembros Fuerza Pública
∅ captura, deceso y desmovilización					
† deceso					
∅ captura					

Fuente: Ejército Nacional de Colombia, 2015
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

Waltz (1979:93) respalda las acciones militares de un Estado con el fin de garantizarle la protección al electorado debido a que salvaguardar la seguridad de sus habitantes es la responsabilidad principal de la cabeza de un régimen. En efecto, debido a la amenaza a la seguridad de los colombianos que encarnaba las FARC, Uribe determinó que el Plan Patriota representaría la mejor solución para erradicar al grupo guerrillero de manera definitiva. Además cabe resaltar que los recursos bélicos utilizados por el mandatario se justifican a cabalidad pues están respaldados por el “uso legítimo de la fuerza”, principio neorrealista que de acuerdo con Waltz (1979: 153) legitima al gobierno para tomar represalias a través de acciones pacíficas o violentas, para garantizar la seguridad al electorado, consolidar su poder a nivel nacional y evitar el “uso privado de la fuerza”.

Este derecho se le otorga al ejecutivo tras haber sido reconocido y autenticado de alguna manera (elecciones democráticas) por el pueblo. El uso legítimo de la fuerza que ejerció Uribe se ejecutó en un contexto de anarquía, en el que el elemento disidente del sistema (FARC) desconoció e irrespetó las leyes establecidas por el régimen y atentó contra la seguridad de las unidades. Sin embargo, a pesar de la intensificación de acciones militares, el Presidente no descartó una salida pacífica al conflicto, exhortando a las FARC a una desmovilización pacífica y canje humanitario (Veintimilla, 2011:10).

3.1.3. Ayuda internacional

El gobierno de Uribe se vio obligado a respaldar la ejecución de la PDS, PCSD y las estrategias militares con la intervención de actores internacionales, principalmente debido a que el escalamiento del conflicto armado causado por el alcance económico y militar de las FARC no se frenó con la gestión del Estado, sino que trascendió las fronteras colombianas y repercutió en el sistema internacional. Waltz (1979:95) establece que a medida que el comportamiento de las unidades de los sistemas internos influencia o altera el sistema internacional, es de interés de los grupos de poder y élites internacionales interferir no solo en los asuntos internos de cada Estado sino en la generación de políticas externas que puedan restablecer el orden nacional e internacional de acuerdo a sus intereses; en este caso, la consecución de la paz a través de la erradicación de las FARC.

La posición de Colombia para recibir el apoyo extranjero se basó además en la victimización de la situación nacional causada por un conflicto que de acuerdo con el régimen, excedía las capacidades Estatales y requería la injerencia de un poder (económico, político, militar) mayor para alcanzar la paz duradera y frenar la violencia e ingobernabilidad que se instauró a causa de los mecanismos implementados por la guerrilla (Bagley et Rosen, 2015: 242). Entre el 2002-2011, el país recibió un aproximado de \$8,7 billones de dólares. Los principales colaboradores además de Estados Unidos y la Comunidad Europea, fueron España (7%), Francia (5%), Alemania (4%) y Holanda (3%) (European Comission, 2012: 106; Stirk, 2013: 18). El monto total de la ayuda económica se destinó para la lucha contra el tráfico de drogas (59%), para el fortalecimiento del Estado de derecho (8%) para proyectos agrícolas (8%), de ayuda humanitaria (6%), de consolidación de paz (5%), de educación (4%), de protección del medio ambiente (3%) y otros planes multisectoriales (7%) (European Comission, 2012: 106; Stirk, 2013: 18).

En materia económica y militar a lo largo del mandato de Uribe, Estados Unidos fue el contribuyente más activo²⁸ con un presupuesto de \$6,435.9 millones de dólares (Beittel, 2012: 38). Respondiendo a su política de defensa y al empeño de resguardar la democracia y la seguridad de la región del narcotráfico²⁹, el terrorismo y el socialismo, el gobierno de George W. Bush (2001-2009) planteó que 80% de la ayuda económica para Colombia se destinaría para el desarrollo de estrategias militares, antinarcóticas y para el fortalecimiento de la Fuerza Pública, y solamente 20% para la ejecución de programas sociales y la consolidación del Estado de Derecho. Sin embargo, a partir del 2008, y debido a las insistentes críticas de la militarización de la ayuda estadounidense, esta receta se modificó de manera gradual y para el 2009, la asignación fue de 55%-45% respectivamente (Castaneda, 2013: 30; Čapinská, 2013: 74).

Como puede verse a continuación, estos fondos se designaron al país a través de diferentes dependencias militares y económicas, y se distribuyeron principalmente a las localidades con presencia de brigadas militares

²⁸ Considerado que Estados Unidos es reconocido como una supremacía económica frente al mundo, es su deber, de acuerdo con Waltz (1979:306) colaborar a los demás actores del sistema internacional e intervenir para solucionar sus asuntos miliares y sociales.

²⁹ A pesar de los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos, Colombia continúa siendo el principal proveedor de cocaína de este país (Amnesty International, s/f: 1).

consideradas como elegibles³⁰ por el gobierno norteamericano (Beittel, 2012: 38; Dube et Naidu, 2010: 7)

TABLA 5
AYUDA ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS A COLOMBIA 2002-2010
MILLONES \$

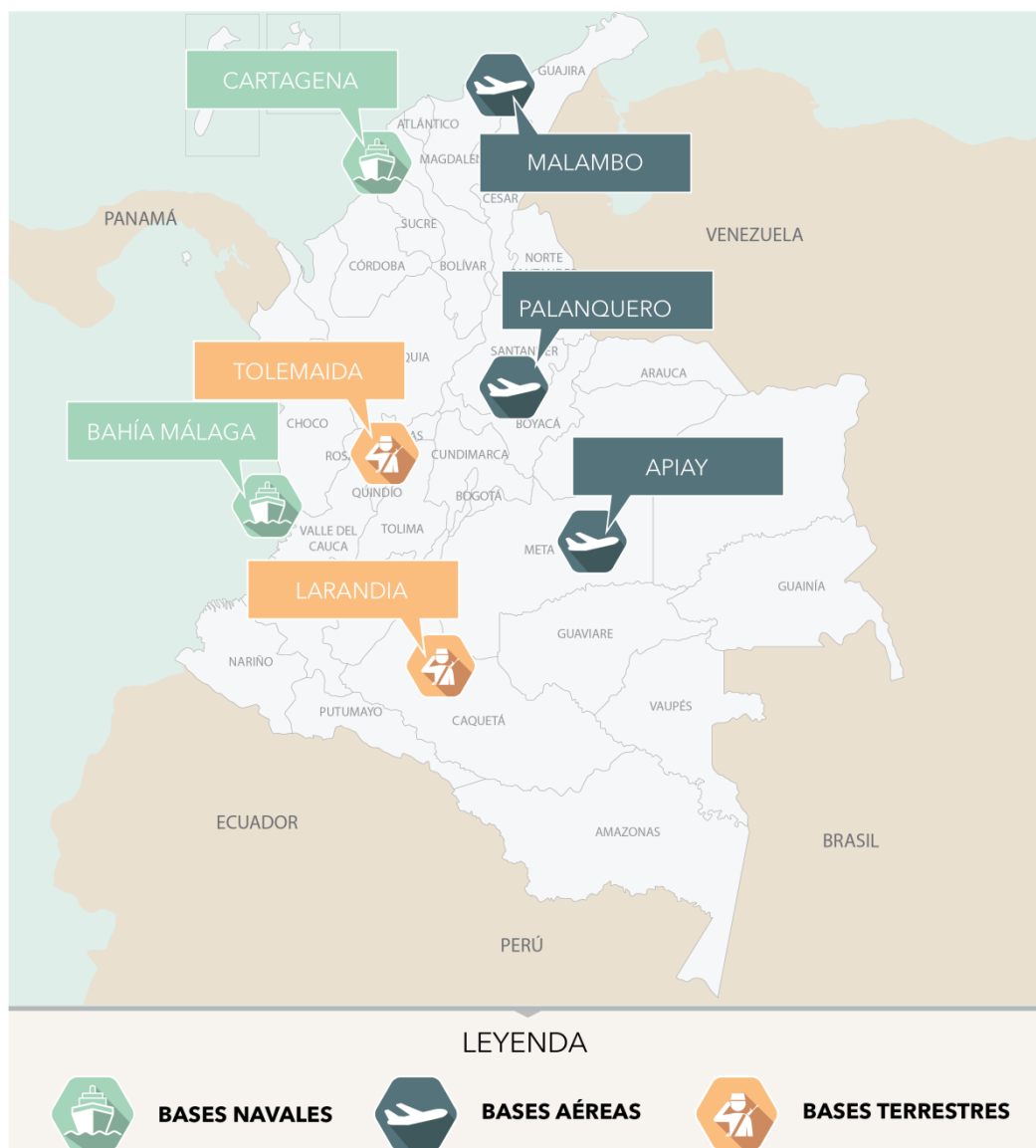
AÑO	ACI/ACP	ESF	FMF	IMET	INCLE	NADR	DOD	Air Wing	Total/ Año
2002	\$ 379,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,00	\$ 38,20	\$ 117,30	\$ 560,40
2003	\$ 508,20	\$ -	\$ 17,10	\$ 1,20	\$ -	\$ 3,30	\$ 41,50	\$ 164,80	\$ 736,10
2004	\$ 473,90	\$ -	\$ 98,50	\$ 1,70	\$ -	\$ 0,20	\$ 45,00	\$ 178,20	\$ 797,50
2005	\$ 462,80	\$ -	\$ 99,20	\$ 1,70	\$ -	\$ 5,10	\$ 45,00	\$ 155,30	\$ 769,10
2006	\$ 464,80	\$ -	\$ 89,10	\$ 1,70	\$ -	\$ -	\$ 45,00	\$ 140,50	\$ 741,10
2007	\$ 465,00	\$ -	\$ 85,50	\$ 1,60	\$ -	\$ 4,10	\$ 37,00	\$ 129,40	\$ 722,60
2008	\$ 244,60	\$ 194,40	\$ 55,10	\$ 1,40	\$ 41,90	\$ 3,70	\$ 39,00	\$ 119,90	\$ 700,00
2009	\$ 230,20	\$ 196,50	\$ 53,00	\$ 1,40	\$ 45,00	\$ 3,20	\$ 12,40	\$ 127,90	\$ 669,60
2010		\$ 201,80	\$ 55,00	\$ 1,70	\$ 243,90	\$ 4,80	\$ 12,90	\$ 129,40	\$ 649,50
Total / Fuente	\$3.229,40	\$ 592,70	\$ 552,50	\$ 12,40	\$ 330,80	\$ 49,40	\$ 316,00	\$ 1.262,70	\$ 6.345,90
ACI/ACP=Andean Counterdrug Initiative (2004) /Andean Counterdrug Program (2008) ESF=Economic Support Fund FMF=Foreign Military Financing IMET=International Military Education and Training INCLE=International Narcotics Control and Law Enforcement NADR=Nonproliferation, Antiterrorism, Demining and Related Programs DOD= Department of Defense Air Wing= Office of Aviation									

Fuente: Beittel, 2012
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

Además del fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía y la intensiva dotación de equipamiento bélico, el gobierno norteamericano buscó potenciar la lucha antiterrorista mediante su afianzamiento en el territorio colombiano. Este punto se efectivizó con el Acuerdo de Cooperación de Defensa entre Estados Unidos y Colombia, con el cual a partir del 2009 se autorizaba al ejército estadounidense a establecer siete bases militares en el país por un periodo de diez años para participar en operaciones antinarcóticas y antiterroristas conjuntas con el gobierno de Uribe. Sin embargo, este acuerdo se suspendió el 17 de agosto del 2010 (mandato de Juan Manuel Santos) por considerarse inconstitucional al no haber sido aprobado por el Congreso (Beittel, 2012: 39).

³⁰ De acuerdo con la Enmienda Leahy de 1997 se consideran como no elegibles y se prohíbe la asistencia a unidades y personal militar que hubiesen cometido violaciones de derechos humanos y tratado con grupos terroristas. No obstante a pesar de la evidencia contundente de la existencia de tales transgresiones, la ayuda norteamericana no cesó (Čapinská, 2013: 84).

GRÁFICO 8
BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA



Fuente: Semana, 2009
 Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

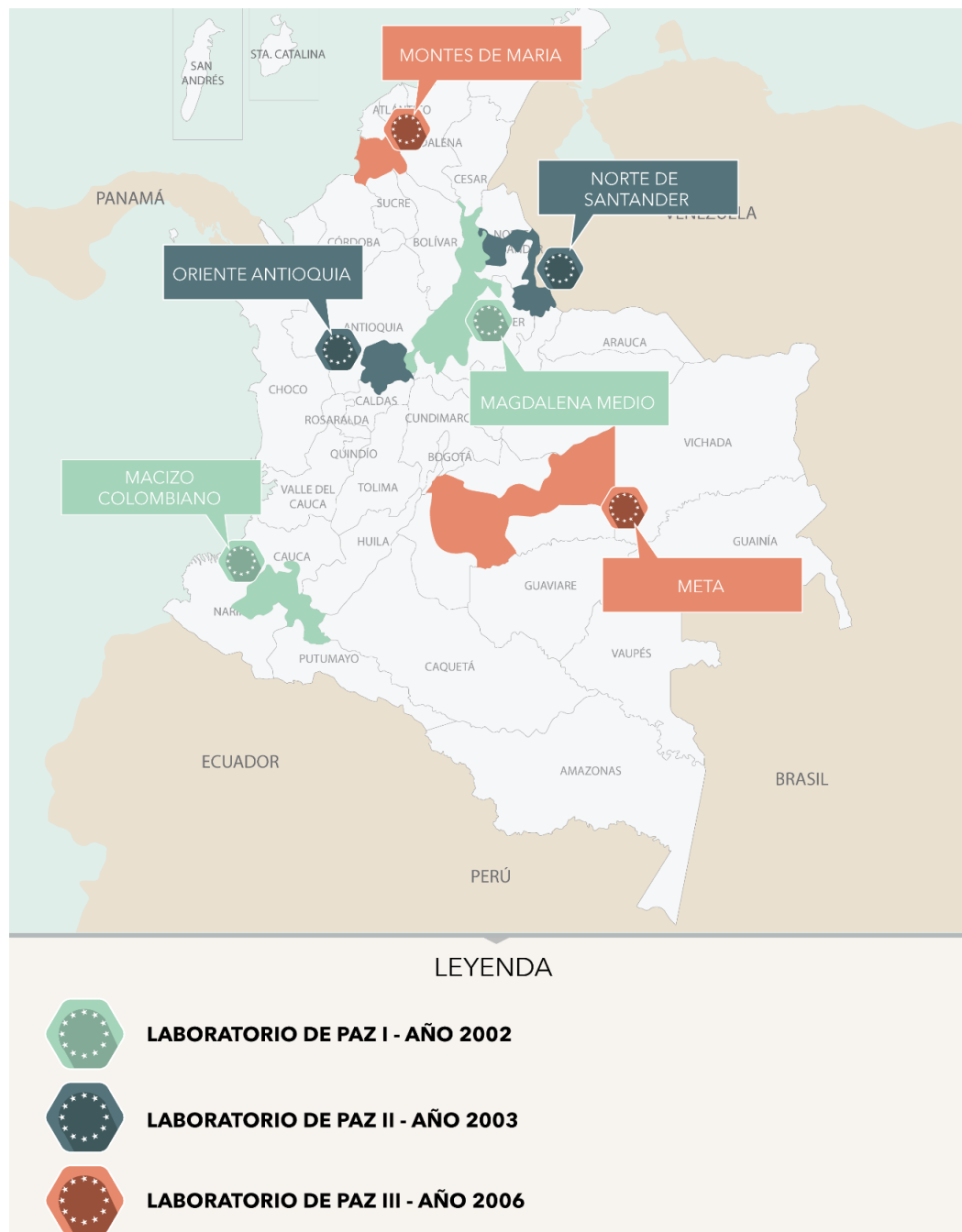
Por otro lado, la Unión Europea está catalogada como el segundo actor internacional de mayor influencia en Colombia con respecto a la resolución del conflicto interno, puesto que desde hace más de 40 años ha colaborado con la nación para la consolidación de la paz (Ramírez et Gratiús, 2011:16). No obstante, su ayuda y estrategias no se plantearon acorde a las directrices de la Seguridad Democrática pues los europeos basaron sus acciones en el uso de estrategias políticas, diplomáticas y de Peacebuilding o Construcción de Paz para inducir a los disidentes a negociaciones con el gobierno y consolidar de manera sostenible la paz política y social en el país (Barreto, 2010: 21).

Entre el 2002 y 2011, la ayuda económica de la Unión Europea para prevención y resolución del conflicto fue de €215.2 millones de euros (66% del total³¹), los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 62% para el establecimiento de paz y ayuda social y económica para los territorios y población más afectados; 20% para la atención, reubicación y asistencia de la población desplazada por el conflicto; 5% para la desactivación de minas, la concientización de su peligro y la protección y reinserción de las personas afectadas por estos dispositivos; 5% para el amparo de mujeres y niños; y 8% para el afianzamiento del Estado de derecho y sus instituciones, para la participación e integración de la sociedad civil en los procesos políticos, para la protección a de población vulnerable (pueblo indígena, afro colombiano) y para la educación y fomento de la cultura de paz (European Comission, 2012: 104,116).

El proyecto de mayor envergadura de la Unión, auspiciado por la Comisión Europea con un presupuesto de €109 millones de euros, fue la creación de los Laboratorios de Paz (Ramírez et al, 2011:17). El fin de estos establecimientos, considerados como la antítesis de las estrategias militares colombo-estadounidenses, fue la consecución duradera de la paz a través de soluciones políticas y estrategias sociales de cooperación con la población civil en las zonas más afectadas por el conflicto (Castaneda, 2013: 3). Entre el 2002 y 2006 se crearon tres laboratorios a lo largo del territorio nacional: en 2002 el Laboratorio Magdalena Medio; en 2003 el Laboratorio Norte de Santander, Macizo Colombiano–Alto Patía y Oriente-Antioquia; y en 2006 el Laboratorio Meta – Montes de María. Como puede verse en el mapa, estos organismos se diseminaron en los departamentos de Bolívar, Santander, Antioquia, César, Norte de Santander Nariño, Putumayo, Cauca y Meta (Castaneda, 2013: 65):

³¹ El presupuesto total fue de € 326 millones de euros, monto que también se destinó al manejo de los recursos naturales (7%), al desarrollo comercial y económico del país (6%), al desarrollo local sustentable (2%) y a otros proyectos de cooperación (1%) (European Comission, 2012: 103).

GRÁFICO 9
LABORATORIOS DE PAZ DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA



Fuente: Castaneda, 2013
 Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

Con respecto al apoyo político de Estados Unidos y la Unión Europea con Colombia, este nació a partir de que ambos actores reconocieron a las FARC en 2001 y 2003 respectivamente como un grupo narco-terrorista; con esta aseveración secundaron y deslegitimaron el estatus político de la guerrilla ante al mundo tal como lo hizo el gobierno de Uribe (Čapinská, 2013: 70). A

nivel regional, debido a las diferentes posturas ideológicas, en materia de seguridad y posición sobre las FARC, el gobierno colombiano no gozó de colaboración política conjunta de sus vecinos para formar una alianza regional contrainsurgente, proteger sus zonas fronterizas e impedir la proliferación de las FARC internacionalmente (CODHES, 2004: 15). Ante esta respuesta, Uribe satanizó a estos regímenes, acusándolos de populistas e incriminando a los jefes de Estado, específicamente de Venezuela y Ecuador, como auspiciantes y cómplices del florecimiento del terrorismo en Latinoamérica (Trejos, 2015: 62).

La ayuda otorgada por los principales actores internacionales, y consecuentemente por las naciones ideológicamente afines a cada uno, varió de acuerdo a sus intereses y a su perspectiva del conflicto y de la guerrilla. Para Waltz (1979:92) esta perspectiva varía según la manera con la que los atributos característicos de cada actor son evaluados por terceros. Por ejemplo, de acuerdo con Estados Unidos, las FARC, están calificadas como una organización terrorista y consecuentemente la destructora de la democracia en Colombia; mientras que para la Unión Europea la guerrilla representa un grupo político-social que lucha dentro de un Estado en formación. A continuación pueden identificarse las principales diferencias del enfoque y participación de ambos actores: (Castaneda, 2013: 35).

TABLA 6
ENFOQUES DE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA DEL CONFLICTO

	Estados Unidos	Unión Europea
Objetivo	Fortalecimiento del Estado de Derecho	Transformación y adaptación del Estado
Enfoque	Paz negativa	Paz positiva
Estrategias	Poder duro	Poder blando
Implementación	Top-down	Bottom-up
Actores involucrados	Gobierno Central y dependencias Estatales	Sociedad civil y organizaciones Estatales y no Estatales

Fuente: Castaneda, 2013
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

La cooperación económica, política, militar y social entre actores de diferentes naciones se respalda, según Gilpin (2001:16), en que a pesar de que el sistema internacional sea anárquico y egoísta, los Estados están dispuestos a cooperar entre ellos para alcanzar un objetivo común. Generalmente, dicha cooperación se forja a través de alianzas estratégicas entre actores. Con respecto a las alianzas entre Estados, éstas son un requerimiento para la

consecución de la seguridad, y se logran principalmente debido a las presiones a las que está sujeto un actor. Bajo esta premisa se explica por qué Colombia le dio la espalda a las naciones de la región a favor de Estados Unidos. En efecto, si un actor (Colombia) quiere llegar a forjar una alianza estratégica con otro (Estados Unidos) su conducta debe satisfacer a su aliado potencial (Waltz, 1979:243-244); en este caso el actor que le garantice al régimen de Uribe el capital humano, económico y militar necesario para erradicar a las FARC.

3.2. Resultados, ventajas y desventajas de la PSD, PCSD y los operativos militares

A partir de la implementación de las Políticas de Seguridad y operaciones militares de Uribe, el contexto del conflicto armado colombiano, así como la realidad e imaginario de sus actores evolucionó debido a la consecución progresiva, en menor o mayor grado, de los objetivos instaurados por el régimen a lo largo de los dos mandatos del Presidente. En efecto, los resultados de la Seguridad Democrática repercutieron tanto al gobierno como a la población en materia política, económica y social, por tanto, a lo largo del subcapítulo se exponen además, a manera de ventajas y desventajas los efectos colaterales que beneficiaron y perjudicaron a nivel internacional y nacional al Estado y a la sociedad civil colombiana.

3.2.1. Resultado de las políticas y operativos de desmantelamiento

Para el 2010, la firme posición del Presidente de erradicar a las FARC y enaltecer el poder gubernamental e imagen de la Fuerza Pública, respaldada por la implementación de la PSD, PCSD y el Plan Patriota y el Plan Consolidación, arrojaron resultados visibles que no solo reflejaron la consecución de los objetivos planteados por Uribe en su campaña política sino que frenaron el escalamiento del conflicto interno y pusieron fin a la idea de inmortalidad de las FARC (Osorio, 2012:37; Villamarín, 2014:535). De acuerdo con Juan Manuel Santos (Ministerio de Defensa, 2007:9) *“al término de la primera administración (de Uribe), los resultados fueron contundentes. La percepción de seguridad en los colombianos había mejorado ostensiblemente y, con ella, la confianza inversionista y el progreso social”*; con su reelección, estos logros se potencializaron y le otorgaron a la población la esperanza de una paz definitiva (Osorio, 2012:37).

En cifras generales, gracias al fortalecimiento de la Fuerza Pública conjuntamente con el respaldo político del gobierno, el homicidio común se redujo en 74.30%, el colectivo en 88.82%, el secuestro en 95.73%, el secuestro

extorsivo en 94.61%, la extorción disminuyó en 66.73% y la cantidad de desplazados por el conflicto se redujo en 98.35% (Ministerio de Defensa, 2010b: 10, 12-15, 18, 56). De igual manera, los actos terroristas disminuyeron en 84.80%, el terrorismo contra oleoductos en 88.3%, contra torres energéticas en 97.1%, contra vías en 90.32% y se erradicó el terrorismo contra puentes. Con respecto a las acciones militares anuales de grupos armados entre el 2002 y 2010, estas decayeron de 357 a 58 al finalizar el periodo (Ministerio de Defensa, 2010b: 30-32).

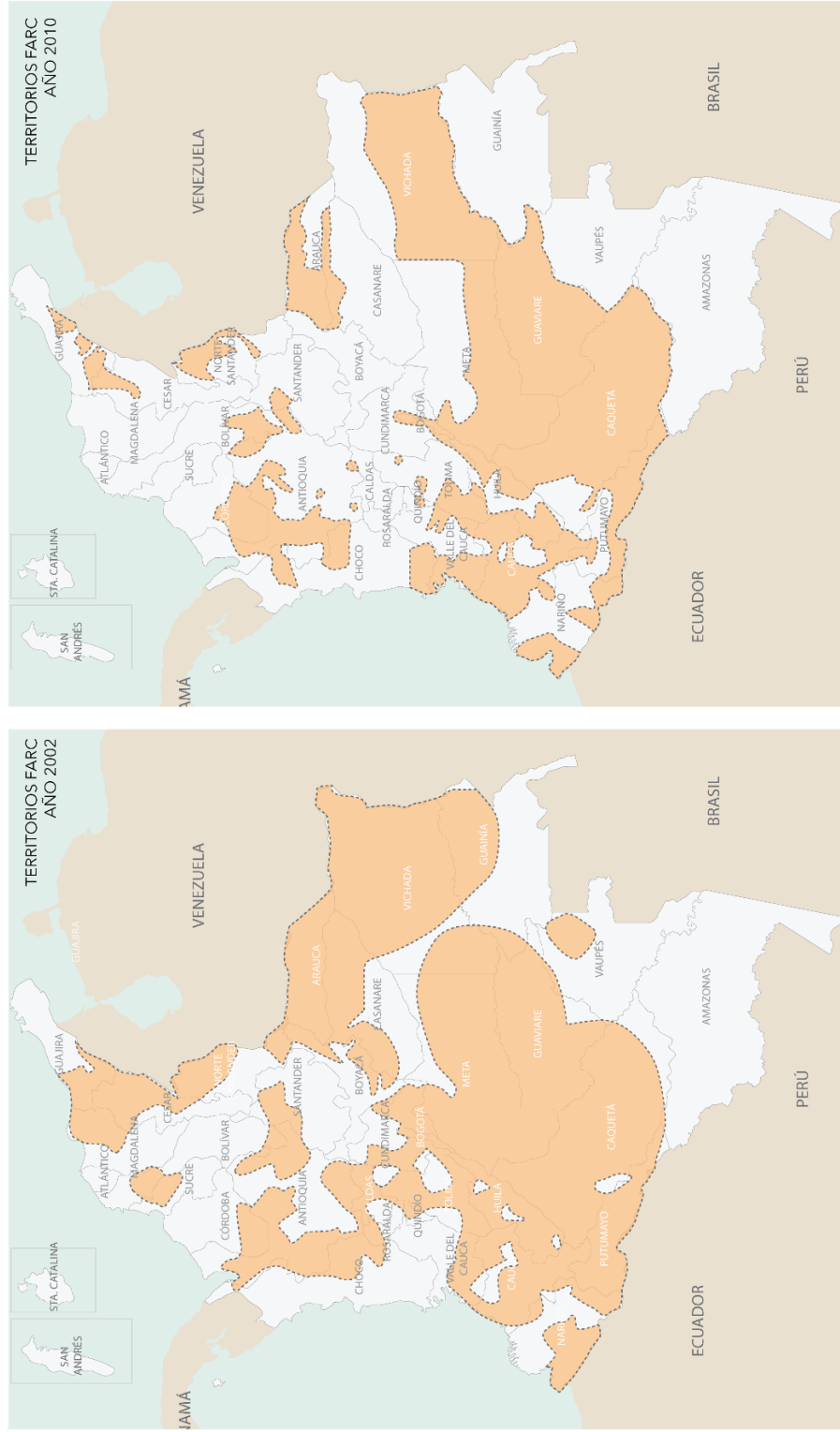
Por otro lado, en lo concerniente a la erradicación de la cadena de producción de cocaína, en los periodos de Uribe, el gobierno se encargó de la fumigación de más de 1 millón de hectáreas de coca y la erradicación manual de alrededor de 329 mil hectáreas. Asimismo, se decomisaron 1.268 toneladas de cocaína, se destruyeron más de 20 mil laboratorios de transformación de estupefacientes, y se incautaron 483 aviones, 2.911 embarcaciones y 6.231 vehículos para el transporte de droga (Ministerio de Defensa, 2010b: 36, 37, 43, 46). Cabe mencionar también que la Policía Nacional jugó un rol primordial para asegurar y reforzar el bienestar del electorado y reducir los índices de criminalidad. En efecto, con las directrices de la Seguridad Democrática, en 2004 todos los municipios de Colombia (1.099) fueron resguardados con estaciones de policía en sus cabeceras, esto representó un incremento de 14.9% de la presencia policial con respecto al 2002 y para el 2008, esta se incrementó a 16.81% (Ministerio de Defensa, 2007:15; Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:39).

Con respecto a las FARC, puede identificarse que si bien las medidas políticas y legales fueron la base y respaldo de las acciones militares, la fuerza bélica de la armada y la policía, así como sus estrategias de inteligencia, fortalecimiento y profesionalización, fueron la piedra angular del debilitamiento de la guerrilla, puesto que únicamente con un golpe militar de tal magnitud pudo subyugarse la trayectoria y fuerza económica, política y militar del grupo guerrillero. La profesionalización de la milicia se evidenció en la frecuencia de los ataques contra las FARC y en el alcance y exitoso desarrollo de operaciones en zonas alejadas geográficamente, gracias a las cuales, pudo consolidarse una presencia Estatal estable y el retroceso de la guerrilla (Ministerio de Defensa, 2007:16, 17). La ejecución del Plan Patriota y las políticas de seguridad, resultaron en el golpe militar más duro para la guerrilla:

el resquebrajamiento del núcleo fariano con las muertes de Raúl Reyes, Manuel Marulanda e Iván Ríos en 2008 (Ávila, 2008:4). Con este hecho, el electorado volcó su esperanza a la Fuerza Pública, lo que se reflejó en su opinión sobre la posibilidad de erradicación de la guerrilla, incrementándose de 18% de la población en 2007 a más del 50% en el 2008 y 2009 (Ávila, 2010:7).

Asimismo la Fuerza Pública efectuó la captura de más de 27 mil guerrilleros en el periodo 2002-2010 y únicamente en el 2009, 88% y 83% de los ataques y bajas del ejército fueron en contra de esta organización. Igualmente entre 2002 y 2010, se desmovilizó a 16.035 guerrilleros, el pico más alto de las desmovilizaciones fue en el 2008 con 3.027. Los Bloques más afectados en el tiempo mencionado fueron el Oriental y el Sur, con 30% y 21% respectivamente. Los años en los que se incrementaron las desmovilizaciones fueron el 2007 con 20% y el 2008 con 24%. Las desmovilizaciones, el fortalecimiento de la milicia y el debilitamiento y el desprestigio de la guerrilla corroboraron para que en 2010 se mermara el personal de las FARC en 40% (Ávila, 2010: 14, 44; FIP, 2009:1, 2). En efecto, en los mandatos de Uribe la organización perdió 11.788 partisanos, contando con un total de 8.978 para el 2010 (RCN, s/f: s/n). Como puede identificarse en el Grafico 10, en el ámbito geográfico, el gobierno logró *“el control de la inmensa mayoría del territorio nacional”* (Ministerio de Defensa, 2007:11) puesto que para el fin del segundo gobierno de Uribe la Fuerza Pública no solo recuperó 45% de las zonas conquistadas por la guerrilla (Ávila, 2010:14) sino que se apropió de la mayoría de los focos urbanos relevantes para la organización y se estableció en áreas remotas (Ávila, 2010:8, 14).

GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN TERRITORIAL DE LAS FARC 2002-2010



Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014
 Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

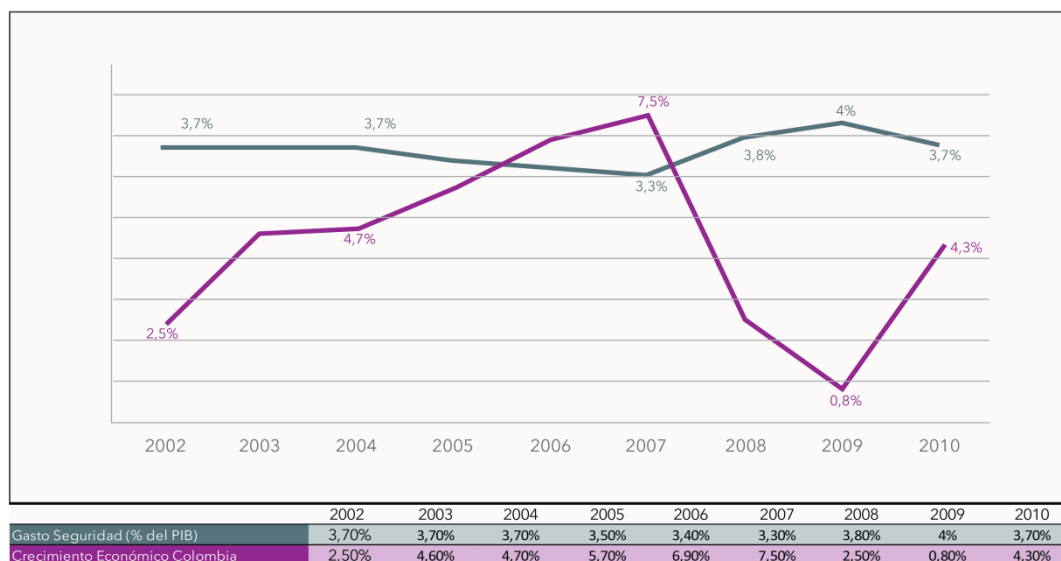
Con la pérdida de territorio y capacidad humana de las FARC, la intensidad bélica entre ambos actores se redujo en 14% (Ávila, 2010:14); legitimándose el retroceso y debilitamiento definitivo del poder económico, militar y territorial de la guerrilla (Ministerio de Defensa, 2010:11; Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:21). A pesar de que en 2002, a causa de la finalización de las negociaciones del Caguán³² y la toma del poder de Álvaro Uribe, las acciones militares de las FARC aumentaron a 2.063 (más del 100% con relación quinquenio pasado), el gobierno redujo esta cantidad a un promedio anual de 1.242 entre el 2003 y 2010 (Ávila, 2011:28). Igualmente, los secuestros anuales de las FARC se redujeron de cerca de 1.000 a inicios del 2002, a menos de 200 en el 2007. Sin embargo, aunque esta tendencia se asemeja a las cifras de secuestro otras organizaciones insurgentes y organizaciones paramilitares, históricamente las FARC son el grupo armado que más perpetúa esta actividad. En ese periodo la guerrilla cometió 50% de los secuestros totales (CNMH, 2014: 196,198).

A lo largo de su historia, el ejecutivo y la organización guerrillera se establecieron como actores antagónicos, por lo que la relación entre las FARC y el gobierno se basó en un juego de suma cero, en el que de acuerdo con Waltz (1979: 106), las ganancias de un actor significan la pérdida del otro; en este caso el debilitamiento de la guerrilla representó para Uribe una ganancia territorial y consolidación del poder democrático en el territorio nacional; por tal motivo, si bien las estrategias militares y políticas del Estado no lograron la eliminación definitiva de las FARC, la organización perdió poder relativo vulnerándose su seguridad y existencia. Por otro lado, Colby (2012: s/n) y Ávila (2010, 8) aseguran que ni siquiera con el Plan Colombia se garantizó la protección de más del 50% y 60% del territorio y la población respectivamente. Se considera también que los resultados de las Políticas de Seguridad Democrática y el Plan Patriota fueron exitosos gracias a la sincronización entre los objetivos políticos y militares del gobierno y a la fusión, concordancia y cooperación de la gestión interinstitucional del Estado (Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:23,28).

La siguientes Tabla ilustra el debilitamiento de la guerrilla gracias intensificación en las acciones gubernamentales:

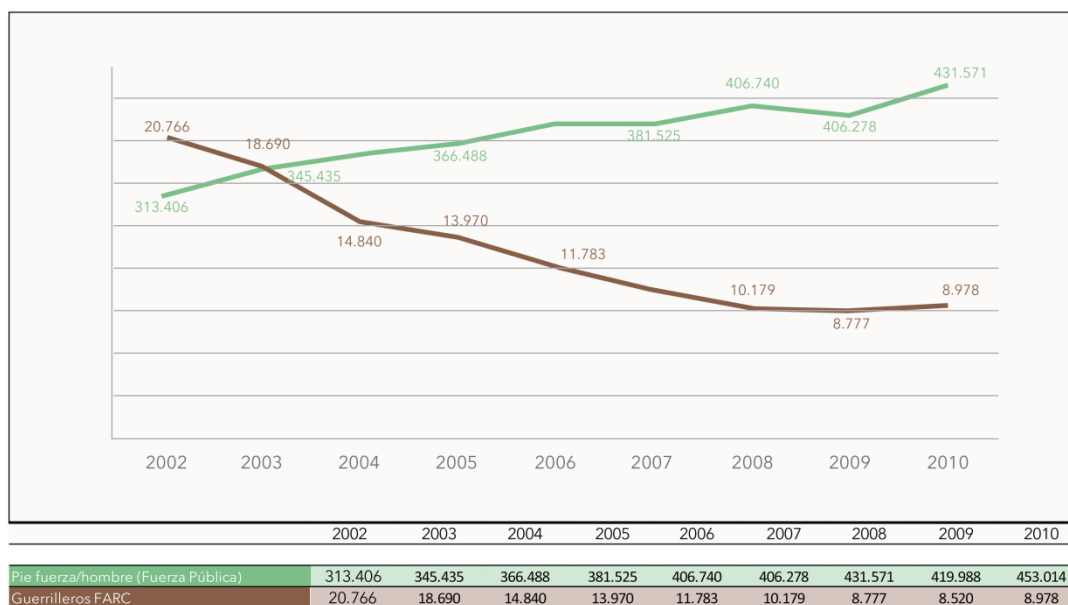
³² Ver nota de pie 35.

TABLA 7
GASTO EN SEGURIDAD (%PIB) – CRECIMIENTO ECONÓMICO



Fuente: Ávila, 2011; Ministerio de Defensa, 2010a; RCN, s/f;
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

TABLA 8
NÚMERO DE EFECTIVOS FUERZA PÚBLICA – GUERRILLEROS FARC



Fuente: Ávila, 2011; Ministerio de Defensa, 2010a; RCN, s/f;
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

TABLA 9
ACCIONES BÉLICAS FARC



Fuente: Ávila, 2011; Ministerio de Defensa, 2010a; RCN, s/f;
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo

No obstante, los logros del gobierno no solo lo obligaron a adaptarse y establecer estrategias militares que respondan efectivamente a la evolución y el nuevo escenario del conflicto (Ministerio de Defensa, 2007:10), sino que éste debió enfrentar las repercusiones de sus políticas de “*menos libertades y más seguridad*” (Gutiérrez, 2004:31) con las que además se lo catalogó de “*autoritario y fascista*” (Restrepo, 2004: 1).

3.2.3. Ventajas de la PSD, PCSD y operativos de desmantelamiento

La consecución de los objetivos específicos de las Políticas de Seguridad y Plan Patriota implementadas contra las FARC a lo largo del periodo 2002-2010, se tradujo, tanto para la población colombiana como para el gobierno, en ventajas sociales, políticas y económicas, las cuales nacen esencialmente a partir de la seguridad que se recuperó en el país, puesto que de acuerdo con el Presidente, solo a través de este elemento se lograría el progreso nacional (CINEP, 2010: 11). La principal ventaja política para el Estado, resultado de la ejecución de la doctrina de la Seguridad Democrática en su primer mandato, fue la confianza que resurgió en la población por cuanto de esta manera, el gobierno recibió el apoyo, credibilidad y validación necesarios que le concedieron mayor poder político y le garantizaron, con

62.20% de los votos, su segunda reelección en 2006. A pesar de que con la ratificación inmediata de Uribe como la cabeza ejecutiva de Colombia por segundo periodo consecutivo se cuestionó la legalidad y respeto a la democracia por parte de los actores Estatales, se considera que esta fue la única manera de perpetuar de manera legítima y progresiva la ejecución de la PCSD y las estrategias militares propuestas para garantizarle a la población una solución estable e ininterrumpida contra el conflicto (Osorio, 2012:50,63).

Asimismo, la confianza y la esperanza de paz que el gobierno le otorgó a la población, resultó en un cambio de mentalidad con respecto a la situación de bienestar en Colombia, puesto que con la reducción de la violencia en el país, no solo se dignificó y se mejoró la calidad de vida de la sociedad civil, sino que el miedo desapareció paulatinamente del imaginario de los colombianos, permitiendo al electorado desarrollarse en un ambiente sin violencia para potencializar sus capacidades (Rodríguez, 2010: 26). Otra de las ventajas sociales a partir de la Seguridad Democrática fue la reinserción de los guerrilleros desmovilizados a la legalidad ya que el gobierno demostró que con la convivencia pacífica y participación económica de los ex combatientes podría generarse un cambio social y la reactivación económica de los departamentos afectados (FIP, 2009:1).

La seguridad que garantizó el gobierno resultó también en una ventaja económica para el país ya que al haberse reducido la vulnerabilidad e inseguridad, se reactivó en Colombia la comercialización de bienes y servicios a nivel micro y macroeconómico (ver Tabla 7). En efecto, con sus políticas, en el periodo 2002-2010, Uribe logró que la nación se posicione, con 4.3% de crecimiento promedio, como la tercera economía más productiva de la región; además para el 2010 las exportaciones crecieron en más del 100% con respecto al 2002 y el PIB se incrementó de \$97.933 mil millones de dólares en 2002 a \$287.18 mil millones en 2010, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.35% (CINEP, 2010:9;Banco de la República, 2016:4). Con respecto a la inversión extranjera, gracias al marco económico y legal adoptado por el Presidente, que estableció políticas de apertura al comercio internacional a través de garantías económicas y legislativas, los inversionistas extranjeros recuperaron la confianza y estabilidad económica necesarias para inyectar capital en el país (Bedoya, 2010: 27; Garavito et al, 2012:56). Este escenario de seguridad generó un crecimiento de IE de \$2.134 millones en 2002 a \$6.429

millones en 2010. A pesar del decrecimiento de este rubro a partir del 2008, el total de IE en el país en el periodo 2002-2010 (\$57.870 mil millones) creció en más del 200% en comparación al periodo 1994-2001 (\$20.403 mil millones) (Banco de la República, 2016: s/n).

En el contexto internacional, la aplicación de las estrategias contrainsurgentes del gobierno respaldadas por el apoyo económico y militar estadounidense contribuyeron a que las relaciones bilaterales entre ambas naciones se fortalezcan, garantizándole al mandatario el respaldo financiero necesario para la ejecución de las políticas de seguridad y operativos de desmantelamiento de manera permanente durante sus administraciones, y también el respaldo político para que ambas naciones se aproximen comercialmente (Veintimilla, 2011:9).

En efecto, en este ámbito el país se benefició a partir de la firma de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga ATPDEA en octubre del 2002³³, que buscaba, además del crecimiento económico de los países beneficiarios³⁴ mediante la eliminación de barreras arancelarias, la lucha internacional contra el narcotráfico gracias al compromiso mutuo de las naciones productoras y consumidoras de cocaína. A través de esta ley Estados Unidos garantizó la supresión de aranceles para casi 65% de los productos importados desde Colombia, reactivándose consecuentemente el comercio multilateral (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016: s/n). Del mismo modo, en noviembre del 2006 se suscribió en Washington el Tratado de Libre Comercio TLC entre ambos países con el objetivo de que los productos colombianos gocen de preferencias arancelarias permanentes que incentiven las exportaciones hacia Estados Unidos, no obstante a pesar de que este acuerdo entró en vigencia en mayo del 2012, se reconoce que se logró debido a la solidificación de las relaciones políticas entre Bush y Uribe (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011: s/n).

Gracias a las iniciativas mencionadas, en el periodo 2002-2010, 41.44% de las exportaciones y 28.32% de las importaciones totales de Colombia se realizaron con Estados Unidos, posicionándose este como el principal socio comercial del país (Trade Map, 2016: s/n). El florecimiento de la relación

³³ El ATPDEA se estableció en la administración de George W. Bush como ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas ATPA, instituida en 1991.

³⁴ Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

política y económica entre Estados Unidos y Colombia se basa en el deseo del primero de garantizar su seguridad nacional y mantener el estatus quo a nivel internacional. Por tal motivo, aunque esta sea una relación de “auto-ayuda y cooperación” (Waltz ,1979:158), es evidente, como establece Waltz (1979:158), que los intereses políticos propios superan cualquier intención de desarrollo económico bilateral, el cual está subordinado y directamente relacionado con la colaboración política de uno de los actores con el otro. En efecto, la cooperación norteamericana con Colombia en los contextos de ayuda militar, colaboración para el desarrollo económico y respaldo político, están sujetos a que Colombia defienda a través de sus políticas internas y externas, la posición e intereses de Estados Unidos dentro de país y a nivel internacional.

A partir del progresivo crecimiento económico de Colombia, el Estado logró reinvertir los fondos en gasto público, social y de seguridad, y de este modo garantizarle bienestar y estabilidad constante a la población. De esta manera se concluye que el desarrollo económico de la nación está directamente relacionado con su seguridad (Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:38). Como ejemplo, la tasa de desempleo total disminuyó de 15.52% a 11.79% durante los mandatos de Uribe (Banco de la República, 2016:4) afectando positivamente al índice de criminalidad, que se redujo en 0.5 puntos para el 2010 (Ministerio de Defensa, 2010b:33).

Finalmente, la principal ventaja que el gobierno logró con respecto a la utilización de mecanismos militares fue no permitirle a las FARC fortalecerse y alcanzar mayores niveles combativos que en el 2002. En efecto, las soluciones de poder duro de Uribe sirvieron como una herramienta para debilitar el poder de la guerrilla mediante la disminución de sus capacidades territoriales, militares y económicas; por lo que se consideran efectivas de acuerdo al contexto de su aplicación. En contraposición a los intereses del gobierno, las soluciones pacíficas (como acuerdos de paz o el desarme voluntario) representan un riesgo, pues, como establece el neorrealismo (Dunne, et al, 2007: 73-74), las intenciones de los rivales son inciertas. Esto significa que la certeza de que la guerrilla se aleje de sus actividades ilegales y actos coercitivos contra la población y se acoja a un compromiso, es inexistente. Del mismo modo a través de un acuerdo de paz las FARC contarían con el tiempo, la libertad y los recursos necesarios para fortalecer secretamente sus capacidades económicas, militares y territoriales. Un ejemplo clave de cómo las

soluciones de paz vulneran la seguridad del Estado es el de las Conversaciones de Paz del Caguán, llevadas a cabo entre 1998 y 2002 en el mandato de Andrés Pastrana³⁵ (Ariza, 2014:15).

3.2.2. Desventajas de la PSD, PCSD y operativos de desmantelamiento

Aunque la implementación de las Políticas de Seguridad y el Plan Patriota cumplieron con la mayoría de los objetivos propuestos por el Presidente y otorgaron resultados positivos al pueblo colombiano, la fijación de Álvaro Uribe con la desarticulación de las FARC y la consolidación del poder gubernamental a lo largo del país lo encaminaron a tomar decisiones anticonstitucionales que trascendieron los límites de la legalidad nacional e internacional. Estos ilícitos se llevaron a cabo a partir de que el ejecutivo asumió las responsabilidades y anuló la participación e injerencia política del órgano legislativo, judicial y de las dependencias encargadas de la aprobación de las decisiones político-militares del Plan Patriota y las Políticas de Seguridad, dando lugar a la mayor desventaja de la implantación de los planes de Uribe: la ruptura de procesos democráticos³⁶. A partir de este punto, las repercusiones de las medidas de Uribe se presentaron sistemáticamente, comprometiendo los intereses sociales, políticos y económicos de la población y del gobierno (Ballén, 2005:82).

En el ámbito social, a raíz de que se planteó que la lucha contra las FARC respondería en esencia a estrategias militares y que *“la plata para la guerra hay que sacarla de donde sea: ayuda, créditos externos, bolsillo de los colombianos”* (Ballén, 2005:82), no solo se puso en evidencia las prioridades del régimen, sino que se justificó la subordinación de la inversión y desarrollo social sobre el gasto militar³⁷ (Ballén, 2005:82). Con esta premisa, se evidencia que a pesar de los resultados militares exitosos, el gobierno relegó a segundo plano el desarrollo social del país y los planes de contingencia económica y humanitaria para salvaguardar a la población afectada por los operativos contra la guerrilla. En efecto, con el desarrollo del plan militar de Uribe, las zonas de lucha con las

³⁵ Los diálogos entre el gobierno y las FARC tomaron lugar en los departamentos de Meta y Caquetá, en un área de 42 mil km² cedida por el Estado a la organización (área de despeje o distensión) (Ariza, 2014:15). Durante este periodo y gracias a la vasta extensión de territorio del que gozaron las FARC, la guerrilla logró maximizar sus capacidades militares, económicas y territoriales, fortaleciendo de esta manera su poder relativo. Para el 2002, cuando se finalizaron las conversaciones, el resultado fue la re potencialización de la capacidad bélica de las FARC en más del 100% con respecto a los cinco años anteriores (Ávila, 2011:28).

³⁶ Tal fue el caso de la incursión de tropas norteamericanas en Colombia, acto que a pesar de ser responsabilidad del Senado, fue decidido por el Ejecutivo (CODHES, 2004: 2).

³⁷ A pesar de que en el periodo 2004-2008 el gasto social representó en promedio 14.31% del PIB y el militar fue de 4.04% esta aseveración se cumple a causa de los insipientes logros en materia social (Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:59).

FARC se convirtieron en focos de conflicto en los que al intensificarse las acciones armadas se vulneró la seguridad de los habitantes, afectando especialmente a la población campesina y fronteriza (CODHES, 2004: 2).

Ante la exposición constante a escenarios violentos, proliferó en Colombia el desplazamiento forzoso hacia los países aledaños, convirtiéndose este en un problema nacional con efectos económicos negativos, como la ralentización microeconómica, e internacional con implicaciones socio-económicas para los gobiernos que se hicieron cargo de los desplazados y los acogieron como refugiados³⁸ (Čapinská, 2013: 81; Trejos, 2015: 61). La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2013: 18) presume que entre el 2002 y 2010, los grupos guerrilleros causaron el desplazamiento forzado de 1.243.228 millones de personas (36% del total); de este acumulado, 734.265 se radicaron como refugiados en más de 40 países³⁹ en el periodo mencionado (Báez, Puentes et Quintero, 2015: s/n). Otra desventaja social que se suscitó a partir de la intensificación de la erradicación de cultivos de coca fue la incertidumbre a la que se expuso a los campesinos dedicados a este oficio, ya que aunque la medida del gobierno buscó debilitar la cadena de producción de droga de las FARC, este no contó con una salvaguarda económica y laboral para los labriegos y los obligó a aislarse de las ya alejadas zonas rurales de cultivo e internarse en los territorios agrestes de las selvas, fronteras y páramos colombianos, exponiéndose su seguridad a la violencia de las agrupaciones armadas (Čapinská, 2013: 89).

En lo que concierne a la lucha militar, con el objetivo de desenmascarar a las FARC, quebrantar su seguridad interna y obtener resultados militares deseables tras la implementación del Plan Patriota, el gobierno presionó a la Fuerza Pública hasta obligarla a cometer actos coercitivos contra la población rural y suburbana. En efecto, mediante reportes falsos de bajas o capturas de miembros de grupos guerrilleros (falsos positivos), los efectivos asesinaron de manera extrajudicial a 1.313 civiles hasta el 2008. Estos actos se reportaron en 68.5% de los departamentos del país, y se presume que el Ejército y la Policía Nacional fueron responsables de estos casos en 94.3% y 5.7% respectivamente (CINEP, 2009: 6,14). Además, el intenso apoyo económico y

³⁸ Debe recalcar que al radicarse en el exterior, las víctimas que huyeron del conflicto se enfrentaron a entornos de discriminación e incipiente oferta laboral (Trejos, 2015: 61).

³⁹ Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Irlanda, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

político que recibió la Fuerza Pública empoderó a los soldados colombianos a tal punto de lograr su autonomía frente Estado y gozar de inmunidad en cuestión de violaciones de derechos humanos y alianzas forjadas con paramilitares (Čapinská, 2013: 70, 80).

Del mismo modo, el régimen fomentó la participación de los habitantes en las redes de informantes y las defensas civiles (soldados de mi pueblo); de este modo se vinculó a la ciudadanía en la lucha contrainsurgente otorgándole tareas y responsabilidades de la Fuerza Pública y la inteligencia militar. El resultado de empoderar a la población civil y hacerla partícipe de los operativos del Estado, lejos de simbolizar el trabajo conjunto entre el mandatario y el electorado, resultó en un atentado contra la seguridad de los colombianos debido a su falta de preparación en actividades militares y a las represalias que sufrieron por parte de los grupos insurgentes; proliferándose además la creación de autodefensas armadas y grupos paramilitares, cuyo accionar bélico estaría respaldado por el gobierno (Ballén, 2005:62).

En el contexto internacional, se considera que la ayuda recibida por Estados Unidos representó una de las mayores desventajas para el pueblo colombiano y el gobierno, además de un desacierto económico, político, social y militar para el segundo ya que con la intensiva injerencia e influencia de los postulados ideológicos realistas y capitalistas del régimen de George Bush, no solo se magnificó la lucha militar en Colombia, sino que se coartó una salida negociada al conflicto y se sumió al país a una subordinación política y económica (Trejos, 2015: 61,62; Ávila, 2008:6). La cooperación norteamericana incidió negativamente en el ámbito político, social y económico del país, por ejemplo, con un incremento de 1% en la ayuda militar, a manera de protesta y rechazo de la población, el absentismo electoral y los homicidios en territorio con presencia de efectivos estadounidenses, se incrementaron en 2% y 3% respectivamente (Dube et Naidu, 2010: 3,18).

En cuanto a la economía colombiana, cabe mencionar que esta dependió directamente de la estabilidad financiera de Estados Unidos, motivo por el cual, a pesar de su crecimiento constante, a partir del 2008, a causa de la crisis monetaria de este país, Colombia sufrió una ralentización económica:

entre el 2007 y 2008, la tasa de crecimiento del PIB, se contrajo en 5 puntos porcentuales⁴⁰ (Pachón, 2009: 342).

Por otro lado, el aislamiento político y el deterioro de las relaciones económicas multilaterales y bilaterales entre Colombia y las naciones vecinas se originaron principalmente a causa del acercamiento político e ideológico de Uribe con el gobierno estadounidense. Del mismo modo, la negativa de las naciones sur americanas a colaborar con la lucha contra la guerrilla así como a la ejecución de operaciones militares en territorios fronterizos e internacionales ocasionados por el repliegue de las FARC hacia estas zonas contribuyó a la enemistad político-económica entre los países de la región. Esto se debe a que las relaciones económicas entre las unidades de un sistema inciden directamente en sus relaciones políticas; así también en el caso de existir barreras o diferencias políticas entre los Estados, las relaciones económicas se entorpecen (Gilpin, 2001: 102).

Con respecto al desarrollo de operaciones militares transnacionales, el conflicto diplomático de mayor relevancia ocurrió con el gobierno de Ecuador en marzo del 2008 debido a la intromisión del ejército colombiano en la provincia de Sucumbíos durante la ejecución de la Operación Fénix. Waltz (1979: 96) determina que a pesar de que las intenciones de ciertos actores en el sistema internacional, se basan en la búsqueda de la estabilidad nacional y protección al electorado, este hecho representa una amenaza contra otros Estados pues en la consecución de este objetivo interno pueden vulnerarse aspectos en materia de seguridad y soberanía externa. Así mismo al establecer medidas que a primera vista resultan efectivas para salvaguardar la seguridad de los habitantes y que además responden a sus necesidades y requerimientos, un régimen puede perjudicarse involuntariamente por cuanto sus actos podrían representar una amenaza para otros actores y facultarlos para atacar (Waltz, 1979:199). Bajo este sustento teórico se asevera que a pesar de que la estrategia militar del gobierno buscaba la protección de los colombianos y la consecución de los objetivos de Uribe, esta representó una violación a la soberanía y seguridad nacional del pueblo ecuatoriano. Por ende el mandatario se expuso a un contraataque justificado de Ecuador,

⁴⁰ Al enfatizar la importancia de la integración económica, Gilpin vaticina que las economías que se resisten al comercio multilateral, "se estancan o retroceden" (Allard, 2004:20). Como ejemplo, aunque las críticas de la dependencia colombiana con Estados Unidos son fuertes, se evidencia que los demás países de la región, que no entablaron relaciones con la potencia americana, se enfrentaron a la ralentización o estancamiento económico (Allard, 2004:20).

condicionando su supervivencia a una respuesta militar, económica o política por parte de su vecino.

Las repercusiones internacionales de la Operación Fénix ocasionaron además el rompimiento de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua (por solidaridad con Ecuador). Las represalias contra Álvaro Uribe por parte de Hugo Chávez y Rafael Correa significaron la movilización de tropas venezolanas a las fronteras y la implementación de barreras migratorias y económicas a ciudadanos colombianos en Ecuador (Pachón, 2009: 341, 342). Ante este contexto y con el objetivo de apaciguar la disputa, en la Cumbre de Río (República Dominicana) de 2008, Colombia se comprometió a disculparse por el ataque que se llevó a cabo sin la autorización del gobierno ecuatoriano siempre y cuando a nivel internacional los mandatarios respeten *“el derecho soberano de los pueblos a su seguridad”* (Uribe, 2008: s/n) a través del establecimiento de mecanismos que impidan la internacionalización de las FARC (Uribe, 2008: s/n). No obstante, a pesar de los intentos de mediación entre ambos gobiernos, Rafael Correa aseguró que *“mientras el Presidente de Colombia fuera Álvaro Uribe, Ecuador no cambiaría su posición”* (Pachón, 2009: 342).

Waltz indica que a pesar de los resultados positivos que el uso de la fuerza puede acarrear aun régimen (como el incremento de su poder relativo y el fortalecimiento de sus capacidades), con estos mecanismos, éste atentaría de manera legítima contra la seguridad y estabilidad de sus unidades (Kahhat, 2005:11). En efecto, al ser las herramientas y soluciones de Uribe exclusivamente militares, no solo se desvalorizaron los logros alcanzados hasta el 2010, sino que el Presidente expuso a la población a escenarios de violencia e inseguridad transformando al país en una nación donde reinaron *“el odio, la venganza, el temor y la depresión”* (Ballén, 2005:164). Además, con su accionar, Uribe se ganó el descontento e inconformidad del pueblo y de sus homólogos a nivel regional. Este último punto le costó a Colombia pérdidas económicas, políticas y también la expansión de las FARC a nivel internacional ya que al no existir acuerdos de cooperación militar, especialmente con los países vecinos, las fronteras colombianas fueron lo más lejos que pudo llegar la lucha contra la guerrilla (Čapinská, 2013: 70, 80; Trejos, 2015: 61,62).

3.3. Repercusiones al poder militar, económico y político de las FARC

Desde su fundación en 1964, las FARC forjaron su consolidación como el grupo insurgente más poderoso de Colombia gracias a la utilización de estrategias económicas, militares y políticas, con las cuales la guerrilla afianzó su crecimiento humano y extensión territorial. No obstante, a partir del 2002, al convertirse Uribe en la cabeza ejecutiva de la nación, las FARC afrontaron lo que sería el golpe más duro de su historia. En efecto, a causa de la intensificación de la lucha contrainsurgente a través de mecanismos político-militares, el gobierno aplacó el poder económico, militar e incluso político de la organización anulando casi 50 años de logros a nivel nacional e internacional. Ante este escenario, la guerrilla se propuso contraatacar al Estado mediante el Plan Renacer, con el cual las FARC pretendían recuperar su fuerza combativa, soberanía nacional y poder duro.

3.3.1. Repercusiones militares y respuesta de las FARC

Con la posesión presidencial de Álvaro Uribe, las FARC potencializaron su lucha militar a niveles extremos, sin embargo, consecuente al repliegue y profesionalización de la Fuerza Pública la organización se sumió en un profundo debilitamiento y cerco territorial. El líder guerrillero Manuel Marulanda aseguró que el decaimiento militar de sus tropas se debió de igual forma al exceso de confianza de los guerrilleros, a las insuficientes labores de la inteligencia y planificación estratégica, así como al decreciente nivel de reclutamiento y ausencia de confidencialidad para llevar a cabo operaciones militares (Ávila, 2008:4; FIP, 2009:1; CNMH, 2014: 214, 215). El aspecto de las FARC más afectado por el gobierno fue sin duda el militar y territorial puesto que con la captura de los altos directivos y mandos medios de la organización, esta quedó acéfala (CNMH, 2014: 175).

Ante este escenario, la primera táctica de defensa de las FARC contra el Plan Patriota fue el engrandecimiento y amparo de sus territorios militar y comercialmente estratégicos, enfocándose en la protección de áreas como Putumayo, Arauca, Guaviare, el Catatumbo, Cauca, el bajo Cauca, Nariño, Norte de Santander, Meta y la Macarena (Ávila, 2008:11; CNMH, 2014: 221). Sin embargo a partir del 2004 la creciente ofensiva del ejército obligó a la guerrilla a retirarse lentamente de Colombia y erradicarse en zonas agrestes y remotas, específicamente de la Amazonía y Orinoquía, donde se valieron de la geografía selvática para protegerse (Escuela Superior de Guerra de Colombia,

2008:26). El Centro Nacional de Memoria Histórica (2014: 175, 217, 274) y Ávila (2008:11) afirman que este escape no solo contribuyó al abandono parcial de las actividades ilegales de comercio del grupo, sino que sumió a los miembros en un desabastecimiento de víveres y equipo.

En su exilio, las FARC esbozaron una nueva estrategia que les permitiera fortalecerse y resistir. La organización estableció que su recuperación militar tardaría 5 años en promedio, tiempo en el cual se prepararía para arremeter mordazmente contra el gobierno de Uribe y finalizar su mandato. El Ministerio de Defensa (2007:23) detectó que las FARC direccionaron su lucha a una guerra de guerrillas y desgaste del enemigo mediante la prolongación del conflicto y la ejecución de operaciones relámpago que no involucren contacto humano, y en la profesionalización de sus militantes para prepararlos para escenarios de lucha urbana y rural (CNMH, 2014: 217). Otro punto clave que ayudaría al fortalecimiento bélico de la guerrilla fue su crecimiento humano a partir del reclutamiento. Esta maniobra resultó poco fructífera debido a la nueva situación económica de las FARC, afectando los ingresos y la solvencia de cada Frente. Del mismo modo la reputación de los guerrilleros y el peligro de formar parte las FARC disminuyeron las posibilidades del ensanchamiento de sus filas. Al finalizar el primer periodo de Uribe, aunque el gobierno si logró la desestabilización y debilitamiento de la organización, para el 2007, esta demostró una recuperación militar impresionante, basada en las estrategias defensivas mencionadas. Así, las FARC se convirtieron en una guerrilla disuasiva y dispersa, lista para contraatacar (CNMH, 2014: 221, 274; Ministerio de Defensa, 2007:23).

Después de más de 4 años de haberse confinado en zonas recónditas y haber sobrevivido a las operaciones militares del Plan Patriota, las FARC plantearon en 2008 la ejecución del Plan Renacer a cargo de Alfonso Cano, con el cual lograrían la reconstrucción de su capital humano, la reconquista y protección definitiva de sus territorios y el fortalecimiento de su estructura armada hasta el 2010 para abatir al ejército con la misma fuerza previa al primer mandato de Uribe (CNMH, 2014: 220). Sin embargo, a pesar de que la implementación del Plan simbolizó el comienzo de una nueva era para la guerrilla y su respuesta militar contra los ataques del gobierno, con la finalización del Plan Estratégico, las FARC afrontaron el golpe militar más

severo de su historia puesto que no solo renunciaron a su estrategia fundacional sino que se humillaron frente a Colombia al reconocer que ni con la profesionalización de sus tácticas militares lograron frenar el avance del ejército o cumplir con los objetivos planteados desde su nacimiento (Aguilera, 2012: 86; Cragin et al, 2007:72; CNMH, 2014:271).

Como se ha mencionado anteriormente, los principios ordenadores y la estructura establecida por el régimen, así como las relaciones y acciones individuales de los actores de un mismo sistema son los elementos que disponen el comportamiento de las demás unidades (Waltz, 1979:105). Consecuentemente puede inferirse que el Plan Renacer de las FARC nace no solo como una herramienta para que la guerrilla recobre sus capacidades y poder militar sobre el Estado, sino como una respuesta a las acciones y disposiciones entabladas por el mismo.

Según Ávila (2011:45), la principal estrategia de ataque del Plan Renacer fue la implementación de mecanismos que eviten el combate frontal contra el ejército a través de las Unidades Tácticas de Combate UTC y ataques desplegados paralelamente en diferentes puntos geográficos que impidan a la armada defender íntegramente una zona específica de conflicto (FIP, 2009:2). Asimismo, basaron su ofensiva en la utilización de campos minados, morteros, bombas desplegadas en árboles, animales, vehículos e incluso personas, y en ataques con francotiradores para evitar combates directos pero causar daños mayores. Del mismo modo se concentraron en el aislamiento y debilitamiento económico de las localidades mediante la destrucción de su infraestructura, locales comerciales, de abasto de servicios básicos y de transporte para afectar la movilidad y comercio departamental (Ávila, 2011:40; FIP, 2009:1). Por otro lado, como mecanismo de defensa la guerrilla se movilizó a zonas fronterizas e internacionales para evitar la persecución del Ejército y desplazarse sin causar un incremento y focalización de enfrentamientos con la Fuerza Pública en las urbes de esas zonas (FIP, 2009:1). También implantaron la comunicación cifrada para evitar ser interceptados y el uso de ropa civil para disuadir al ejército y penetrar con mayor facilidad en las capitales (Román, 2008:1; McDermott, 2013: s/n).

Los resultados del Plan Renacer fueron decisivos para las FARC y para el gobierno ya que la organización se recuperó de los ataques militares del Estado, recobró fuerza combativa e impidió el avance de la Fuerza Pública

ganando posicionamiento territorial e incrementando las bajas del ejército gracias a los ataques con UTC. A partir del 2008, aunque el número anual de acciones militares de las FARC no alcanzó el nivel del 2002, en el periodo 2008-2010 las FARC realizaron 4.914 acciones militares (108 menos que en el periodo 2003-2007), demostrando su re empoderamiento y recuperación de su capacidad bélica (Ávila, 2011: 38, 44,45). Para el 2009, la organización demostró cómo su estrategia de resistencia y desgaste a la Fuerza Pública rindió frutos, puesto que un año antes de finalizarse el segundo gobierno de Uribe, la guerrilla reactivó su actividad bélica incrementándola en 30% (Valencia, 2010: 2). Lo anterior refleja que a través de la utilización de herramientas militares y de poder duro, un sector anárquico puede debilitar e incluso romper la jerarquía dictatorial de un régimen y establecer en su lugar, otra que lo beneficie (Waltz, 1979:152).

Finalmente, aunque la nueva táctica ofensiva de las FARC se convirtió en una estrategia militar exitosa con la que se reconoció que la organización aun representaba una fuerza cohesionada, organizada, influyente y con cierto poder en zonas específicas del país, está implicó pérdidas militares, sociales y económicas pues al implementarla, los guerrilleros se aislaron de la población confinándose en zonas alejadas y consecuentemente disminuyendo su presencia a nivel nacional. Igualmente, al haber ejecutado más del 50% de sus ataques con explosivos y minas, las FARC recrudecieron al conflicto y socavaron su imagen (Ávila, 2011:45; CNMH, 2014: 175). Sin embargo, para la finalización de los mandatos de Uribe, a pesar de los evidentes logros de las políticas y ataques militares del Estado, el Plan Renacer representó el mayor logro militar de las FARC al recuperarse y abatir a la doctrina de Uribe (Valencia, 2010: 2).

3.3.2. Repercusiones económicas y respuesta de las FARC

Tanto las FARC, como su principal actividad económica, el narcotráfico, representaron el mayor impedimento para la consecución del Estado democrático de Uribe, puesto que el poder económico de la guerrilla fue desde sus inicios el combustible de su aparato militar y por ende, garantía de su consolidación territorial. Consecuentemente, la promesa de Seguridad Democrática del gobierno se efectivizaría únicamente mediante el debilitamiento económico de las FARC junto con la destrucción definitiva de su cadena de producción de estupefacientes, desde la eliminación de cultivos de

coca y cocinas hasta la desarticulación de las redes de narcotráfico (CNMH, 2014: 215). Las políticas antinarcóticas de la PSD y la PCSD junto con los ataques militares del Plan Patriota golpearon económicamente a las FARC esencialmente a costa de su aislamiento territorial. El repliegue de la organización así como el abandono y pérdida de sus zonas estratégicas afectaron el desarrollo de las actividades narcotraficantes del grupo y limitaron su capacidad económica. Asimismo debido a la necesidad de abaratar costos logísticos y a la intensificación de operaciones aéreas por parte de la Fuerza Aérea Colombiana la organización limitó la exportación de drogas únicamente a rutas marítimas y terrestres (Ministerio de Defensa, 2007:25).

La primera estrategia económica de las FARC para combatir los esfuerzos gubernamentales de la erradicación de cultivos ilícitos fue el abandono de la siembra extensiva de coca y por el contrario, los guerrilleros diseminaron los cultivos localizándolos cerca de reservas ecológicas, territorios indígenas y ancestrales, zonas fronterizas, internacionales y territorios de difícil acceso no solo para ocultar los cultivos sino para evadir su erradicación aérea con glifosato; las FARC además redujeron el tamaño del territorio sembrado y lo camuflaron con otro tipo de arados (Ministerio de Defensa, 2007:25). Como resultado, mientras que para el 2002 la guerrilla ejerció control en más del 80% de las zonas productivas de coca en Colombia, entre el 2008 y 2010 esta presencia se redujo paulatinamente a la mitad. Por tal motivo, aunque sus ingresos no se mermaron drásticamente la organización redujo su poder adquisitivo (CNMH, 2014: 219).

A pesar de que esta medida de las FARC no frenó la campaña antinarcótica del Estado si garantizó la subsistencia económica de la organización y tuvo repercusiones contra el gobierno al atentar contra el trabajo y seguridad económica de los campesinos recolectores de coca (Ministerio de Defensa, 2007:25). El debacle económico de la guerrilla ocasionó más que repercusiones monetarias hasta afectar las bases de su organización, ya que con su iliquidez los problemas internos como el incremento de la desertión, la rivalidad y la traición para el cobro de recompensas, florecieron (CNMH, 2014: 219). De acuerdo con el neorrealismo, estos problemas se originan cuando el tamaño de una organización (infraestructura, capital humano) es mayor al de sus capacidades, en efecto al ser éstas insuficientes para la manutención de un grupo se generarán problemas internos relacionados a la disminución de

ganancias e incentivos que las partes reciben. Por tal motivo, mientras más pequeña sea la organización existen mejores oportunidades de supervivencia (Waltz, 1979:201).

Durante el periodo 2002-2007 las FARC establecieron estrategias de subsistencia y defensa más que de crecimiento, las cuales les permitieron soportar los ataques del ejército, y no fue sino hasta el 2008, que con el Plan Renacer la organización replanteó su resurgimiento económico. En efecto, al verse afectadas, el objetivo económico del Plan Renacer se basó en la recaudación de \$230 millones de dólares para sostener a la organización, devolverles su liquidez y para conseguir los recursos suficientes para la ejecución del Plan. De acuerdo con Villamarín (2013: 335), este presupuesto se conseguiría no solo con el dinero de los actos coercitivos y el lavado de dinero, sino con el aumento en cantidad y monto de los tributos que las FARC cobraban a los narcotraficantes, ya que a pesar de haberse distanciado del trabajo directamente relacionado con el tráfico de estupefacientes, la organización usó su herramienta más útil, el miedo, para participar y lucrar indirectamente de esta actividad.

Como primera medida, para la ejecución del Plan, el líder guerrillero alias Cano dispuso un préstamo de \$6 millones de dólares del Secretariado para reabastecer con armamento y equipos de comunicación a cada Bloque. La importancia del re equipamiento de la guerrilla no radicó solo en su defensa, sino en la adquisición de artillería específica y de alta precisión para arremeter contra la Fuerza Pública sin hacer contacto y posicionarse a su mismo nivel militarmente (Aguilera, 2013:105). Se establecieron también planes y metas financieras a mediano plazo sujetos a evaluaciones económicas bianuales. Con este régimen, los Frentes no solo se convirtieron en entes tributantes al Estado Mayor Central, sino que además se les solicitó la legitimación de sus bienes muebles e inmuebles, y la inversión de capital en el sector financiero, inmobiliario, ganadero y en empresas legalmente constituidas para garantizar la estabilidad financiera de la guerrilla; intensificando por ende operaciones de lavado de activos y contrabando de mercadería. (CNMH, 2014: 220, 221).

Al haber sido interrumpidas sus actividades ligadas al narcotráfico, guiadas por el Plan Renacer y por la necesidad de subsistir económicamente, las FARC incurrieron de manera activa en actos coercitivos contra la población para generar recursos de manera rápida y eficiente. En efecto, los guerrilleros

salvaguardaron su personal, equipos y seguridad ejecutando actividades comerciales que los mantengan alejados de la Fuerza Pública, que no propicien enfrentamientos ni desgaste de sus militantes y cuyo riesgo fuese menor (Aguilera, 2013:105; FIP, 2009:1). Por tal motivo, a pesar de que las cifras generales de ese tipo de actos ilegales contra la población se redujeron en el país, el Ministerio de Defensa (2010b: 14,15, 28) estima que únicamente en el 2009 y 2010, las FARC realizaron 66 secuestros, 50 secuestros extorsivos y 199 extorsiones. Del mismo modo, el interés de las FARC de salvaguardar y asegurar su motor y poder económico las impulsó a estrechar relaciones estratégicas con agrupaciones criminales, que si bien representaron un aliado importante para este fin, les fueron útiles a las FARC únicamente por carecer del poder y trascendencia necesaria para derrocar a la guerrilla. Las alianzas territoriales, comerciales y militares se dieron principalmente con el ELN, los Paisas, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia ERPAC, las Águilas Negras y los Rastojos (CNMH, 2014: 221,222).

La cooperación entre las FARC y los grupos criminales nace a partir del deseo de estos actores de cooperar para lograr un beneficio equivalente: debilitar al gobierno. De acuerdo con Waltz, este fenómeno denominado “asenso del interés común” ocurre cuando los elementos, aparentemente antagónicos cooperan para fortalecerse y oponerse contra un enemigo mutuo, al cual no podrían vencer por separado (Waltz, 1979: 106). Sin embargo los acuerdos entre organizaciones no fueron duraderos debido a los diferentes intereses de los actores y las disputas por territorio y poder (CNMH, 2014: 221,222); lo que refleja que en ciertos casos las relaciones cooperativas entre actores pueden generar controversia y conflicto entre ellos debido a su alto grado de interrelación y la idealización de sus intereses individuales frente a los comunes (Waltz, 1979:205).

Aunque el golpe económico que el ejército le propinó a las FARC no puede ignorarse, la capacidad de planificación y adaptación de la estructura de la guerrilla, las bases administrativas con las que fundaron sus empresas, su trayectoria y sus innumerables aliados comerciales garantizaron su subsistencia y recuperación económica a pesar que se alejaron temporalmente de las actividades de comercio que históricamente ejecutaron. En efecto, las estrategias económicas y militares del Plan Renacer las propulsaron

nuevamente a ejecutarlas logrando para el 2010, un patrimonio de más de \$1.500 mil millones de dólares (FIP, 2009:2; Villamarín, 2013:99).

3.3.3. Repercusiones políticas y respuesta de las FARC

A pesar de la creación de instituciones y grupos que fomenten la lucha política de la organización, incluso antes del inicio del gobierno de Uribe, este aspecto permaneció bajo la sombra del engrandecimiento militar de las FARC, convirtiéndose ante los ojos de Colombia en un grupo subversivo exclusivamente armado. Esta creencia se intensificó con la respuesta militar que las FARC le propinaron al gobierno desde el 2003 ya que al haber decaído militar y económicamente la guerrilla centró sus capacidades en la recuperación de estos dos aspectos, colocando su lucha política en un segundo plano. Asimismo, el hecho de que la organización no solo carecía de apoyo popular y legitimación, sino que no había logrado fusionar su lucha ni ideología con los ideales del pueblo colombiano la alejó de la consecución de sus objetivos políticos (CNMH, 2014:174).

Este escenario empeoró drásticamente con la implantación del Plan Patriota por cuanto resquebrajó el trabajo político de la organización de más de una década, mermando 45% de las células políticas y organizaciones del PCC3. Asimismo, la persecución de la Fuerza Pública les impidió fomentar su labor política de masas e incluso afectó el adecuado desarrollo de la IX Conferencia guerrillera en 2007, la cual a pesar de llevarse a cabo, careció de una amplia participación nacional de representantes, restándole no solo solemnidad sino interfiriendo en el acto político más relevante de la organización (CNMH, 2014: 218, 301).

Las estrategias políticas constituidas por las FARC para contrarrestar los ataques del gobierno y subsanar los daños a su reputación no solo fueron inútiles, sino que al haber sido la recuperación económica y militar de la organización un elemento esencial, los esfuerzos políticos de la guerrilla tampoco fueron una prioridad. La planeación política y social de las FARC se centró en su participación y reconocimiento político nacional e internacional, en el acercamiento a la población afectada por el conflicto y a los agricultores cocaleros mediante favores y acuerdos que les garanticen su simpatía (CNMH, 2014: 175, 246; Ministerio de Defensa, 2007:24). No obstante, para el año 2008, al intensificarse su respuesta bélica y las acciones en contra de la

población civil, la derrota política de las FARC fue evidente y se reflejó en las movilizaciones nacionales en contra de la guerrilla el 4 de febrero de ese año, demostrando el descontento de la población con las acciones insurgentes del grupo y su vinculación con grupos narcoterroristas (Escuela Superior de Guerra de Colombia, 2008:29). En el mencionado acto público de rechazo, el pueblo colombiano negó que la organización sea un ejército del pueblo, enfatizando que sus tácticas económicas, militares y políticas se basan en el irrespeto a los derechos humanos. Para esta fecha, la reputación de las FARC se destruyó, afianzándose la organización como un sinónimo de guerra, ilegalidad y muerte (CNMH, 2014: 267,269).

Ante su derrota política y basándose del mismo modo en el Plan Renacer, a partir del 2008, la guerrilla priorizó la reconstitución política de su estructura apoyándose en la gestión del PCC3 y el MBNC (CNMH, 2014: 275). En efecto la estrategia de recomposición política de las FARC responde al postulado neorrealista que enaltece el fortalecimiento de las capacidades políticas de un actor por constituir herramientas con las que éste puede influenciar e incrementar su poder relativo frente a otros (Allard, 2004:8; Waltz, 1979: 194). La estrategia de las FARC está esencialmente basada en tácticas y programas para incluir a la guerrilla en la política colombiana mediante la creación de relaciones y atención a los sectores de la nación política y socialmente marginados, los cuales le garantizarían a la organización apoyo masivo y facilitarían la participación de un miembro del Secretariado en los comicios del 2010 (CNMH, 2014: 221).

En el ámbito internacional, las FARC no solo intentaron fortalecer relaciones políticas con los países limítrofes, sino que participaron en misiones diplomáticas visitando Estados ideológicamente afines como Bolivia, China, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua y Viet Nam con el fin último de internacionalizar su lucha (CNMH, 2014: 221). No obstante, estos nexos, específicamente con los Gobiernos de Lula da Silva, Evo Morales, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rafael Correa generaron crítica internacional y la sospecha de actos de corrupción co participativos entre dichos gobiernos y la guerrilla. Por ejemplo, de acuerdo con Villamarín (2014:1845, 1855, 2028) el Presidente ecuatoriano recibió un auspicio de \$40 mil dólares para su campaña política por parte de la organización, quien a cambio exigió que el

gobierno ecuatoriano no realice fumigaciones fronterizas para erradicar los cultivos cocaleros.

Con respecto al trabajo del PC3 y el MBNC, se solicitaron a estas estructuras rigurosas labores de infiltración a nivel nacional en instituciones públicas y asociaciones sociales para lograr la adhesión de personalidades influyentes a la guerrilla. Asimismo, se plantó la consolidación de estos movimientos en todo el territorio fariano para que actúen como representantes políticos de cada frente, específicamente de aquellos políticamente aislados (CNMH, 2014: 239,240).

Por otro lado, con el objetivo de cuidar su imagen ante la sociedad nacional e internacional a partir de la implementación del Plan Renacer, las FARC procuraron que sus operativos no lastimen o atenten directa o indirectamente a los ciudadanos (FIP, 2009:1), y fomentaron el canje humanitario de rehenes. Este acto que logró la humanización de la guerrilla y mejoró su imagen, significó para sus simpatizantes un signo de debilidad política y militar por cuanto las FARC cedieron ante la presión gubernamental (CNMH, 2014: 175). No obstante, este punto, junto con el masivo trabajo político de las FARC se anuló con algunos de los postulados y objetivos publicados en el manifiesto del Plan Renacer, en los que se exhorta a una lucha miliar y por ejemplo, a la ejecución de *“atentados terroristas, urbanos o rurales, con explosivos, como requisito indispensable” para la “graduación” de nuevos guerrilleros* (Apuleyo, 2013:1).

Después de una década de permanentes ataques políticos económicos y militares contra las FARC, se evidencia que a pesar de la veracidad con la que la guerrilla implementó sus estrategias políticas, económicas y militares para protegerse del Estado, y aunque no se logró su erradicación definitiva, Uribe consiguió mermar las capacidades de las FARC y alcanzó la consolidación del poder relativo del Estado sobre la organización en materia política, militar y territorial. En efecto, gracias a la implementación de sus políticas de seguridad y ataques militares de desmantelamiento el gobierno cumplió con su responsabilidad principal que, de acuerdo con el neorrealismo, se basa en garantizarle al electorado un entorno seguro y en el que puedan desarrollarse abiertamente las capacidades de sus unidades (Kahhat, 2005: 10). Aunque el principal logro de la PSC, PCSD y planes militares fue el debilitamiento de las FARC éste acarreó también resultados positivos como el crecimiento económico de la nación y la estabilidad de los habitantes. Sin

embargo, no puede negarse que los ataques militares no solo ocasionaron pérdidas humanas, sino que perjudicaron al desarrollo ciudadano al exponer a la población permanentemente a escenarios violentos y de vulnerabilidad; tal contexto se asemeja al planteado por Waltz (1979:152), que indica que *“Las luchas destinadas a conseguir y mantener el poder, a establecer el orden y lograr una especie de justicia dentro de los Estados, pueden ser más sangrientas que las guerras entre ellos”*. Finalmente, a lo largo de este capítulo se ha dado cumplimiento al tercer objetivo particular de la investigación, con el cual se pretendía analizar los resultados de la ejecución de las políticas de seguridad y desmantelamiento implementados en los periodos de Gobierno de Álvaro Uribe.

VI. ANÁLISIS

La investigación realizada a lo largo de este trabajo permite de manera integral cumplir con el objetivo general de analizar las políticas de seguridad y desmantelamiento implementadas por el Gobierno de Álvaro Uribe como mecanismo para reprimir el poder político, militar y económico de las FARC. Esta investigación se sustenta en el método inductivo-deductivo como herramienta que permite validar los argumentos que se establecieron a lo largo de los capítulos precedentes, e iniciar el proceso de análisis. Este proceso es posible gracias a recursos como el planteamiento de preguntas, el uso de gráficos, tablas comparativas, confrontación de hechos, argumentos que se presentan a través de un ciclo causa-efecto, la categorización de información y el diseño de alternativas que permiten establecer conclusiones contundentes. Además, el trabajo adopta postulados de los neorrealistas Kenneth Waltz y Robert Gilpin, con los que se ha logrado explicar y fusionar la teoría con los hechos y causas político-sociales y económicas que generaron la pugna de poder entre el Estado y las FARC.

Para el análisis del conflicto armado entre las FARC y el gobierno, es necesario identificar a los principales actores involucrados en esta lucha basándose en los roles y atribuciones establecidas por el neorrealismo. En primer lugar está el Estado, como la unidad responsable de garantizar la seguridad y protección a los colombianos (tanto a la sociedad civil como a actores no Estatales) a través de la defensa de la estructura democrática de su régimen y el cumplimiento de los principios ordenadores establecidos para evitar el nacimiento de la anarquía. En segundo lugar, participan las FARC, como organización guerrillera no reconocida por el gobierno pero cuyas acciones trascienden nacional e internacionalmente, y que además anhela desestabilizar el status quo del país y destruir al Estado mediante la eliminación de la estructura jerárquica y dictatorial impuesta por el régimen político colombiano. Finalmente se presenta la población civil como víctima de esta lucha y actor perjudicado por el Estado y por las FARC debido a que en su pugna de poder, ambos vulneran sus derechos. Cabe recalcar que la presencia e interacción de los actores mencionados afecta su comportamiento y resultados tanto individuales como colectivos.

El motivo central del conflicto armado entre las FARC y los representantes políticos de la nación ha sido históricamente causado por la

insatisfacción de la organización con la gestión gubernamental, puesto que de acuerdo con la guerrilla, en más de 50 años de conflicto, éstos no han logrado satisfacer las necesidades de la población rural y vulnerable del país, sino que han intercedido en su mayoría por las élites y grupos de poder de la nación. La historia se repite y el conflicto perdura en el mandato de Álvaro Uribe, para quien la guerrilla no es más que el actor que desató en Colombia el desorden, la anarquía y que atentó contra la seguridad nacional. Sin embargo, el nacimiento de un grupo disidente al régimen y la convulsión e inestabilidad política que vive el país simboliza que el Estado no está bien encaminado; es el reflejo de que éste no actúa para el conglomerado ni busca satisfacer sus intereses; que no escucha ni ve la realidad del pueblo; y que vela únicamente por sus necesidades individuales.

De acuerdo con la teoría neorrealista, los levantamientos anárquicos representan descontento y revelan los problemas estructurales de las jerarquías, pero también sugieren que las unidades se sienten amenazadas por el poder del régimen y por lo tanto buscan alterar el orden establecido para alcanzar su seguridad. En este caso, para las FARC, los problemas se generan a partir del desbalance de poder que favorece al círculo gubernamental y con el que se cometen arbitrariedades contra la población civil. Este planteamiento indica que los regímenes democráticos no son necesariamente garantes de orden, estabilidad, participación y respeto a los derechos populares, sino que buscan de manera dictatorial imponer una estructura y convertir a las unidades disidentes en aliadas, consecuentemente, como indica Waltz, son los Estados democráticos los que generan conflicto al intentar corregir y llevar a la democracia a las unidades que se rigen por principios opuestos.

Al simbolizar la guerrilla una amenaza para la seguridad nacional y para la supervivencia del régimen, y el Estado Uribista una amenaza para la seguridad de la organización y su supervivencia, ambos se convierten en enemigos y su objetivo principal se convierte en su destrucción mutua, porque como indica el neorrealismo, ninguno podrá lograr sus objetivos mientras exista una amenaza latente a su seguridad y el peligro de su destrucción. Es decir que ambos actores deben concentrarse en la anulación de su contrario; por ende, se instaura en Colombia un sistema antagónico entre el gobierno de Uribe y las FARC, en el que las relaciones de los actores más poderosos que se disputan el poder, se basan en un juego de suma cero y que además

reflejan una lucha de supervivencia basada en el fortalecimiento de las capacidades relativas de cada uno y el dominio de los medios de control para lograr convertirse en el hegemón del país. En el camino para la consecución de su objetivo, y considerando que se desató una contienda en la que el Estado reprimía a la organización, esta puso en práctica tácticas políticas, militares y económicas para sobrevivir.

La importancia de las estrategias implantadas por las FARC contra el gobierno radica en que gracias a estas, la guerrilla sería capaz de desarrollar e incluso explotar sus capacidades políticas, económicas, tecnológicas, territoriales y humanas, mediante las cuales las unidades obtienen mayor poder relativo sobre otros actores para frenar su poder. En materia política, las estrategias de las FARC responden principalmente a su deseo de consolidarse como una organización reconocida, que obtenga legítimamente⁴¹ el poder político de Colombia e instaure un nuevo régimen que responda a sus objetivos y ordenamientos. El fortalecimiento de las capacidades políticas está considerado por Waltz como un medio para obtener mayor poder relativo frente a otros actores, puesto que a través de la autoridad y manejo de la política podrán generarse cambios estructurales en un régimen. Las estrategias políticas de las FARC están sustentadas y se valieron de las debilidades y errores del Estado para influenciar a la población afectada y ponerla en su contra. De esta manera, gracias a la participación de la guerrilla como actor político no reconocido en las regiones desatendidas de la nación, las FARC fomentaron el rechazo al régimen, atraieron simpatizantes y forjaron relaciones con la sociedad civil. El golpe más duro para Uribe en este ámbito fue el descrédito y humillación frente al electorado, pues fue evidente la incapacidad del Estado de cumplir con su función de velar y atender las necesidades de la población.

Con respecto a las estrategias militares de las FARC, éstas responden a una herramienta de protección contra los ataques del Estado. Waltz indica que, las capacidades militares de un actor son primordiales para asegurar la seguridad y supervivencia de los actores por cuanto representan una fortaleza

⁴¹ Con respecto a la legitimidad que requieren las FARC para convertirse en la cabeza política del país, la guerrilla busca en un inicio legitimidad secundaria, que según Knoepfel, Larrue, Varone et Hinojosa (2007: 22,23) se refiere al respaldo y aprecio que los diferentes grupos sociales le otorgan a un actor. Por otro lado, una vez conseguido el apoyo y respaldo popular, las FARC se legitimarían mediante procesos democráticos como votaciones y la participación directa del pueblo, es decir, legitimidad primaria (Knoepfel et al, 2007: 22,23).

combativa frente un rival. Por lo mismo, la guerrilla se constituyó como una organización armada que se asemeja a un ejército, y que a través de su estructura jerarquizada estableció tácticas de combate y colocación estratégica de recursos bélicos y humanos a lo largo del país. Estos elementos no solo le garantizaron a las FARC fortaleza frente al gobierno y otros grupos opositores, sino que le permitieron expandirse y consolidarse en toda la nación. Por otro lado, las FARC establecieron estrategias económicas las cuales se dispusieron para otorgarles la capacidad adquisitiva necesaria para sostener a la estructura. Estas estrategias se basan en el perfeccionamiento de la cadena de producción y comercialización de drogas y minerales; en el tráfico de mercancía; y en el cobro de dinero y tributos por extorsiones y actos coercitivos contra la población. Las actividades ilegales de comercio de las FARC representan el motor de la guerrilla y un elemento indispensable para su supervivencia, ya que a partir de estas pueden desarrollarse las estrategias políticas y militares del grupo armado.

A pesar de que el fortalecimiento de las actividades ilegales de las FARC resultó beneficioso para la organización, estas generan escenarios de violencia y riesgo para la población, así como el crecimiento de la economía informal a partir de la creación de redes de lavado de activos y contrabando. Tales escenarios contribuyeron para que Colombia se presente como un destino poco atractivo y rentable para la ejecución de actividades productivas nacionales y extranjeras, y por ende sufra una ralentización económica. En el periodo de estudio puede evidenciarse cómo este estancamiento inicia en el 2002 y perdura hasta el 2006. Asimismo, las FARC captaron la mano de obra productiva del país (o la sometieron) a la realización de sus ilícitos, lo que generó la desatención del agro y la subutilización de las zonas productivas de Colombia, pero incrementando a su favor el cultivo de coca y la extracción de minerales. Con respecto a la coca, el grupo insidió en el posicionamiento del país como su principal productor a nivel mundial, lo que demuestra la injerencia de la guerrilla en los asuntos macroeconómicos de la nación a causa de los flujos de capital que ingresan a Colombia producto de esta actividad, así como en la microeconomía y desarrollo agrario de las zonas cocaleras colombianas.

A partir de este punto se evidencia cómo las FARC dejaron de ser únicamente una amenaza política y militar, sino que se convirtieron en un actor con las herramientas y el alcance necesario para desestabilizar económica y

socialmente a todo un país. La guerrilla robusteció su estructura económica, lo cual le otorgó la capacidad de convertirse en un actor multinacional y expandir su red de negocios a lo largo del mundo, hecho que le garantizó presencia internacional y la creación de alianzas estratégicas que le ayudarían además en asuntos político-militares.

Aunque las estrategias de las FARC resultaron efectivas y la consolidación de su poder innegable, se ha determinado que el punto débil de la organización recae en la interdependencia existente entre sus actividades y con los diferentes actores que participan en ellas. En primer lugar, las tácticas políticas, militares y económicas de las FARC están altamente conectadas y son dependientes, pues sin el dinero para mantener la estructura, ésta no existiría y sin su capacidad humana, las FARC no podrían luchar contra el Estado ni expandirse territorialmente. Este hecho vulnera a la organización ya que si por ejemplo, sus capacidades económicas fallan, lo harán progresivamente las militares y políticas. Por ende, el poder político, económico y militar de las FARC está directamente relacionado y es proporcional al adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos específicos de cada ámbito. Con respecto a la interdependencia entre las FARC y otros actores, debe reconocerse que las estrategias de la guerrilla no habrían sido posibles sin sus relaciones con la población civil, organizaciones delictivas y aliados comerciales y políticos puesto que gracias ellos las FARC fueron capaces de crear alianzas que les favorecieron y les permitieron realizar sus actividades.

A pesar de los riesgos inherentes que las relaciones de interdependencia representan para la organización, estas fueron necesarias para alcanzar sus logros individuales y comunes con otros actores; además, como menciona Waltz (1979:154), *“el costo de romper la interdependencia sería muy alto”* puesto que cada actor en dicha relación le proporciona al otro un bien o servicio indispensable para su desarrollo. Al analizar la relación de interdependencia de la organización con la sociedad civil, puede asegurarse, que ni las FARC se hubieran consolidado a nivel nacional, ni la sociedad civil (especialmente rural) hubiera satisfecho sus necesidades ni logrado un mínimo de estabilidad y seguridad sin la protección de la guerrilla; del mismo modo, sin las relaciones de interdependencia con los actores nacionales e internacionales con los que comercializan su mercancía, los guerrilleros carecerían de los recursos económicos necesarios para mantenerse.

A lo largo de los mandatos de Uribe la guerrilla se enfrentó a la disyuntiva de decidir, cuál de sus capacidades debía desarrollarse prioritariamente; es decir, evaluaron si su fortalecimiento militar y económico sería más beneficioso que su fortalecimiento político. Evidentemente a partir del análisis de las estrategias de las FARC, las militares y económicas prevalecen sobre el reconocimiento político de la guerrilla. La irrelevancia de sus objetivos políticos, se evidencia además en la intensificación y crecimiento de las actividades ilegales de comercio y de los ataques armados, los cuales representan la verdadera fuente de poder de la organización. Cabe mencionar que si bien la nueva categorización de las prioridades de las FARC le garantizó mayor poder relativo frente al Estado, esta ocasionó su debacle e incipiente influencia política, por lo mismo, la guerrilla se alejó de su objetivo fundacional.

Ante el escaso planteamiento de nuevas estrategias políticas y la potenciación de las militares y económicas; y basándose en el postulado neorrealista de que únicamente a partir de la garantía de la seguridad, un actor podrá enfocarse en la realización de otros objetivos, nace la duda de si la consolidación política de las FARC y la constitución de un Estado socialista continúa siendo el verdadero objetivo de su lucha. Bajo esta premisa se justifica la subordinación de las metas políticas de las FARC frente a las económicas y militares, ya que son estas últimas el medio para que la guerrilla garantice su supervivencia. Por lo tanto hasta que ésta no se haya consolidado y haya alcanzado su poder militar y económico máximo, no podrá alcanzar ningún otro. Sin embargo, el hecho de que las FARC hayan insistido permanentemente en su reconocimiento como actor político a pesar de haber relegado estas estrategias a las militares y económicas, podría tratarse de una táctica disuasiva en la que se presentan ante el mundo como una víctima perjudicada por el régimen y que no descansa en su lucha a pesar de las negativas del gobierno.

A causa del alcance de las estrategias mencionadas, las FARC se constituyeron en una amenaza para la seguridad del gobierno de Uribe, ante lo cual, el mandatario estableció la doctrina de la Seguridad Democrática como el medio para eliminarla y responder a su creciente poder. Esta doctrina se efectivizaría a través de la implantación de la PSD, el Plan Patriota, la PCSD y el Plan Consolidación, cuyo objetivo fue brindarle seguridad a la ciudadanía y recuperar y consolidar el poder nacional. Las políticas de seguridad y los

planes de desmantelamiento responden principalmente a estrategias militares y al desarme de la economía ilegal de la guerrilla, ofensivas que están directamente relacionadas al tipo de amenaza que ésta representa. Se deduce que el grupo no constituye una amenaza política para el Estado, ya que no goza del apoyo popular de la mayoría de la población y porque no está reconocido políticamente; por ende, no podrían modificar (legalmente) la estructura establecida por el régimen. No obstante, las FARC si representan una amenaza militar y económica para el gobierno debido a su fortalecimiento militar y a la proliferación de sus actividades ilegales, a través de las cuales la guerrilla ha sido capaz de debilitar al Estado y vulnerar su seguridad. El poder económico y militar representa los pilares de la organización; consecuentemente las estrategias de Uribe se establecieron para atacar de manera específica a esos aspectos ya que el gobierno comprendió que esa sería la manera más eficiente de recobrar su poder relativo y eliminar el de la guerrilla.

A partir de la ejecución de la PSD y Plan Patriota en el primer periodo, los resultados gubernamentales y el debilitamiento de las FARC fueron evidentes. La efectividad de las estrategias militares del gobierno se fundamentó en que al atacar enérgicamente a la guerrilla, ésta perdió territorio, y por ende el poder sobre la población y la libertad para ejecutar sus actividades ilegales de comercio; asimismo, a causa de las bajas, las FARC perdieron sus capacidades humanas, lo que restringió su capacidad combativa y de defensa, y del mismo modo redujo su mano de obra. En consecuencia, al carecer del territorio necesario y del capital humano para el desarrollo de sus ilícitos, la producción y comercialización de estupefacientes, minerales y armas, así como los tributos provenientes de actos coercitivos se disminuyeron, lo que significó el debilitamiento de la estructura fariana.

Para el desarrollo de sus estrategias el gobierno recurrió a la ayuda económica y militar de actores internacionales, principalmente de Estados Unidos, para quien la idea de la proliferación de grupos subversivos como las FARC ponía en riesgo no solo la seguridad de Colombia sino la suya. Con su ayuda y las alianzas políticas, económicas y militares forjadas entre ambos, Uribe estuvo en capacidad de debilitar a la organización, sin embargo el costo de asociación con Estados Unidos resultó en una dependencia con ese país y además le restó autonomía con respecto a las decisiones económicas y

militares de la lucha armada. Del mismo modo el gobierno recibió ayuda económica de la Unión Europea, no obstante esta se enfocó en la resolución estructural del conflicto a través del trabajo conjunto con la sociedad civil afectada y las dependencias gubernamentales encargadas. Sin embargo, a pesar de que con los resultados positivos que se generaron se demostró la capacidad y alcance de las políticas de cooperación pacíficas, exaltándose los métodos no coercitivos pero eficaces del poder blando, este enfoque no fue adecuado para Uribe pues no aportó a los planes de su lucha militar.

Los logros y la efectividad de las políticas del Presidente se reflejan principalmente en el crecimiento económico del país y en el debilitamiento económico-militar de las FARC, variables que están directamente relacionadas. En efecto, a partir del incremento del gasto en seguridad, y la creciente presencia de efectivos de la Fuerza Pública a nivel nacional, así como el aumento de ataques militares por parte del Estado y la profesionalización de su personal, las FARC perdieron la libertad para ejercer control en sus zonas de influencia y para desarrollar sus actividades ilegales de comercio, lo que se traduce en el debilitamiento económico-militar de la guerrilla. De esta manera, tanto los ataques, combates e incluso el área de influencia de las FARC así como sus zonas cocaleras disminuyeron rápida y progresivamente durante el primer mandato del gobernante.

No obstante, a pesar de que las estrategias del mandatario repercutieron positivamente en la economía del país, y debilitaron a las FARC, estas resultaron parcialmente exitosas debido a que no lograron su erradicación y desarme completo. Esto se torna en una desventaja para el gobierno pues le permitieron a las FARC recuperarse. El re empoderamiento de la guerrilla se tradujo en el Plan Renacer, con el cual a partir del 2008, las FARC maximizaron sus capacidades para recobrar su fuerza combativa hasta el 2010. En su realización, la organización ejecutó nuevamente acciones armadas y combates contra la Fuerza Pública, y aunque esta cifra no se disparó, si recobró los niveles de intensidad que se habían reducido a lo largo del primer mandato. Sin embargo, la verdadera recuperación de las FARC se generó a partir del cambio en su estrategia bélica, pues si bien continuaron con sus tácticas militares tradicionales, la organización implementó el uso de minas y francotiradores como medio para utilizar eficientemente y proteger su (reducido) capital humano.

La respuesta a la interrogante de por qué las FARC recuperaron su fuerza a pesar del creciente gasto en seguridad y el permanente incremento de los efectivos de la Fuerza Pública tiene que ver, por parte de la organización, en un cambio de estrategia, con la que demostraron adaptabilidad y capacidad de administrar sus recursos adecuadamente. Por parte del gobierno, se presume que el éxito de la guerrilla radica en que el primero no previó el cambio estratégico de las FARC, se enfocó en acabar con los cabecillas de la organización y en el rescate de rehenes, más no en atacar los puntos clave que en un inicio debilitaron al grupo ilegal. Del mismo modo se considera decisoria en la recuperación de las FARC, la disminución del apoyo económico de Bush para actividades militares; en efecto, este monto se redujo en 35% a partir del 2008. Con la puesta en práctica del Plan Renacer (2008) y el refortalecimiento de la guerrilla, se deduce entonces que la economía colombiana está directamente ligada con la capacidad bélica y económica de las FARC. En efecto, a partir del 2008 el crecimiento económico de Colombia sufre una disminución abismal de 7.5% en 2007 a 2.5% en 2008 y 0.80% en 2009.

De tal manera, se cuestiona la efectividad real de la doctrina de la Seguridad Democrática y las estrategias militares de Uribe, pues evidentemente, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales y los perjuicios a los que se expuso a los colombianos, el mandatario no logró su objetivo de erradicar a la guerrilla. Tal aseveración refleja el fallo del gobierno de otorgarle seguridad al pueblo y garantizar la supervivencia del régimen. Asimismo al no tener resultados definitivos, con los ataques militares contra la guerrilla y la intensificación de la lucha armada entre estos actores, el gobierno vulneró en vano la seguridad de la población e incluso se convirtió en una amenaza para la seguridad y soberanía de otros regímenes extranjeros. De igual forma, al no haber sido capaz de frenar de raíz el poder de las FARC, es decir garantizar su propia seguridad, el gobierno tampoco pudo cumplir con otro tipo de objetivos sociales, políticos y económicos, ni para su beneficio, y peor aún para el bien del electorado. El gobierno de Uribe se estancó en una lucha armada contra un enemigo más poderoso, a quien no pudo atacar de manera exclusiva pues además el mandatario debía hacerse cargo de otros asuntos igualmente vitales para la población.

A pesar de que con la intensificación de la lucha armada y el incremento del gasto de defensa, el gobierno sometió a los ciudadanos a escenarios

violentos y se alejó de la inversión y del desarrollo social, estos costos económico-sociales se catalogan como necesarios para garantizar la supervivencia del régimen y del electorado a largo plazo. Con respecto al gasto militar, este fue necesario para la profesionalización de las capacidades de la Fuerza Pública y que estas superen a las de las FARC; asimismo, aunque el engrandecimiento de la lucha armada fue catastrófico para el electorado, sustentado en el neorrealismo, este se considera imprescindible para la consolidación del poder político, económico social y militar del gobierno, la garantía de paz en Colombia y la eliminación permanente de las FARC. De este modo, el Estado cumpliría con su responsabilidad de otorgarle seguridad y protección al pueblo y a partir de la estabilización del orden en el país, éste sería capaz de sustentar otro tipo de necesidades de la población y contribuir para su desarrollo. No obstante, si bien las estrategias militares resultarían positivas para toda la nación a largo plazo, no puede desconocerse que tanto para la población así como para otros actores nacionales e internacionales involucrados en el conflicto armado, una salida sería la mejor solución.

Como se ha aclarado, las estrategias del gobierno responden a objetivos específicos de desarme, por lo que un acuerdo de paz o incluso un desarme voluntario no serían efectivos ni reales, pues no conseguirían el debilitamiento del grupo. En primer lugar, una solución pacífica no funcionaría porque no mitigaría la fuerza de la estructura fariana, porque mientras que para un gobierno legítimo, democrático y jerárquico la paz con las FARC sería sinónimo de legalidad y cumplimiento de normas que respeten los derechos humanos del electorado, para la organización la paz y la legalidad a la que estarían sujetos representaría su ruina militar y económica, pues sus principales actividades económicas son ilícitas. Con respecto a un desarme voluntario, esta opción se considera ilusoria, ya que sin armas la seguridad de las FARC se vulneraría y no contarían con los medios para atemorizar a la población, al Estado y para realizar sus actividades militares y de comercio. Por tal motivo, una solución pacífica tampoco es viable para la guerrilla, incluso si les garantiza su reconocimiento político, pues estas no correrían el riesgo de abandonar permanentemente el motor de su desarrollo y otorgarle al gobierno el poder militar y territorial que han afianzado. Del mismo modo, como indica Fellner (citado en Waltz, 1979: 156,157) *“no es recomendable desarmarse ante el rival”* ya que *“siempre existe la potencialidad de una renovación de hostilidades”*. De esta frase y bajo la premisa de la supervivencia, puede inferirse el por qué las soluciones

pacíficas no son seguras ni rentables ni para las FARC ni para el gobierno, pues a pesar de las supuestas intenciones de paz de los actores, no existe una certeza permanente de las mismas.

Basándose en el postulado neorrealista que establece que la existencia y la interrelación de los actores dentro de un sistema influyen sus acciones y resultados y los de otros ¿Sería el gobierno de Uribe el culpable de perpetuar el conflicto armado con las FARC por no haber satisfecho los deseos de éste actor a través de una solución pacífica que garantice sus derechos políticos como ciudadanos colombianos y por haber obligado a la organización a defenderse militarmente a causa del planteamiento del Plan Patriota? En respuesta a esta pregunta, se considera que respaldadas bajo el neorrealismo, las medidas político-militares contra las FARC fueron necesarias y están justificadas a pesar de los daños colaterales que se causaron a la población, ya que jamás en la historia colombiana se debilitó de tal manera a la guerrilla; sin embargo el gobierno debió cumplir no solo con su cometido de salvaguardar a las víctimas del conflicto sino a las FARC como parte de la población colombiana y analizar las causas estructurales del nacimiento del conflicto armado y de la insatisfacción de este actor con el Estado.

VII. CONCLUSIONES

La hipótesis planteada para ésta investigación: las FARC, como uno de los actores más relevantes del conflicto armado colombiano, utilizaron tácticas políticas y militares para fortalecer su presencia en esos ámbitos; lo cual, a la par con su incursión en actividades ilegales de comercio, repercutiría en la economía colombiana; en este escenario, las políticas de seguridad y desmantelamiento aplicadas en el gobierno de Álvaro Uribe servirían para mermar el poder de las FARC en los ejes político, militar y económico, se cumple en su totalidad; los siguientes argumentos respaldan tal aseveración:

- La desatención, el desconocimiento y la incapacidad gubernamental de atender los requerimientos y necesidades de la población; junto con el establecimiento de doctrinas políticas y regímenes económicos impuestos por los grupos de poder de un sistema doméstico, se traducen en el descontento e insatisfacción del electorado con la gestión gubernamental, así como con los principios ordenadores que sostienen a la estructura interna del país. Tales principios simbolizan represión y una fuerza limitante que impide el desarrollo de las capacidades relativas de los actores no Estatales. Consecuentemente se originan levantamientos anárquicos y el nacimiento de grupos “rebeldes” como las FARC que buscan el dominio de los medios de control para establecer un nuevo orden. Se deduce que el móvil de las FARC para consolidarse como la unidad domestica principal responde a que éstas aseguran que bajo su estructura y disposiciones, podrán ejercer una mejor labor que la del gobierno y cumplir a cabalidad con tales responsabilidades.
- El deseo de supervivencia y búsqueda de mayor poder relativo frente al gobierno para lograr su consolidación, encaminaron a las FARC al desarrollo de estrategias políticas, militares y económicas dentro y fuera del país; a través de las cuales, la organización se fortaleció y se consolidó como el grupo guerrillero de mayor trascendencia y peligro nacional e internacionalmente. Se reconoce que tales actividades representan el combustible, la estabilidad y el crecimiento de la guerrilla, por lo que únicamente con su ejecución, las FARC podrían garantizar su continuidad como grupo armado y lograr sus objetivos.

- Las estrategias políticas de las FARC resultaron insuficientes para transformar la estructura político-económica colombiana debido a que los mecanismos implementados por la guerrilla no ejercieron la influencia necesaria para que la insatisfacción popular contra el régimen de Uribe se traduzca en un levantamiento masivo contra el gobierno o en apoyo para la organización. En efecto, a pesar de que las estrategias políticas de las FARC responden a su objetivo fundacional y contribuyeron al fortalecimiento de sus relaciones con la población civil, se considera que este objetivo ha perdido relevancia y ya no es primordial. En primer lugar, a través de su legitimación política, las FARC estarían obligadas a alejarse de las actividades que le representan beneficios económicos y territoriales; consecuentemente, la sostenibilidad de su estructura, se violentaría y la guerrilla estaría lejos de consolidarse como un ejército que frene los ataques del Estado, que le garantice seguridad a su estructura y que afiance su poder a lo largo del país. Por otro lado la consecución de sus objetivos políticos no es prioritaria puesto que éstos no son indispensables para la supervivencia de la guerrilla ni se consideran imprescindibles para ejercer poder sobre la población; en efecto, las FARC pueden lograr apoyo y “respeto” mediante la utilización del miedo y actos coercitivos.
- La consolidación de las capacidades miliares y territoriales de las FARC simboliza el mayor ataque de la guerrilla contra el gobierno, pues esta es una manera cuantificable y tangible de evidenciar su poder sobre la soberanía colombiana y el electorado. El hecho que la organización haya ejercido y practicado abiertamente su autoridad y el uso privado de la fuerza, le restó potestad y credibilidad al régimen de Uribe pues evidenció su debilidad frente al poder de la guerrilla. Igualmente la consolidación militar de las FARC representa un golpe psicológico para la población civil a causa del miedo que la profesionalización militar del grupo ilegal infunde en ellos.
- Las actividades ilegales de comercio de las FARC representaron el medio que la organización requería para consolidar sus capacidades militares, territoriales, tecnológicas y económicas; elementos indispensables para garantizar su sostenibilidad, seguridad y generar

un cambio estructural en el país. Gracias a su consolidación económica, las FARC lograron sobrevivir, contar con los recursos para combatir al gobierno y al mismo tiempo prosperar a pesar de la incesante lucha militar que el régimen instauró en su contra. Sin embargo a las actividades ilegales de comercio de las FARC lesionaron al pueblo colombiano en materia socio-económica, pues afectaron al desarrollo productivo de la nación a causa de la subutilización de mano de obra, empresas y tierras productivas; del mismo modo la guerrilla proliferó la economía informal direccionada a actividades ilegales de tráfico de mercancía.

- Se deduce que las relaciones de interdependencia entre la guerrilla y otros actores nacionales e internacionales responden a la lógica neorrealista del ascenso del interés común, cooperación y maximización de recursos entre unidades; pero que además representan el talón de Aquiles de las FARC, así como la piedra angular de su éxito. Esto se debe a que aunque estas alianzas juegan un rol determinante en la consolidación del poder y de su red económica, militar y política a nivel global; constituyen al mismo tiempo una desventaja pues le restan autosuficiencia a la organización.
- El éxito de las FARC en Colombia se refleja en primer lugar en el creciente fortalecimiento de su poder relativo frente al gobierno y frente a la población, en su consolidación como una amenaza latente a la seguridad colombiana e internacional y además en su alcance y capacidad de influir en los asuntos políticos, económicos y sociales del país a tal punto de convertirse su erradicación en un asunto prioritario para el régimen. Por lo que, el nacimiento y fortalecimiento de un actor contrario al régimen, no reconocido, cuyas capacidades militares exceden a las del Estado, y que progresivamente ha incrementado su poder y presencia en territorio nacional, evidencian la fragilidad del orden jerárquico de la República colombiana así como el resquebrajamiento de su estructura y la autoridad gubernamental.
- Los logros políticos, militares y económicos de las FARC se alcanzaron también gracias a que la guerrilla es ajena e irrespeta las normativas nacionales e internacionales que penalizan la proliferación de actividades ilegales de comercio así como la utilización de recursos

bélicos. Al desconocer la autoridad del gobierno y la de otros organismos internacionales, las leyes establecidas por tales actores carecen de validez para la organización, y por tal motivo, las FARC pueden potencializar la lucha militar e incrementar su capital ilegalmente. Además, al menos de que sean juzgadas y asuman la responsabilidad de sus acciones, no sufrirán ningún tipo de repercusiones legales, más que las que deterioran su reputación.

- La permanencia y trascendencia de las FARC como un actor no reconocido por el régimen Uribista, la capacidad de la guerrilla de desestabilizar a la nación y convertirse en un peligro interno y externo, así como la proliferación de su ideología y actividades ilegales internacionalmente, manifiestan la importancia del reconocimiento de las FARC como el actor principal del conflicto armado y uno importante de la vida política, económica y social colombiana; enfatizándose entonces, como sugiere la escuela neorrealista, la relevancia de la participación de actores no reconocidos por los grupos de poder en la escena nacional e internacional.
- A partir de su fortalecimiento y a causa de los efectos nocivos en materia política, económica y social que las FARC tuvieron en el país, así como la amenaza que la guerrilla representa para la supervivencia del régimen, su eliminación se convierte en primordial para el gobierno de Uribe, por lo cual el Presidente implementa las políticas de seguridad y ataques militares de desmantelamiento. La erradicación de las FARC constituye no solo una garantía a la seguridad del Estado y el electorado, sino que además le garantizaría al país la estabilidad para desarrollar las capacidades relativas (económicas, políticas y territoriales) necesarias y de tal manera cumplir con sus planes políticos, sociales y económicos que se subordinaron ante la necesidad de acabar con las FARC.
- A pesar de que con las políticas y ataques de desmantelamiento implementados por Uribe a lo largo de sus mandatos no se eliminó a las FARC por completo, estos planes lograron mermar el poder de la guerrilla en materia política, militar y económica, resultando en el golpe más duro para el grupo en los últimos veinte años. El éxito de las estrategias de Uribe se resume en éstas se planificaron de manera

efectiva para combatir al tipo de amenaza que representaban las FARC: económica y militar. En efecto, las estrategias se direccionaron específicamente para frenar el crecimiento económico y expansión territorial de la organización mediante el debilitamiento de su estructura, de sus relaciones de interdependencia, la disminución de su fuerza humana y bélica y la consolidación del poder Estatal en las zonas de influencia de las FARC.

- EL hecho que el gobierno colombiano no haya sido capaz de enfrentar por sus propios medios (capacidad económica, humana, inteligencia y recursos militares) a la guerrilla y haya tenido que recurrir y someterse a disposiciones extranjeras para cumplir con su cometido, reflejan la debilidad del Estado y de la Fuerza Pública frente a las FARC y su vulnerabilidad en la escena internacional. El último punto se refleja en la magnificación del poder económico y político que Estados Unidos logró ejercer en Colombia, el cual colaboró con el deterioro de las relaciones bilaterales entre la nación y los otros países de la región.
- Gracias al golpe económico y militar que sufrió la guerrilla se restableció en cierta medida la confianza y estabilidad política y económica en el país, y también la mejora de los sectores económicos y productivos perjudicados, lo que se tradujo en el incremento de la productividad e inversión nacional y extranjera, y evidentemente en crecimiento económico para la nación. Por lo tanto, a pesar de que se reconoce que pudo haber factores político-económicos nacionales e internacionales que influyeron en el crecimiento económico del país en el periodo 2002-2010, se considera que la relación entre el debilitamiento bélico y económico de la guerrilla con el crecimiento y estabilización económica y productiva de Colombia es directamente proporcional.
- A pesar de los efectos negativos que las estrategias y planes de poder duro, como medios para la resolución de un conflicto acarrearón a los actores involucrados directa e indirectamente en la pugna, las estrategias militares de Uribe fueron adecuadas y respondieron eficientemente a los intereses del gobierno en el contexto del conflicto armado por cuanto el régimen necesitaba debilitar la fuerza combativa y económica de la guerrilla y recuperar su poder en el menor tiempo.

En efecto, a través de mecanismos de poder duro, las posibilidades de desarme de un rival aumentan así como los resultados positivos de manera más eficiente con relación al tiempo. Por tal motivo, la no utilización de herramientas de poder blando con las FARC por parte del Estado es lógica, pues no representa una medida efectiva para la resolución del conflicto, ya que mediante su implementación no se lograrían debilitar las capacidades del enemigo, sino que por el contrario le darían el tiempo necesario para fortalecerse y además tener la posibilidad de rearmarse frente al gobierno.

- El fallo en las estrategias de Uribe se resume en que estas no fueron lo suficientemente fuertes para acabar de manera permanente con el poder de la guerrilla, por lo que le permitieron a la organización recuperarse y contraatacar. Se deduce que las principales limitaciones de gobierno para lograr su objetivo están relacionadas con la disminución del capital económico-militar proveniente de Estados Unidos, y con su propia incapacidad de incrementar los valores destinados a la ejecución de los ataques militares. Esto se debe a que los recursos financieros del gobierno no pueden destinarse exclusivamente para la guerra, pues existen otras dependencias y sectores que necesitan su atención. Por tanto, el hecho de que el Estado deba encargarse de otro tipo de responsabilidades le imposibilita consignar capital de manera prioritaria a la lucha armada. Asimismo, el gobierno no pudo intensificar su lucha contra la guerrilla debido a las restricciones que la normativa del sistema internacional ejercen contra el uso extensivo de mecanismos bélicos y en este caso contra otras herramientas para debilitar a las FARC, como la erradicación de coca con glifosato. Del mismo modo, se considera que Uribe bajó los niveles bélicos de su lucha a causa las repercusiones negativas que esta acarrió para la población en materia económico-social e igualmente para su imagen política frente al país y al mundo debido a las inexistentes soluciones pacíficas para el conflicto.
- Aunque las soluciones armadas son más favorables y efectivas en lo que respecta a la desestabilización y desarme de las FARC, son del mismo modo las más perjudiciales para la población y la consecución de la paz en Colombia. En primer lugar, al exhortar a una lucha armada

y provocar una respuesta militar por parte de la guerrilla, el gobierno expone al electorado a escenarios permanentes de violencia. Del mismo modo las herramientas militares, coartan las salidas pacíficas al conflicto y suprimen la posibilidad de un análisis estructural de las causas socio-políticas y económicas que ocasionaron la lucha y que llevaron a las FARC a la sublevación; por ende al desconocer tales causas el gobierno continuaría cometiendo los mismos errores y perpetuando el conflicto.

- La investigación explicativa resulta favorable por cuanto permite usar la evidencia existente para plantearla desde diferentes enfoques y obtener otro tipo de resultados o consecuencias que provengan de las mismas causas, lo que brinda al investigador la oportunidad de establecer nuevos planteamientos y diferentes temas de investigación. La utilización del método inductivo-deductivo es pertinente para esta investigación. En primer lugar, debido a que se trata de un proceso sistemático que direcciona al investigador a seguir de manera lógica una serie de pasos con los cuales se generan resultados contundentes, verificables y sustentados. Asimismo, la implementación del método representa una ventaja pues a partir de la información que se analiza y las aseveraciones resultantes de ese proceso, pueden plantearse nuevos o diferentes enfoques. Por último, el hecho de que el análisis de los elementos de la investigación se realice de manera particular, permite al investigador conocer a fondo la información específica y no descartar u omitir elementos considerados como irrelevantes de ser tratados de manera general.
- La visión neorrealista de Waltz y Gilpin constituye una teoría adecuada para analizar el conflicto armado entre el gobierno y las FARC ya que al considerar relevante el estudio de ambos actores como unidades políticas, militares y económicas, pudieron determinarse las causas y consecuencias que la participación individual e interacción de éstos tuvo dentro y fuera del país. En efecto, aunque el neorrealismo adopta una postura materialista al establecer al poder y a la primacía de un actor sobre el otro, como la piedra angular del conflicto, y a su planteamiento de la latente amenaza a la seguridad entre unidades, la escuela exhorta al uso de mecanismos de poder duro (económico,

militar) para garantizar la supervivencia. A lo largo de éste trabajo se ha evidenciado cómo los postulados neorrealistas se adaptan y justifican la realidad de la lucha armada colombiana pues sustentan teóricamente las acciones, relaciones, herramientas y respuestas de ambos actores permitiendo al investigador comprender íntegramente la dinámica real de antagonismo entre el Estado y las FARC para establecer juicios críticos.

VIII. RECOMENDACIONES

- Los líderes gubernamentales de Colombia deberían abstenerse de satanizar la imagen de la guerrilla y categorizar la relevancia de la participación de las FARC de acuerdo a sus intereses, y más bien garantizar los derechos humanos y civiles y solventar íntegramente las necesidades político-sociales de la organización a pesar de que se trate de un grupo contrario a su ideología. Para lograrlo se sugiere que el gobierno permita la participación abierta de las FARC en los asuntos políticos, económicos y sociales del país, y reconozca legítimamente la existencia e intervención de los militantes frente a la comunidad nacional e internacional. No se recomienda excluir a las FARC o ignorar sus acciones y necesidades pues esta negligencia gubernamental, lejos de ser una herramienta para la solución del conflicto, enaltece la lucha armada.
- Con el fin de corregir de manera estructural la dinámica negativa que se ha creado con la guerrilla y que las probabilidades del surgimiento y consolidación de grupos insurgentes decrezca, se considera que los agentes Estatales deben, analizar su responsabilidad en lo referente al nacimiento de grupos ilegales como las FARC, así como también las causas que incidieron en su proliferación. Se propone que tal análisis surja a través de la autocrítica de la gestión Estatal con referente a su trabajo con el electorado y con organizaciones disidentes; de tal manera podrían establecerse las falencias gubernamentales en materia política, económica y social, gracias a las cuales se plantearían soluciones para solventar los errores del régimen.
- Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y dependencia del Estado colombiano frente a actores internacionales (Estados Unidos) que gozan de mayor poder relativo, se sugiere que las soluciones que el gobierno establezca para erradicar a las FARC no excedan sus capacidades en materia económica, humana, logística, política y militar. De tal manera, el Estado gozaría de la autonomía necesaria para instaurar medidas que mitiguen el conflicto sin la necesidad de someterse a los regímenes extranjeros. La disminución de la dependencia del gobierno con otros actores se lograría gracias al

fortalecimiento y profesionalización de sus capacidades y las proyecciones reales del alcance de sus recursos.

- Es necesario que el enfoque bajo el cual se planteen las soluciones del gobierno para finalizar la lucha armada con las FARC no se base en la imposición forzosa de los lineamientos instaurados en sistemas extranjeros, sino que las medidas que éste proponga para darle una solución al conflicto se implanten tomando en cuenta el contexto político, social y económico, histórico y contemporáneo, tanto de Colombia como del conflicto con las FARC. En efecto, a partir del análisis de las necesidades de cada actor y las causas estructurales que proliferaron la lucha, el gobierno estará en capacidad de discernir y aplicar medidas que le pongan fin definitivo al conflicto.
- Considerando que las políticas de seguridad de Uribe generaron crítica, descontento y oposición en el país, es imprescindible que las medidas pacíficas o violentas, que fueran a ser implementadas por el gobierno se presenten ante el electorado previa su ejecución a través de una consulta nacional mediante la cual se le otorgue voz al electorado y éste tenga la capacidad de aceptar o vetar el plan Estatal para contrarrestar el poder de las FARC. El objetivo de esta consulta radica en que únicamente así el electorado podía avalar de manera legítima las decisiones del gobierno, y este último tendría la garantía de que las medidas que se tomarán se fundamentan en el apoyo de la población; es decir que no se instauran arbitrariamente y toman en cuenta las necesidades y opinión popular.
- La resolución definitiva al conflicto debería estar basada en soluciones permanentes a las causas estructurales que lo originaron. En efecto, no solo deberían considerarse como elementos importantes al cese al fuego con las FARC o la erradicación de sus actividades ilegales sino las necesidades de la guerrilla a través de un análisis profundo del conflicto y de sus actores, puesto que a pesar de que la paz es el primer paso para el bienestar en Colombia, esta no garantiza ni conformidad ni felicidad, mucho menos aun si no se han resuelto los verdaderos problemas que ocasionaron la guerra.

- Se considera imprescindible que los líderes colombianos endurezcan y le den continuidad las medidas dispuestas en la PSD y PCSD en lo referente a las actividades ilegales como el tráfico de drogas, mercancía, lavado de dinero y actos coercitivos en el país, pues como se estableció en ambas, dichos ilícitos representan una amenaza para la seguridad de la nación y para su desarrollo económico. De tal manera no solo se perjudicaría económica y militarmente a las FARC, sino que, al existir una relación entre el desarrollo productivo colombiano y el debilitamiento de la guerrilla, los agentes micro y macroeconómicos de la nación podrían alcanzar mejores niveles de productividad y por ende crecimiento económico. Una manera para endurecer estas medidas sería a través del incremento de operativos que desarticulen las redes de actividades ilícitas de comercio en el país, así como un cambio de raíz en el imaginario colombiano con respecto a las repercusiones negativas que la informalidad tiene en la economía.
- A pesar de que de acuerdo con el neorrealismo, una solución pacífica en el caso específico del gobierno de Uribe no sería práctica, únicamente a través de esta y mediante la colaboración verdadera de las FARC y su voluntad real de abandonar los actos ilícitos, ésta podría legitimarse como una organización política legal. Por lo tanto, la paz sería la única vía a través de la cual el grupo guerrillero alcanzaría su objetivo fundacional, pues podría participar como un movimiento político legal en la política colombiana y de tal manera contar con el poder necesario para influir en ella. En efecto, las FARC deberían replantear su estrategia para consolidarse como el hegemón de Colombia a través de la potencialización de sus tácticas sociales y la eliminación progresiva pero definitiva de sus actividades ilegales militares y de comercio. Se considera que en este caso la paz entre ambos actores pudo ser viable previo al planteamiento del Plan Patriota y cualquier tipo de ofensiva militar, pues con su ejecución, estos se convirtieron en mecanismos de ataque contra la supervivencia de las FARC y razonablemente la guerrilla debía protegerse de manera similar para no perecer.

- El gobierno debería alejarse de los mecanismos de defensa y ataques militares contra las FARC, y más bien, establecer mecanismos de poder blando para asegurar su seguridad y al del electorado. Para este cambio se proponen herramientas pacíficas como los programas de educación para la paz que nazcan desde las entidades Estatales, la participación de organizaciones mediadoras nacionales o internacionales, así como el incremento de los procesos de desmovilización y desarme de guerrilleros y su posterior inserción como agentes productivos en la sociedad, pues de esta manera no solo se mermaría el capital humano y capacidad productiva de la organización, sino que estos actores estarían en capacidad de contribuir y participar activamente en la vida política, económica y social del país y alejarse definitivamente de la lucha armada.
- El Estado debe incrementar los programas de ayuda y financiamiento para resarcir a las víctimas del conflicto y postconflicto. Se recomienda que el incremento de este rubro provenga de la disminución del gasto en actividades militares y de defensa y el acercamiento del gobierno a actores como la Unión Europea para alcanzar acuerdos que efectivicen programas de cooperación para el desarrollo.
- Se exhorta el desarrollo de futuras investigaciones que valiéndose de este trabajo permitan adentrarse en la búsqueda de información más amplia y reciente de la problemática “FARC-gobierno”; como por ejemplo, los cambios de las relaciones entre la guerrilla y el régimen colombiano desde la finalización del mandato de Uribe, el nacimiento del proceso de paz, los resultados del referéndum para firmar la paz con la guerrilla y posibles alternativas futuras para los actores. Para lo cual se recomienda realizar investigaciones exploratorias que complementen la dinámica causa-efecto de las investigaciones de tipo explicativo, y que además estén respaldadas por una investigación de campo y la utilización del método inductivo-deductivo, pero a través de la observación directa (investigación primaria). De este modo, mediante entrevistas, visitas e indagación desde el lugar de los hechos, el investigador podrá participar activamente en la nueva etapa del conflicto armado e involucrarse de

manera directa con el objeto de estudio para enriquecer al trabajo final con elementos vivenciales.

- Es recomendable analizar el conflicto armado colombiano a través de un enfoque constructivista que contraponga las ideas materialistas (poder y capacidades) del neorrealismo, a través del cual puedan encontrarse explicaciones sociológicas (ideas, normas, relaciones sociales) al comportamiento de las FARC y el Estado en el contexto de la lucha armada, así como en la construcción de la sociedad civil colombiana. Por otro lado se sugiere que la disputa a con las FARC no se analice solamente con teorías de las relaciones internacionales sino que se tomen en cuenta otras como la teoría de conflictos de Galtung o de prevención de conflictos y utilización de mecanismos de poder blando y negociación para comprender las causas, el desarrollo, el tipo y los efectos del conflicto y también para generar posibles soluciones a esta lucha armada. Finalmente se propone el desarrollo de nuevos temas que amplíen este trabajo como un análisis comparativo de los mecanismos de poder duro implementados en el gobierno de Uribe con los de otro régimen colombiano contemporáneo.

IX. LISTA DE REFERENCIAS

Libros

En físico

- Bagley, B., et Rosen, J. (2015). *Colombia's Political Economy and the Outside of the Twenty-First Century*. Maryland, Estados Unidos: Lexington Books
- Ballén, R. (2005). *La pequeña política de Uribe ¿Qué hacer con la Seguridad Democrática?*. Bogotá D.C., Colombia: Ediciones desde abajo.
- Gilpin, R. (1981). *War and Change in World Politics*. New York, Estados Unidos: Cambridge University Press
- Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy – Understanding the International Economic Order*. New Jersey, Estados Unidos: Princeton University Press
- Giraldo, F., Losada, R., et Muñoz, P. (2001). *Colombia: elecciones 2000*. Bogotá D. C., Colombia: Centro Editorial Javeriano.
- Kahhat, F. (2005). *El Poder y las Relaciones Internacionales: Ensayos Escogidos de Kenneth N. Waltz*. México, México, D.F: Centro de Investigación y Docencias Económicas
- Medina, J. et Uribe, G., (2002). *El orden de la guerra – Las FARC-EP entre la organización y la política*. Bogotá, Colombia: Centro Editorial Javeriano
- Osorio, M. (2012). *Primer mandato presidencial de Uribe Vélez – Personalismo y Carisma*. Quito, Ecuador: Corporación Editora Nacional
- Rocha, R. (2000). *La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico*. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores
- Trejos, L. (2015). *Un actor no Estatal en el escenario internacional: el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC-EP 1996-2010*. Barranquilla, Colombia: Editorial Universidad del Norte.
- Villamarín, L. (1996). *El Cártel de las FARC (I) – Finanzas del terrorismo comunista contra Colombia 1978-1996*. New York, Estados Unidos: Ediciones Luis Alberto Villamarín Pulido.
- Villamarín, L. (2013). *Narcoterrorismo – La guerra del Nuevo Siglo*. Bogotá, Colombia: Ediciones Luis Alberto Villamarín Pulido.
- Villamarín, L. (2014). *El Cártel de las FARC (II) – Finanzas del terrorismo comunista contra Colombia*. Bogotá, Colombia: Ediciones Luis Alberto Villamarín Pulido.
- Waltz, K. (1979). *Teoría de las Relaciones Internacionales*. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.

En la Web

- Arbizu, N. (2011). *Irlanda del Norte: Historia de un conflicto*. Recuperado de https://books.google.com.ec/books?id=aKqj0yfOBFEC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=PIRA+IRLANDA&source=bl&ots=Xc2zyYbiXB&sig=VqSRh_B0vvcs4QM6ilq3wsNotWU&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj-4NqCz9LLAhVEaA8KHU-UDRwQ6AEIVTAL#v=onepage&q=PIRA%20IRLANDA&f=false
- Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2014). *Guerrilla y Población Civil – Trayectoria de las FARC 1949-2013*. Recuperado de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf>
- Cragin, K., Hoffman, B. (2005). *Arms trafficking in Colombia*. Recuperado de http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1468.pdf
- Cragin, K., Chalk, P. Daly S., Jackson, B., (2007). *Sharing the Dragon's Teeth – Terrorist Groups and the Exchange of new Technologies*. Estados Unidos, Santa Mónica, CA, RAND Corporation http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG485.pdf
- Dunne, T., Kurki, M., Smith, S. (2007). *International Relations Theories- Discipline and Diversity*. Recuperado de <http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/StructuralRealism.pdf>
- Mackenzie, E. (2007). *Las FARC – El fracaso de un terrorismo*. Recuperado de <http://unoamerica.org/unoTest/upload/apps/LAS%20FARC%20EL%20FRACASO%20DE%20UN%20TERRORISMO%20-%20COMPLETO.pdf>
- Universidad de los Andes. (2014). *Costos Económicos y sociales del conflicto en Colombia ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?* Recuperado de economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/Costos_economicos_y_sociales.pdf
- Van Engellant, A., Rudolph, R. (2008). *From Terrorism to Politics*. Recuperado de <http://rageuniversity.org/PRISONESCAPE/ANTI-TERROR%20LAWS/From-Terrorist-to-Politics.pdf>
- Waltz. K. (1990). *Realist Trough and Neorealist Theory*. Recuperado de <http://classes.maxwell.syr.edu/PSC783/Waltz44.pdf>
- Waltz. K. (2000). *Structural Realism after the Cold War*. Recuperado de http://www.svt.ntnu.no/iss/Indra.de.Soyso/POL2003H05/waltz_structuralrealism.pdf

Disertaciones En la Web

- Ariza, D. (2014). *La zona de distensión del Caguán: análisis de los factores económicos, políticos y sociales a partir del concepto de Estado fallido*. (Pregrado, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá D.C., Colombia). Recuperado de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8347/1030560389-2014.pdf?sequence=12>
- Beltrán, J., Piñeros, A. (2013). *Sector agropecuario colombiano: su realidad económica y perspectiva*. Recuperado de <http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4629/BeltranJorge2013.pdf?sequence=1>
- Castellanos, S. (2013). *Análisis del reclutamiento forzado a menores de edad en Colombia, 2005-2010*. (Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá D.C., Colombia). Recuperado de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4397/1020735161-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Durán, I. (2011). *Conflicto armado y crecimiento económico en Colombia*. (Maestría Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia). Recuperado de [http://www.bdigital.unal.edu.co/3575/1/TesisIMD_\(PlantillaUnal\).pdf](http://www.bdigital.unal.edu.co/3575/1/TesisIMD_(PlantillaUnal).pdf)
- Giraldo, N. et Conde, A. (2011). *¿La Enfermedad Holandesa es una posibilidad en Colombia?*. (Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D.C., Colombia). Recuperado de <http://repository.unimilitar.edu.co:8080/bitstream/10654/3238/2/GiraldoSolanoNataliaAndrea2011.pdf>
- Gómez, J. (2015). *Oro ilegal, alternativa criminal*. (Pregrado Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá D.C., Colombia). Recuperado de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13655/1/Oro%20legal%2c%20Alternativa%20Criminal.pdf>
- López, P. (2010). *Análisis de la influencia de las FARC y ELN en los procesos electorales en el departamento de Arauca en el periodo comprendido entre 1998-2004*. (Postgrado Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá D.C., Colombia). Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis348.pdf>
- Rodríguez, J. (2010). *Opinión Pública en el régimen de Uribe Vélez: La televisión como medio de comunicación política*. (Posgrado Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia). Recuperado de <http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/7762/1/tesis447.pdf>
- Rosell, C. (2009). *El poder de la Palabra – Un análisis de 21 extractos del discurso presidencial colombiano con respecto a las FARC*. (Pregrado Universidad de Lund, Lund, Suecia). Recuperado de

<http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=1530015&fileId=1530024>

Torres, L. (2013). *Análisis de la priorización del gasto público social y su incidencia en las condiciones de vida de la población colombiana en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 –2010)*. (Pregrado Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá D.C., Colombia). Recuperado de <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/5078/1032428586-2013.pdf?sequence=15&isAllowed=y>

Veintimilla, L. (2011). *El acuerdo de cooperación para la defensa entre los Estados Unidos y Colombia (DCA) y la integración regional suramericana*. (Especialización en relaciones internacionales y seguridad en América Latina, Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador). Recuperado de <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3884/4/TFLACSO-2010LEV.pdf>

Publicaciones

En Físico

Castaneda, D. (2010). *The European Union in Colombia: Learning how to be a peace actor*. París, Francia: Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire.

Isaza, F. (2008). *Balance económico de la Administración de Uribe – Primer Periodo: 2002-2006 (Segunda Parte)*. Colombia

Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., et Hinojosa, M. (2007). *Hacia un modelo de análisis de políticas públicas operativo – Un enfoque basado en los actores, sus recursos y las instituciones*.

En la Web

Abad, S. (2013). *Las FARC apuestan por la minería ilegal*. Recuperado de <http://www.amazonia-andina.org/amazonia-activa/noticias/las-farc-apuestan-mineria-ilegal>

Acosta, M. (2012). *Ilegalidad y criminalidad en la minería: pescando en río revuelto*. Recuperado de <http://www.razonpublica.com/index.php/component/content/article?iid=2736:ilegalidad-y-criminalidad-en-la-mi>

Aguilera, M. (2012). *Las FARC: Auge y quiebre de su modelo de guerra*. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v26n77/v26n77a04.pdf>

Álvarez et Rattberg. (2008). *Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano*. Recuperado de

file:///C:/Users/narvapa/Downloads/_data_Revista_No_67_02_Analisis_1.pdf

- Apuleyo, P. (2013). *Plan Renacer y la Segunda Independencia*. Recuperado de <https://groups.google.com/forum/#!topic/todoporlapatria/Afkmtpw3pnE>
- Ardila, L. (2012). *Los “picapiedra” de las FARC en el mapa de la minería ilegal*. Recuperado de <http://lasillavacia.com/historia/los-picapiedra-de-las-farc-en-el-mapa-de-la-mineria-ilegal-36691>
- Arias, M., Camacho, A., Ibáñez A., Mejía, D., Rodríguez, C. (2014). *Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia. ¿Cómo construir un postconflicto sostenible?*. Recuperado de <https://egob.uniandes.edu.co/images/books/pdf/nota17.pdf>
- Artunduaga, E. (2013). *FARC y narcos cotizan en la bolsa y utilizan el sistema financiero*. Recuperado de <http://www.kienyke.com/kien-escribe/farc-y-narcos-cotizan-en-la-bolsa-y-utilizan-el-sistema-financiero/>
- Bargent, J. (2014). *Las Farc 1964 -2002: De una rebelión desordenada a una máquina militar*. Recuperado de <http://es.insightcrime.org/investigaciones/farc-de-rebelion-desordenada-a-maquina-militar?highlight=WyJmYXJjliwiZmFyYydzliwiJ2ZhcmMnliwiZmFyYyciXQ==>
- Bedoya, J. (2010). *Panorama de la inversión extranjera en Colombia*. Recuperado de <http://www.ens.org.co/apc-aa-files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/IED.pdf>
- Beittel, J. (2012). *Colombia: Background, U.S.Relations, and Congressional Interest*. Recuperado de <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32250.pdf>
- Cawley, M. (2014). Cawley, M. (2014). *Las FARC de Colombia sacan provecho de la minería ilegal de oro en Perú*. Recuperado de <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/farc-sacan-provecho-mineria-ilegal-oro-peru?highlight=WyJmYXJjliwiZmFyYydzliwiJ2ZhcmMnliwiZmFyYyciLCJtaW5lclx1MDBIZGEiXQ==>
- Cawley, M. (2014a). *FARC y BACRIM se dividen ganancias del oro en departamento de Colombia: Policía*. Recuperado de <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/farc-y-bacrim-se-dividen-ganancias-del-oro-en-departamento-de-colombia-policia?highlight=WyJmYXJjliwiZmFyYydzliwiJ2ZhcmMnliwiZmFyYyciLCJtaW5lclx1MDBIZGEiXQ==>
- Čapinská, B. (2013). *Winning the war on terror, losing the war on drugs? – U.S. policies in Colombia during George W. Bush’s Presidency*. Recuperado de <http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/article/viewFile/620/555>

- Clavijo, S. et Vera, A. (2010). *Los desafíos fiscales de Colombia (2010-2014)*. Recuperado de <http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-Fiscal0610.pdf>
- Clavijo, S., Vera, A. et Fadiño, A. (2012). *La desindustrialización en Colombia*. Recuperado de <http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-Desindustrializacion-12.pdf>
- Clavijo, S., Vera, A., et Vera, N. (2013). *Estructura Fiscal de Colombia y ajustes requeridos (2012-2020)*. Recuperado de <http://anif.co/sites/default/files/uploads/Libro%20Estructura%20fiscal%20de%20Colombia%20y%20ajustes%20requeridos.pdf>
- Colby, M. (2010). *Colombia's New Counterinsurgency Plan*. Recuperado de <https://www.stratfor.com/weekly/colombias-new-counterinsurgency-plan>
- Dube, O., et Naidu, S. (2010). *Bases, Bullets, and Ballots: The Effect of the U.S. Military Aid on Political Conflict in Colombia*. Recuperado de http://www.cgdev.org/files/1423498_file_Dube_Naidu_Military_Aid_FINA_L.pdf
- Echandía, C. (2011). *Situación Actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-2011)*. Recuperado de <http://archive.ideaspaz.org/images/Situacion%20FARC%20web.pdf>
- Garavito, A., Iregui, A., et Ramirez M. (2012). *Inversión Extranjera Directa En Colombia: Evolución Reciente y marco normativo*. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_713.pdf
- Gonzáles, F. (2004). *Conflicto violento en Colombia: Una perspectiva de largo plazo*. Recuperado de http://www.c-r.org/downloads/2_Conflicto%20violente%20en%20Colombia.pdf
- Gonzáles, L. (2013). *Impacto de la minería de hecho en Colombia. Estudios de caso: Quibdó, Istmina, Timbiquí, López de Micay, Guapi, El Charco y Santa Bárbara*. Recuperado de https://www.uis.edu.co/webUIS/es/catedraLowMaus/lowMauss13_1/terceraSesion/Impacto%20de%20la%20minería%20de%20hecho%20en%20Colombia.pdf
- Ibáñez, A. (2012). *Pobreza y conflicto: ¿Afecta el conflicto la pobreza?*. Recuperado de <http://focoeconomico.org/2012/04/24/pobreza-y-conflicto-afecta-el-conflicto-la-pobreza/>
- Kalmanovitz, S. (s/f). *Una década de pobre desarrollo agrícola: Colombia 200-2010*. Recuperado de <http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/archivos/CID-04-SKalmanovitz-Politica-agraria.pdf>
- Kalmanovitz, S. (s/f a). *El impacto económico del conflicto interno colombiano y un escenario de paz*. Recuperado de

<https://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/El+impacto+econ%C3%B3mico+del+conflicto+interno+colombiano+y+un+escenario+de+paz++Salom%C3%B3n+Kalmanovitz.pdf>

Ladino, W. (2012). *De la Dominación tradicional a la legal*. Recuperado de http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT16/GT16_LadinoOrjuela.pdf

Leibovich, J., Estrada, L. (2009). Competitividad en el sector agropecuario colombiano. Recuperado de <http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/informes/2008-2009/Agropecuario-%28agricultura%29.pdf>

León, J. (2012). *La Fuerza Militar con al que llegan las Farc a la mesa*. Recuperado de <http://lasillavacia.com/historia/la-fuerza-militar-con-la-que-llegan-las-farc-la-mesa-37103>

Llorente, M. (2011). *Situación Actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-2011)*. Recuperado de <http://archive.ideaspaz.org/images/Situacion%20FARC%20web.pdf>

López, M. (2007). *Colombia y Venezuela: Nuevas Tensiones – Cronología del canje que nunca se dio*. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/543/54302310.pdf>

Mantilla, (2012). *Economía y conflicto armado en Colombia: los efectos de la globalización en la transformación de la guerra*. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n55/n55a3.pdf>

Marín, Y., Gallego, J. Rueda, R. (2014). *Ineficiencia de la normativa penal, respecto de la minería ilegal*. Recuperado de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/1845/YULIANA_MARIN_GALLEGO.pdf?sequence=1

Martínez, L. (2013). *Los cambios en la estrategia militar de las FARC en la última década*. Recuperado de <http://www.pares.com.co/grupos-armados-ilegales/farc/los-cambios-en-la-estrategia-miliar-de-las-farc-en-la-ultima-decada/>

Massé, F., Camargo, J. (2012). *Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia –V Informe 2012*. Recuperado de <http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Mineria/Informe%20Actores%20armados%20ilegales%20y%20sector%20extractivo%20en%20Colombia.%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Mass%C3%A9.pdf>

McDermott, J. (2013). *Es inevitable la criminalización de algunos elementos de las FARC*. Recuperado de <http://es.insightcrime.org/investigaciones/inevitable-criminalizacion-de-elementos-de-las-farc?highlight=WyJmYXJjliwiZmFyYydzliwiJ2ZhcmMnliwiZmFyYyciXQ==>

- McDermott, J. (2013a). *Actividades criminales de las FARC y las ganancias de la guerrilla*. Recuperado de <http://es.insightcrime.org/investigaciones/actividades-criminales-farc-y-ganancias-de-la-guerrilla#ft22>
- McDermott, J. (2013b). *The FARC, the Peace Process and the Potential Criminalization of the Guerrillas*. Recuperado de http://www.globalinitiative.net/download/Govdev/south_america/Insight%20Crime%20-The%20FARC,%20the%20Peace%20Process%20and%20the%20Potential%20Criminalisation%20of%20the%20Guerrillas%20-%20May%202013.pdf
- Montero, D. (2012). *La fiebre por el oro le llevó a una nueva guerra al norte del cauca*. Recuperado de <http://lasillavacia.com/historia/la-fiebre-por-el-oro-le-llevo-una-nueva-guerra-al-norte-del-cauca-31273>
- Montero, D. (2012a). *De lo que viven las FARC en el secuestro*. Recuperado de <http://lasillavacia.com/historia/de-lo-que-viven-las-farc-sin-el-secuestro-31683>
- Oslender, U. (2010). *La búsqueda de un contra-espacio: ¿hacia territorialidades alternativas o cooptación por el poder dominante?*. Recuperado de <http://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/view/GEOP1010120095A/13431>
- Oppenheimer, A. (2011). *How terrorists acquire technology and training: lessons from the IRA*. Recuperado de <http://www.newsecuritylearning.com/index.php/feature/123-how-terrorists-acquire-technology-and-training-lessons-from-the-ira>
- Pécaut, D. (2008). *Las FARC: fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesión*. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v21n63/v21n63a02.pdf>
- Pérez, E. et Pérez M. (2002). *El sector rural en Colombia y su crisis actual*. Recuperado de www.javeriana.edu.co/ier/recursos_user/documentos/revista51/SCANNER/CDR%2048/art%EDculo002.pdf
- Perry, S. (2010). *La pobreza rural en Colombia*. Recuperado de www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1366386291DocumentoDiagnosticoColombia.pdf
- Perry, G. et Olivera, M. (2009). *El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local en Colombia*. Recuperado de <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/199/200906Elimpactodelpetr%C3%B3leoylaminer%C3%ADaversi%C3%B3nworkingpaperCAF-Ed.MauricioOlivera.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Quimbayo, A. (2009). *¿Quién está destruyendo el ambiente? Coca, fumigación, ganadería y palma africana en Colombia*. Recuperado de <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/372-iquiestestruyendo-el-ambiente-coca-fumigaciganadery-palma-africana-en-colombia.html>
- Ramirez, S. et Gratiús, S. (2011). *El conflicto colombiano y las Respuestas de la UE*. Recuperado de <http://www.ifp-ew.eu/pdf/2011111fPEWFRIDEConflictoColombianolaUE.pdf>
- Ramsey, G. (2012). *¿Qué va a Suceder con los Intereses Mineros de las FARC si las Conversaciones de Paz Resultan Exitosas?*. Recuperado de <http://es.insightcrime.org/analisis/que-va-a-suceder-con-los-intereses-mineros-de-las-farc-si-las-conversaciones-de-paz-resultan-exitosas>
- Reina, L., Alejo, D., et Devia, N. (2015). *Efectos regionales de la enfermedad holandesa – caso de estudio: Colombia entre 2000-2013*. Recuperado de <http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/article/view/13444/2611>
- Roa, L. (2010). *El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental*. Recuperado de http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/vol5_3_1/11Elavado.pdf
- Román, D. (2008). *Las Farc después de Marulanda: ¿Extensión estratégica o transformación organizativa?*. Recuperado de <http://biblioteca.ribei.org/1425/1/ARI-139-2008-E.pdf>
- Ronderos, M. (2011). *La fiebre minera se apoderó de Colombia*. Recuperado de <http://ciperchile.cl/2011/09/05/la-fiebre-minera-se-apodero-de-colombia/>
- Rubiano, S. (2012). *La Regulación ambiental y social de la minería en Colombia: comentarios al proyecto de ley de reforma al código minas*. Recuperado de <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09382.pdf>
- Rudas, G. (2011). *Contexto del Sistema Nacional Ambiental y la minería – Uso del suelo, recursos tributarios y capacidad de regulación*. Recuperado de <http://www.nsi-ins.ca/wp-content/uploads/2010/07/Annex-7-rudas-lleras.pdf>
- Salazar, H. (2011). *Colombia decide si reconoce la existencia de un conflicto armado*. Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110511_colombia_impliaciones_reconocimiento_conflicto_armado_jrg.shtml

- Sarmiento, L. (2010). *Uribe 2002-2010, hecatombe social*. Recuperado de <http://www.nodo50.org/cepid/spip.php?article848>
- Saumeth, E. (2011). *Historia de la Guerrilla en Colombia*. Recuperado de <http://ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/HGC.pdf>
- Stirk, C. (2013). *Resources for humanitarian response and poverty reduction*. Recuperado de <http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2013/04/Colombia-final-draft.pdf>
- Steiner, R., Corchuelo, A. (1999). *Repercusiones Económicas e Institucionales del Narcotráfico en Colombia*. Recuperado de <http://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Repercusiones%20econ%C3%B3micas%20e%20institucionales%20del%20narcotr%C3%A1fico%20-%20Roberto%20Steiner%20y%20Alejandra%20Corchuelo.pdf>
- Torrijos, V. (2004). *El poder y la Fuerza – Apuntes doctrinales sobre la naturaleza revolucionaria de las FARC*. Recuperado de http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/12-2/poder_y_fuerza.pdf
- Uribe, A. (s/f). *Seguridad democrática*. Recuperado de <http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/seguridad-democratica>
- Urrutia, N., Ortega, M., Andrade, G. (2009). *Rastreo de Armas – Perspectivas sobre control, tráfico, y uso de armas ilegales en Colombia*. Recuperado de http://archive.ideaspaz.org/images/rastreo_de_armas_espanol_web.pdf
- Villamarín, L. (2012). *Colombia's failure to tackle FARC's Strategic Plan allows rebels' politics to flourish*. Recuperado de <http://colombiareports.com/colombias-failure-to-tackle-farcs-strategic-plan-allows-its-political-agenda-to-flourish/>
- Yagoub, M. (2015). *Money Laundering 2% of Colombia GDP*. Recuperado de <http://www.insightcrime.org/news-briefs/money-laundering-two-percent-of-colombia-gdp>

Artículos de Periódicos

En la web

- Báez, C., Puentes, J. et Quintero, R. (2015, Junio 28). Colombia Refugiada. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/refugiados-migracion-y-desplazamiento-de-colombianos/15503358/1>
- Laverde, J. (2014, Octubre 8). El inventario de los negocios de las FARC. *El Espectador*. Recuperado de <http://www.elspectador.com/noticias/politica/el-inventario-de-negocios-de-farc-articulo-521116>

- Macías, J. (2014, Noviembre 13). Ingresos anuales de las FARC san para reparar más de 57 mil víctimas. *El Colombiano* Recuperado de <http://www.elcolombiano.com/ingresos-anuales-de-farc-dan-para-reparar-mas-de-57-mil-victimas-CX527352>
- Matta, N. (2014, Julio 5). Con \$3,6 billones las Farc sostienen sus estructuras. *El Colombiano*. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/con-36_billones_las_farc_sostienen_sus_estructuras-NGEC_301369
- Pinedo, P. (2007, Abril 3). Tráfico de armas para las Farc viene desde la era Montesinos. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2436485>
- Redacción Justicia. (2011, Octubre 31). El DAS se acabó el día que cumplió 58 años. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10674948>

Artículos de Revistas

En la Web

- Aguirre, K. (2011, Noviembre). El tráfico de armas en Colombia: una revisión desde los orígenes a los destinos. *Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, 10. Recuperado de <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3443/3/RFLACSO-03-U10-Aguirre.pdf>
- Allard, R. (2004, Julio- Septiembre). Globalización, rol del Estado y relaciones internacionales en el realismo de Robert Gilpin. *Revista Estudios Internacionales*, Vol. 37, No. 146. Recuperado de <http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/14536/14852>
- Ávila, A. (2008, Diciembre). Farc: dinámica reciente de la guerra. *Revista Arcanos*, 14. Recuperado de http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_14.pdf
- Ávila, A. (2010, Abril). La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC. *Revista Arcanos*, 15. Recuperado de http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_15.pdf
- Ávila, A. (2011, Abril). De la guerra de “Jojoy” a la guerra de “Cano”. *Revista Arcanos*, 16. Recuperado de http://www.arcoiris.com.com/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_16.PDF
- Barreto, M. (2010, Enero - Junio). El rol de la Unión Europea en la resolución del conflicto armado en Colombia: un análisis desde el terreno. *Revista Aldea Mundo*, 29. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/543/54321064003.pdf>
- Dettmer, J. (2012, Febrero). Ataques de las FARC a oleoductos perturban economía colombiana, repelen inversión extranjera. *Revista Diálogo*. Recuperado de <http://dialogo->

americas.com/es/articles/rmisa/features/regional_news/2012/02/06/aa-farc-pipelines

Escuela Superior de Guerra de Colombia. (2008, Abril). Control territorial, legitimidad y consolidación de la Política de Seguridad Democrática. *Revista Fuerzas Armadas*, Vol. LXXVI, 205. Recuperado de <http://www.cgfm.mil.co/documents/10184/24774/edicion+205.pdf/68c91add-7eae-4a1d-8e32-643fca307ddc>

Ejército Nacional de Colombia. (2015, Agosto), Operaciones Militares a Través del Tiempo. *Revista Ejército*, 178. Recuperado de <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=252473>

Forigua, E. (2006, Junio-Julio). Las nuevas guerras: Un enfoque desde las estructuras organizacionales. *Revista Papel Político*, 11(1). Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-44092006000100010&script=sci_arttext

Gutiérrez, S. (2004). Ilegalidad y Sistema Político en Colombia: la Agenda de Uribe Vélez. (2004, Julio / Agosto). *Revista Nueva Sociedad – Colombia, Tensiones y Perspectivas*. Recuperado de http://www.nuso.org/upload/articulos/3208_1.pdf

Hernández, J. (2002, Abril). La resistencia civil en caliente: una contribución a la pacificación del conflicto en Colombia. *Revista Sociedad y Economía*, 2. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99617937002>

Márquez, I. (2011, Abril). Márquez: Nunca un “post-conflicto” ha sido tan conflictivo. *Revista Arcanos*, 16. Recuperado de http://www.arcoiris.com.com/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_16.PDF

Pachón, M. (2009). Colombia 2008: Éxitos, peligros y desaciertos de la Política de Seguridad Democrática de la administración de Uribe. *Revista Ciencia Política*, vol. 29, N° 2. Recuperado de <http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v29n2/art05.pdf>

Portafolio. (2013, Mayo). Lavado de activos, el flagelo que azota Colombia. *Revista Portafolio*. Recuperado de <http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lavado-activos-flagelo-azota-colombia-72730>

Restrepo, L. (2004, Julio / Agosto). La difícil Recomposición de Colombia. (2004,). *Revista Nueva Sociedad – Colombia, Tensiones y Perspectivas*. Recuperado de http://www.nuso.org/upload/articulos/3207_1.pdf

Ronderos, M. (2010, Marzo). ¿Por qué Colombia no sale del club de los pobres? *Revista Semana*. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-colombia-no-sale-del-club-pobres/114313-3>

Semana. (2002, Abril). Las FARC vs. Álvaro Uribe. *Revista Semana*. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/las-farc-vs-alvaro-uribe/50337-3>

Semana. (2009, Agosto). Estados Unidos Utilizará en total siete bases en Colombia. *Revista Semana*. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/seguridad/articulo/estados-unidos-utilizara-total-siete-bases-militares-colombia/105908-3>

Torres, H. (2012, Enero-Junio). Derecho internacional humanitario y estatus de beligerancia. *Revista Republicana*, 12. Recuperado de <http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/viewFile/53/49>

Valencia, L. (2010, Abril). El declive de la Seguridad Democrática. *Revista Arcanos*, 15. Recuperado de http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_15.pdf

Vargas, A. (2004, Julio-Agosto). El gobierno de Álvaro Uribe: proyecto y resultados. Políticas, estrategias y doctrinas. *Revista Nueva Sociedad*, 192. Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3210_1.pdf

Vargas, A. (2010, Enero -Febrero). La Influencia de los poderes ilegales en la política Colombiana. *Revista Nueva Sociedad – Colombia, Tensiones y Perspectivas*, 225. Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3678_1.pdf

Entrevista

En la Web

El Canal de las Américas. (2015). Ospina, C., Ex Ministro de Defensa de Colombia, “*Posiblemente dinero de las FARC esté en paraísos fiscales*”: Ex ministro de Defensa de Colombia. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=f77Pyon6pog>

UN Radio. (2014). Cerda, A., Rendón, J., Kalmanovitz, S., Rocha, R. et Roa, L., *La economía ilegal en el PIB*. Recuperado de <http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/un-analisis/cy/2014/cm/6/article/jueves-de-economia-45.html>

Uribe A. (2008). *Cumbre de Río 2008 en República Dominicana (3/8) Álvaro Uribe*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=e5sSEd99Jbl>

Instituciones

En físico

Fundación Ideas para la Paz [FIP]. (2010). *Mandos medios de las FARC y su proceso de desmovilización en el conflicto colombiano: ¿Una apuesta para la paz o para la guerra?* Bogotá D.C., Colombia.

En la Web

Amnesty International. (s/f). *U.S. Policy in Colombia*. Recuperado de <http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/americas/colombia/us-policy-in-colombia>

Amnesty International. (2010). *Informe 2010 Amnistía Internacional – El Estado de los derechos humanos en el mundo*. Recuperado de https://books.google.com.ec/books?id=46PVsrYZnuoC&pg=PA148&lpg=PA148&dq=violacion+de+derechos+departamento+administrativo+de+seguridad&source=bl&ots=0gki0KWVsv&sig=_R9TmAbXLMNQI1lqbf1Wa8SzD-0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiM9v7AndvQAhXH4CYKHUyxCwkQ6AEIJDAC#v=onepage&q&f=false

Banco de la República. (2010). *Salario mínimo legal en Colombia*. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/es/indice-salarios>

Banco de la República. (2016). *Flujos de Inversión Directa – Balanza de Pagos*. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/inversion-directa>.

Banco de la República. (2016a). *Boletín de indicadores económicos*. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf>

Banco de la República. (s/f). *Índice de precios al consumidor IPC*. Recuperado de <http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico&Path=/shared/Consulta%20Series%20Estadisticas%20desde%20Excel/1.%20IPC%20base%202008/1.2.%20Por%20anno/1.2.2.%20Total%20nacional&Action=Prompt&lang=es&Options=rdf>

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2005). *El lavado de dinero en América latina: ¿qué sabemos de él?* Recuperado de <http://www.iadb.org/res/ipres/2005/docs/Chapter17spa.PDF>

Banco Mundial. (2007). *Guía de referencia para el anti lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo*. Recuperado de http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/2008/02/19/000333038_20080219042329/Rendered/PDF/350520SPANISH0101Official0Use0Only1.pdf

Banco Mundial. (2015). *Gini Index (World Bank Estimate)*. Recuperado de http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1

Banco Mundial. (2016). *Agricultura y desarrollo rural*. Recuperado de <http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.AGRI.ZS/countries?page=1>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] et Organización de Naciones Unidas [ONU]. (2010). *Impacto distributivo de*

las políticas públicas. Recuperado de <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1070/2009-2010.pdf?sequence=1>

Centro Democrático. (2015). *Advertimos sobre aumento de cultivos de coca y persistencia de narcotráfico de Farc: representante Santiago Valencia*. Recuperado de <http://www.centrodemocratico.com/articulo/advertimos-sobre-aumento-de-cultivos-de-coca-y-persistencia-de-narcotrafico-de-farc>

Centro de Estudios Latinoamericanos. (2012). *Enfermedad holandesa – El auge del sector minero energético colombiano 2000-2010*. Recuperado de <http://www.cesla.com/pdfs/enfermedad%20holandesa%20CESLA.pdf>

Centro de Investigación y Educación Popular [CINEP]. (2009). *Falsos Positivos – Balance del Segundo Semestre de 2008*. Recuperado de <http://www.alboan.org/docs/articulos/canales/alboan/InformeFalsosPos.pdf>

CINEP. (2010). *El legado de las Políticas de Uribe: Retos para el gobierno de Santos – Informe Especial*. Recuperado de <http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/5345ae03-695f-43a5-98dd-5b323dcc6863/CINEP%20%20Legado%20Uribe%20%20Retos%20de%20Santos%202010%20%20informe%20especial.pdf?guest=true>

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. (2004). *The “Patriot Plan”*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/uploads/media/638.pdf?view=1>

Corporación Nuevo Arcoíris et Fundación Avina Colombia. (2013). *Violencia colectiva y minería en Colombia: hallazgos preliminares a partir de dos estudios de caso*. Recuperado de http://mesadialogopermanente.org/wp-content/uploads/2013/05/MINERIA-Y-VIOLENCIA-COLECTIVA_21_08_2012.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas [DANE]. (2011). *Encuesta de calidad de vida 2010*. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_ECV_2010.pdf

DANE. (2012). *Pobreza Monetaria y Desigualdad 2012, por Departamentos*. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_departamentos_2012.pdf

DANE. (2013). *Encuesta de cultura política 2013*. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/bol_ECP_13.pdf

- DANE. (2013a). *Informe de resultados de las cuentas nacionales anuales años 2010 definitivo 2011 provisional*. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg_base2005/Boletin_Cuentas_Anuales_2010d-2011p.pdf
- DANE. (2015). *Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2015*. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_15_.pdf
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia [DIAN]. (2010). *Informe preliminar de rendición de cuentas 2010*. Recuperado de http://www.dian.gov.co/descargas/Rendicioncuentas/Rendicion_Cuentas_2010.pdf
- DIAN. (2011). *DIAN: Cifras Clave*. Recuperado de http://www.dian.gov.co/descargas/Rendicioncuentas/2011/Rendicion_de_cuentas_2011.pdf
- European Comission. (2012). *Evaluation of the Comission of the European Union's co-operation with Colombia*. Recuperado de https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-cooperation-ec-colombia-1315-annex1-201210_en.pdf
- European Strategic Intelligence and Security Center [ESISC]. (2010). *Colombia: an overview of the FARC's military structure*. Recuperado de <http://www.esisc.org/publications/briefings/colombia-an-overview-of-the-farcs-military-structure>
- Fedesarrollo. (2012). *Mediciones de pobreza en Colombia y seguimiento a la gestión de los logros de las familias de la Red Unidos*. Recuperado de www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Mediciones-de-pobreza-en-Colombia-Logros-Red-Unidos_VF.pdf
- FIP. (2009). *Las FARC: un año después de "Jaque"*. Recuperado de http://archive.ideaspaz.org/images/siguiendo_el_conflicto_55.pdf
- FIP. (2012). *Boletín No. 12 – Noticias sobre negociaciones Paz y Justicia Transicional*. Recuperado de <http://www.ideaspaz.org/media/website/document/012-10-2012.pdf>
- Friedrich Ebert Stiftung – Colombia [FESCOL]. (2011). *Pobreza y desigualdad. Un balance de la información disponible*. Recuperado de <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08400.pdf>
- Fundación Seguridad y Democracia. (s/f). *La violencia electoral en Colombia 1997-2006*. Recuperado de http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1402.pdf?view=1

- Gobierno de la República – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2011). *Censo de cultivos de coca 2010*. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia-cocasurvey2010_es.pdf
- Immigration and Refugee Board of Canada. (2011). *Colombia: Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), including information on criminal activities, such as drug trafficking and kidnapping; state response to criminal activity (2009 - February 2011)*. Recuperado de <http://www.refworld.org/docid/4dbfcc952.html>
- In Sight Crime. (s/f). *Perfil de las FARC*. Recuperado de <http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/farc-perfil>
- International Crisis Group. (2011). *Romper los nexos entre crimen y política local: las elecciones de 2011 en Colombia*. Recuperado de <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/latin-america/colombia/37-%20Cutting%20the%20Links%20Between%20Crime%20and%20Local%20Politics-%20Colombias%202011%20Elections%20SPANISH.pdf>
- Justicia Tributaria Colombia. (2015). *¿Para dónde se van los impuestos que usted paga?*. Recuperado de <http://justiciatributaria.co/blog/2015/06/23/para-donde-se-van-los-impuestos-que-usted-paga/>
- Minería Panamericana. (2013). *Minería ilegal en Colombia: obstáculo a la industrialización*. Recuperado de <http://www.cpampa.com/web/mpa/2013/05/mineria-ilegal-en-colombia-obstaculo-a-la-industrializacion/>
- Ministerio de Agricultura et Agronet. (2016). *Producción Nacional por producto*. Recuperado de http://207.239.251.112/www/htm3b/ReportesAjax/parametros/reporte16_2011.aspx?cod=16
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2011). *El ABC del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos*. Recuperado de <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=637>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2016). *Antecedentes –ATPDEA*. Recuperado de <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=18053>
- Ministerio de Defensa. (2007). *Política de Consolidación de la Seguridad Democrática*. Recuperado de https://www.oas.org/dsp/documentos/politicas_publicas/colombia%202.pdf
- Ministerio de Defensa. (2010). *Memorias al Congreso de la República*. Recuperado de

<https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/normatividad/EstrategiaPlaneacion/SistemaDeControllInterno/GPA/InformesDeGestion/memorias2009-2010.pdf>

Ministerio de Defensa. (2010a). *Logros de la Política de Consolidación Seguridad Democrática – PCSD*. Recuperado de https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros%20de%20Politica%20CSD%20Junio%202010.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2005). *Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables*. Recuperado de http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_vulnerables.pdf

Ministerio de Hacienda. (2010). *Anexo al mensaje presidencial: Presupuesto General de la Nación para 2010 – Sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis*. Recuperado de <http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldeLANACION/ProyectoPGN/2010/Mensaje%20Anexo%202010.pdf>

Ministerio de Justicia – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (s/f). *Características agroalimentarias de los cultivos ilícitos de coca en Colombia 2005-2010*. Recuperado de <http://www.odc.gov.co/Portals/1/modPublicaciones/pdf/OF05010510-caracteristicas-agroalimentarias-cultivos-coca-colombia-.pdf>

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2014). *FARC: No hemos cometido crímenes de lesa humanidad*. Recuperado de <http://www.fundagan.org.co/site/raiz/boletinddhhdiciembre14/paratenerencuenta.html>

Presidencia de la República et Ministerio de Defensa Nacional. (2003). *Política de Defensa y Seguridad Democrática*. Recuperado de <https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>

PROCOLOMBIA. (2015). *Régimen tributario Colombiano*. Recuperado de http://www.inviertaencolombia.com.co/images/R%C3%A9gimen_Tributario_colombiano.pdf

PROCOLOMBIA. (2016). *¿Por qué invertir en Colombia?* Recuperado de <http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia.html>

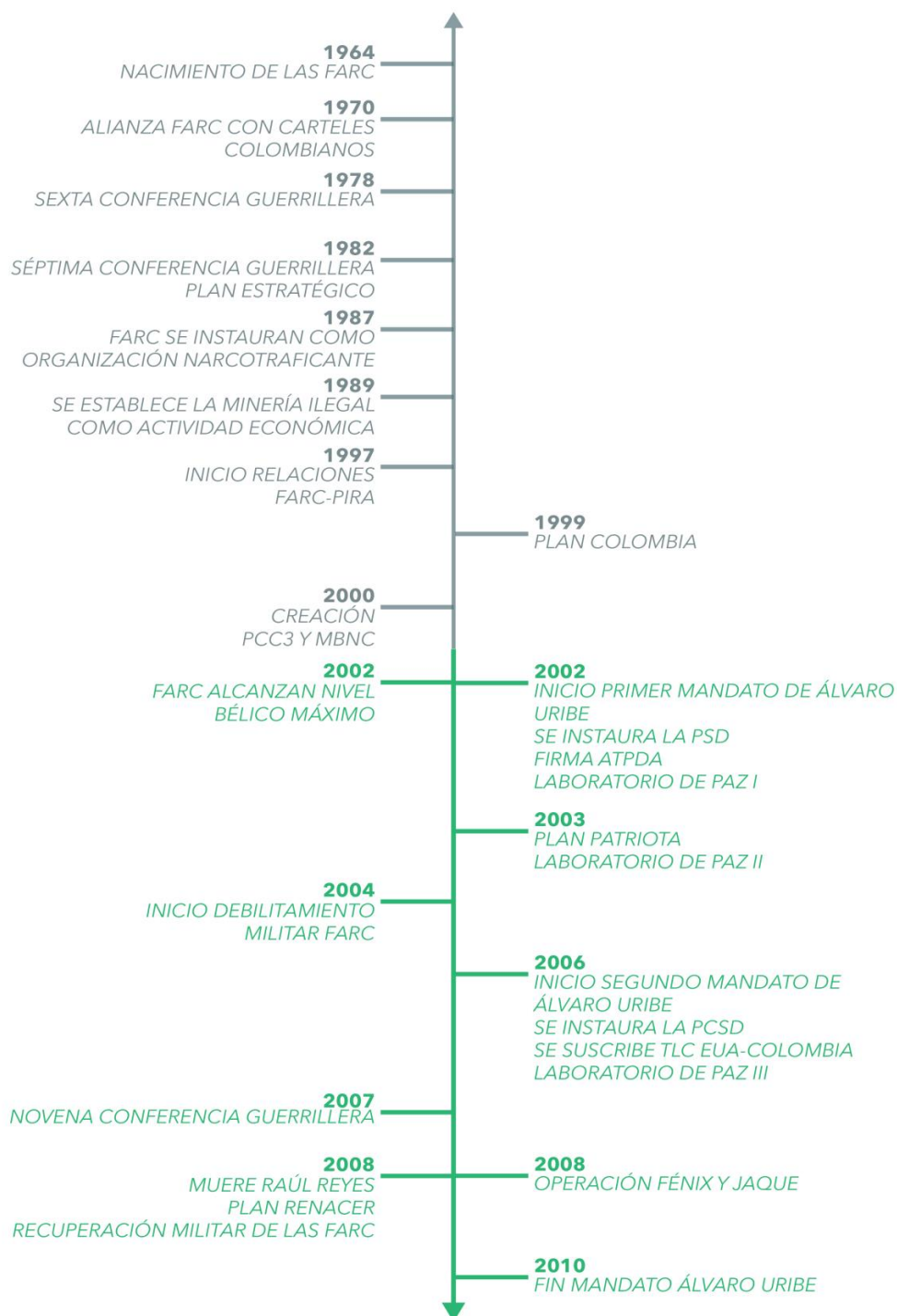
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2002). *Human development report 2002 – Deepening democracy in a fragmented world*. Recuperado de http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/263/hdr_2002_en_complete.pdf

- PNUD. (2003). *Colombia: Human Development Progress towards the Millennium Development Goals*. Recuperado de http://hdr.undp.org/sites/default/files/colombia_2003.pdf
- PNUD. (2010). *Human development report 2010 – The real wealth of nations: Pathways to human development*. Recuperado de http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf
- RCN. (s/f). ¿Cuántos hombres y armas tienen las FARC? *Noticias RCN*. Recuperado de <http://www.noticiasrcn.com/especialesrcn/conteo-hombres-farc/>
- RCN. (2013). Las Farc y el negocio de la coca. *Noticias RCN*. Recuperado de <http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/las-farc-y-el-negocio-coca>
- Stratfor. (2004). *Colombia: FARC'S Desperation move against Uribe*. Recuperado de <https://www.stratfor.com/analysis/colombia-farcs-desperation-move-against-uribe>
- Trade Map. (2016). *Exportaciones e importaciones totales Colombia – Estados Unidos*. Recuperado de http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
- Trading Economics. (2016). *Commodities*. Recuperado de <http://www.tradingeconomics.com/commodities>
- Transnational Institute. (2008). *Las FARC*. Recuperado de <https://www.tni.org/en/node/14838>
- Transparency International. (2016). *Corruption perception Index*. Recuperado de http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2002
- UNODC. (2005). Colombia – *Censo de cultivos de droga*. Recuperado de https://www.unodc.org/pdf/andean/Colombia_coca_survey_es.pdf
- UNODC. (2006). *Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia*. Recuperado de https://www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_es.pdf
- Unidad de Emprendimiento et Universidad Nacional de Colombia. (2010). *Cartilla Tributaria 2010*. Recuperado de http://www.emprendimiento.unal.edu.co/images/documentos/Boletines_y_Cartillas/Cartilla_Tributaria_Unidad_de_Emprendimiento.pdf
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2013). *Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012*. Recuperado de <http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf>

ANEXOS

ANEXO 1

LÍNEA DE TIEMPO FARC - HECHOS PRESENTADOS EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN



Fuente: Trabajo de Titulación Paula Narváez Izquierdo
Elaborado por: Paula Narváez Izquierdo